

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN
PÚBLICA



PROYECTO DE GRADO
“EL SEGUNDO GOBIERNO DE GONZALO SANCHEZ
DE LOZADA (2002-2003), ENTRE LA DEMOCRACIA Y
LA DICTADURA”

Proyecto de Grado para obtener el Título de Licenciatura

POR: DANILO STIBENS VARGAS RAMIREZ

TUTOR: LIC. DIEGO MURILLO BERNARDIS

LA PAZ – BOLIVIA

AGOSTO – 2017

DEDICATORIA

El trabajo de investigación va dedicado a mi familia, mi esposa Ivonne que es el amor de mi vida y mi hijito hermoso Josésito, a quienes amo profundamente, por ser mi impulso y fortaleza a lo largo de este proceso. También a mis hijos Nataly y Franco, por quienes tengo un gran amor y que no dejaron de alimentar mi persistencia para llegar hasta este punto.

A mis padres Tomas Vargas Kauman (+) y Eugenia Ramírez Machicado (+), quienes me dieron la vida y me educaron como un hombre de bien. A mis hermanos: Dante, Ricardo y Tomas, quienes también me impulsaron permanentemente, y al resto de mi familia quienes fueron un apoyo constante.

AGRADECIMIENTOS

Agradecer en primer lugar a Dios por darme la oportunidad de vida y poder llegar hasta esta meta, a todos mis docentes, quienes a lo largo de mi carrera supieron enseñarme y formarme en el arte de la Ciencia Política y en el área académica, sin la cual no hubiera podido hacer frente a la vida laboral.

Un especial agradecimiento a mi tutor, el Licenciado Diego Murillo Bernardis, ya que sin su ayuda, guía y colaboración no hubiera sido posible este trabajo, y a quien tengo una admiración, por toda su trayectoria profesional, académica y su sapiencia dentro de la Ciencia Política.

INDICE

Introducción.....	Pág. 1
CAPITULO I. Tematización y contextualización.	
Tematización y Contextualización.....	Pág. 5
1.1. Factores que definen el funcionamiento, estabilidad y representatividad de un estado.....	Pág. 7
1.2. Los conflictos sociales como transformadores de coyuntura.....	Pág. 10
1.3. El principio de la caída del MNR y de Gonzalo Sánchez de Lozada...	Pág. 13
1.4. La guerra del gas inicia.....	Pág. 14
1.5. Desgaste del neoliberalismo en lo social, económico y político.....	Pág. 17
1.6. Estado del arte.....	Pág. 19
1.7. Marco teórico.....	Pág. 24
1.7.1. Problema, hipótesis, objetivos.....	Pág. 27
- Pregunta de la investigación	
- Hipotesis	
- Objetivo general	
- Objetivos específicos	
1.8. Enfoque teórico.....	Pág. 28
1.9. Diseño de la investigación.....	Pág. 31
CAPITULO II. La legitimidad y representación electoral del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.	
2.1. Reconfiguración del sistema de partidos, elecciones de 2002.....	Pág. 33
2.2. Los resultados eleccionarios del 2002.....	Pág. 35
2.3. Políticas de gobierno y de Estado, del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.....	Pág. 40
2.4. Los partidos de la alianza, una imagen de cierre.....	Pág. 42
2.5. Alianzas del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.....	Pág. 44
2.6. Consecuencias estructurales-políticas de las elecciones presidenciales 2002.....	Pág. 49
CAPITULO III. Debilidad y fragmentación en la coalición de gobierno MNR-MIR-NFR.	
3.1. El origen de la crisis de octubre negro en Bolivia.....	Pág. 60

3.1.1. La concepción de “Estado” a partir de 1952.....	Pág. 60
3.1.2. El proceso democrático boliviano y el sentido de “democracia”.....	Pág. 62
3.1.3. La asociación de democracia y neoliberalismo en el imaginario político.Pág.	63
3.2. La polarización entre el oficialismo y la oposición.....	Pág.65
3.4. Emergen las fuerzas políticas indígenas.....	Pág.67
3.5. La coyuntura económica como factor de crisis institucional.....	Pág.69
3.6. El principio del fin del modelo económico.	Pág.70
3.7. El ocaso de las coaliciones de gobierno.....	Pág.73

CAPITULO IV. Políticas públicas y el declive de la efectividad gubernamental.

4.1. Políticas públicas del segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pág.	82
- Construcción y conservación de carreteras.	
- Infraestructura de riego.	
- Electrificación rural.	
- Vivienda Social.	
- Saneamiento Básico.	
- Conexiones de gas domiciliario.	
- Reestructuración productiva y financiera de las empresas.	
- Para los más pobres: Redes de Protección Social.	
- Bonosol.	
- Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).	
- Empleo de Emergencia.	
- Beca Futuro.	
- Desayuno escolar.	
- La extensión del derecho propietario rural.	
- La expansión de cadenas productivas nacionales.	
- El potenciamiento del desarrollo económico local.	
- Ampliación de Servicios Sociales.	
- Una política seria para el gas.	
- El impuestazo.	

CAPITULO V. Características dictatoriales del segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada.

5.1. Dictadura, democracia y conceptos afines.....	Pág.100
--	---------

5.2. El poder político.....	Pág.106
5.3. La guerra del gas. De febrero negro a octubre rojo.....	Pág.109
5.3.1. Cronología de los hechos.....	Pág.109
Conclusiones.....	Pág.117
Bibliografía.....	Pág.125

RESUMEN

El presente trabajo de grado, es una investigación que trata sobre el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), un gobierno elegido constitucionalmente, con el voto universal y popular, y que contaba con la legitimidad y representación electoral necesaria, un gobierno que en determinado momento mostró rasgos y características totalmente distintos a los de un gobierno democrático, el trabajo se sitúa en un contexto político y social de cambio, en cuanto a las nuevas corrientes políticas y nuevos paradigmas sociales en el país, al mismo tiempo, en medio de una crisis del sistema político estatal.

En este sentido todo cambio político - social lleva consigo mismo una fragmentación y declive de los componentes de un todo político - gubernamental, llevando a una reconstrucción del mismo, pero con otro sentido, otros paradigmas, otras ideologías y otros actores.

De tal forma se propone plantear una explicación de el por qué el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada tomó un contexto y sentido opuesto a un gobierno democrático, y culminó su mandato a tan solo poco más de un año de ser elegido.

El proyecto entonces tiene como objeto, el plantear una hipótesis de hechos que se conjuncionan para así poder dar una respuesta coherente a lo expuesto anteriormente.

SUMMARY

The present work of degree, is an investigation that deals with the second government of Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), a government constitutionally chosen, with the universal and popular vote, and that counted on the necessary electoral legitimacy and representation, a government that at a given moment showed characteristics and characteristics totally different from those of a democratic government, the work is situated in a political and social context of change, as for the new political currents and new social paradigms in the country, at the same time, In the middle of a crisis of the state political system.

In this sense, all political - social change carries with itself a fragmentation and decline of the components of a political - governmental whole, leading to a

reconstruction of it, but with another meaning, other paradigms, other ideologies and other actors.

In such a way, it is proposed to explain why the second government of Gonzalo Sánchez de Lozada took a context and a sense opposed to a democratic government, and culminated his mandate only a little more than a year after being elected. The project then has as its object, to propose a hypothesis of facts that are combined in order to give a coherent answer to the above.

PALABRAS CLAVES

1. Democracia
2. Dictadura
3. Régimen
4. Constitucional
5. Conflicto
6. Política
7. Economía
8. Social
9. Estado
10. Republica
11. Coalición
12. Empantanamiento
13. Fragmentación
14. Alianza
15. Legitimidad
16. Legalidad
17. Poder
18. Fuerza
19. Elecciones
20. Violencia
21. Concentración
22. Movimientos sociales
23. Medidas de presión

INTRODUCCION

Gonzalo Sánchez de Lozada, un potentado industrial que heredó de Víctor Paz Estenssoro el liderazgo del centroderechista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), mostró a lo largo de su trayectoria política un firme compromiso con la modernización económica de Bolivia con arreglo a un modelo nítidamente liberal que aplicó primero como ministro y luego en sus dos presidencias, su primer mandato desde el 6 de agosto de 1993 al 6 de agosto de 1997 y su segundo mandato desde el 6 de agosto de 2002 hasta su renuncia del 17 de octubre de 2003. En su primer mandato, entre 1993 y 1997, ejecutó reformas estructurales y una privatización cuyos beneficios intentó revertir en la sociedad.

En 2002 volvió a ganar las elecciones, pero la denominada guerra del gas, en la que los movimientos indígenas y obreros exigieron violentamente la nacionalización de los hidrocarburos y las fuerzas del orden respondieron con una brutal represión, terminó con su renuncia y huida a Estados Unidos en octubre de 2003. En 2005 la justicia boliviana le procesó por el delito de "genocidio".

En Bolivia a menudo los bolivianos cuando asistimos al enfrentamiento político que luego llega a desembocar en una crisis aguda del sistema, en lugar de solucionar nuestros antagonismos, más bien solemos optar por la vía del retroceso a un estadio anterior de paz artificial hasta que vuelva a surgir otro conflicto. En términos coloquiales se suele decir: Siempre estamos a punto de caer en el precipicio para volver a construirlo todo de nuevo, en ese momento optamos por volver atrás.

Esta impresión no es nueva en el mundo académico boliviano. de hecho mucho antes y con un análisis del periodo del nacionalismo revolucionario en Bolivia de mediados del siglo pasado, en el periodo que gobernó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (1952-1964), el país no asistió a la solución completa de sus antagonismos de antaño, sino que lo que ocurrió fueron una serie de medidas de corte social que giraron alrededor de algo más importante para los gobernantes de turno que era incluir su proyecto de país al nuevo orden global que comenzaba a emerger producto del final de la Segunda Guerra Mundial.

En el caso que aquí nos compete, de hacer un breve balance de la llamada Guerra del Gas de octubre de 2003, podría decirse que de alguna forma asistimos a lo que pudo

ser la solución final a nuestros antagonismos, pero desafortunadamente lo que logramos estuvo más cerca de lo que la razón instrumentalista siempre obtiene; es decir, una solución parcial a algo estructural.

En lo que sigue, me centraré en una de las aristas de este conflicto social que tiene que ver con la cuestión de la represión legítima o uso de la fuerza legítima con la que cuenta todo gobierno democrático, cómo se la entendía en ese momento al sistema de partidos y en qué llegó a desembocar producto de la experiencia vivida por la Guerra del Gas.

El conflicto del 2003 de alguna forma propició un momento de quiebre entre lo que se conoce como la democracia representativa de partidos e hizo mucho más evidente el hecho de que la cuestión de la representación política se aceleraba hacia una personalización de la política, no había mucho que hacer al respecto porque ni siquiera los mismos partidos de entonces supieron calibrar la magnitud de los hechos que se avecinaban.

Un elemento importante para que se desencadenara la Guerra del Gas en Bolivia, fue sin duda la crisis política del sistema de partidos que en ese entonces dominaba la dimensión política, la legitimidad ciudadana era repartida de forma marginal entre partidos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); ninguno de ellos lograba captar más del 30% de apoyo electoral por sí solos, y de manera repetida desde 1982 hasta el 2002 tuvieron que apelar a la formación de coaliciones políticas para gobernar con otros partidos.

La característica de estas coaliciones no se daba en términos programáticos, sino bajo lógicas del reparto de puestos de poder, y una administración cuya principal disposición era estar incluido en el orden mundial sin ningún matiz y sin importar los costos políticos y económicos que ello pudiera traer.

Es en este contexto en el que se ven agudizarse dos procesos paralelos en los partidos políticos de forma interna y externa: la burocratización y la personalización de la política.

Primero en lo interno, acerca de la burocratización, a este fenómeno hay que entenderlo como aquel en el que el partido antepone su propia supervivencia a los intereses de los ciudadanos, en este contexto el partido se enfrenta a un problema

mayor porque deja de ejercer la representación de la ciudadanía, siendo que ahora le interesa principalmente sus propios intereses.

Es en este momento en que se mezclaron dos condiciones negativas, las ambiciones y el peso de su organización interna en los partidos, de tal suerte que se llegó a constituir en Bolivia una clase política que vivía del sueldo que le proporcionaba el Estado y además cuya lealtad no la tenía con el país sino con el partido político que lo había llevado al sitio que ocupaba y del cual dependía su continuidad laboral.

Esta sumisión del empleado con el partido complejiza aún más el rol del líder del partido, porque este debe buscar no sólo ser un buen líder político que sepa conectar con la sociedad, también debe ser un buen jefe burocrático que maneje inteligentemente el juego de incentivos y castigos en su administración intentando evitar que esto repercuta negativamente en el partido. Este panorama entonces sirve para explicar lo dicho en el párrafo anterior respecto a que los partidos políticos se van alejando cada vez más de la ciudadanía por una cuestión de mera sobrevivencia interna.

Segundo, en lo externo, acerca de la personalización de la política, respecto a que la era de la democracia representativa de partidos estaba en retirada en parte producto del fenómeno arriba descrito, en el caso de Bolivia el descrédito vino también porque en líneas generales para la ciudadanía el programa del partido como propuesta carecía de la seriedad necesaria porque los pactos políticos se daban bajo otros parámetros.

En este contexto de crisis política se hizo patente la advertencia lapidaria en el sentido de que la era de la democracia de partidos ha pasado porque aunque sigan existiendo las siglas como tales ya no importan demasiado dado que quien realmente sustenta la atracción del electorado no es el partido sino el candidato.

Entonces, en la relación ciudadanía-partidos nos enfrentamos en ese momento a una relación negativa para las organizaciones políticas en las que la gente desconfiaba cada vez más de estos porque sienten que sus intereses ya no son representados en la magnitud que profesan estos en tiempos de campaña electoral. Así la gente comienza a impulsar otro tipo de formas de participación política, que en el contexto histórico que se revisa aquí vino precedido por los llamados movimientos sociales, como canales de representación del descontento general con el sistema democrático

representativo de partidos; vaciando de esta forma ese campo de la representación política en la que los partidos aglutinaban las respuestas sociales y poniendo en entredicho a toda la clase política gobernante de ese entonces.

“EL SEGUNDO GOBIERNO DE GONZALO SANCHEZ DE LOZADA (2002-2003), ENTRE LA DEMOCRACIA Y LA DICTADURA”

CAPÍTULO I

Tematización y Contextualización

Las elecciones del 30 de junio de 2000 se han realizado en un complejo contexto de crisis económica y social, pero principalmente, en medio de una profunda crisis de credibilidad en los actores centrales del sistema político. *José Antonio Rivera, “La Evolución Político Institucional en Bolivia entre 1975 a 2005”*

Los problemas de credibilidad y confianza en los partidos políticos tienen que ver con un déficit de institucionalidad y transparencia en la función pública, una incapacidad estatal de atender las crecientes necesidades y demandas sociales y, finalmente, con el comportamiento de una elite política, que se ha concentrado en disputar espacios de decisión, desatendiendo sus principales funciones como son la representación, la mediación o la expresión de intereses de la sociedad.

La desconfianza en la política y particularmente en sus actores ha provocado una mayor recurrencia a medidas de presión y movilización para lograr conquistas sociales y sectoriales. Reforzando la tendencia a la auto representación social (Lazarte 2002) y marginando las posibilidades de intermediación de los partidos políticos. Por ello, la acumulación de conflictos sociales y su agudización entre el 2000 y 2001 han trascendido el plano meramente social, para adoptar un cariz político y de cuestionamiento al sistema democrático.

Esta situación se ha reflejado también en los resultados del reciente proceso electoral nacional del 30 de junio de 2002 en el que se ha puesto de manifiesto, no un rechazo a la democracia ni al proceso electoral en sí mismo el ausentismo en la última elección alcanzó al 27.9%, ligeramente menor al de 1997, sino más bien, ha expresado la necesidad de un cambio en la composición del sistema de partidos.

Ciertamente, desde la regularización de la práctica electoral en 1985, tres organizaciones partidarias han ocupado permanentemente el centro del escenario

político: MNR, ADN y MIR concentrando alrededor del 60% del electorado. Consecuentemente, la definición de la titularidad del poder, ha estado básicamente en manos de estas tres expresiones partidarias. Paralelamente a esto, desde principios de los noventa, también han incursionado en el escenario político la Unidad Civica Solidaridad (UCS) y Conciencia de Patria (CONDEPA) captando entre ambos aproximadamente el 30% del electorado nacional y participando como socios minoritarios de las distintas coaliciones gubernamentales. Y finalmente, cabe señalar que en el sistema de partidos, persisten expresiones políticas más pequeñas y con escasa trascendencia en el ámbito de decisiones como el Movimiento Bolivia Libre (MBL), el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), la Democracia Cristiana (DC), la Izquierda Unida (IU), entre otras.

Sin embargo, las elecciones del 2002 han modificado sustancialmente la composición de este sistema de partidos. En primer lugar, han revelado la presencia de dos nuevas fuerzas políticas importantes como el Movimiento al Socialismo (MAS) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) que obtuvieron el segundo y tercer lugar en la preferencia electoral. En segundo lugar, han surgido otras expresiones políticas alternativas que de alguna manera también han representado la necesidad de renovación y cambio en la política, como el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP), Libertad y Justicia (LyJ) y el Movimiento Ciudadano para el Cambio (MCC), pero que no gozaron de un importante apoyo ciudadano, ya que obtuvieron el 6.1% el 2.7% y el 0.6% respectivamente. Y, finalmente se produjo la declinación y casi desaparición de algunas fuerzas políticas que tradicionalmente ocuparon el escenario electoral como ADN, UCS y CONDEPA.

En el caso de ADN, su performance electoral descendió de un 22.3% obtenido en los comicios de 1997 al 3.4%. La UCS que obtuvo el 16.1% el 97 apenas logró el 5.5% y CONDEPA que había ocupado el tercer lugar en esa misma elección con el 17.2% descendió al 0.4%.

En tanto que, el MNR y el MIR lograron, en términos generales, mantener su presencia en el escenario político. La votación más alta del MNR se registró en 1993 con el 33.8% y la más baja el año 97 con el 18.2%.

De esta manera, el reciente proceso electoral concentró más del 80% de la votación nacional en cuatro fuerzas políticas: el MNR, el MAS, la NFR y el MIR, y en mucha menor medida el MIP, la UCS y la ADN pero que, dadas las difíciles condiciones de negociación parlamentaria, estas fuerzas pequeñas también logran influir con su votación en la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición.

Pero además, es necesario señalar que esta recomposición política tiene mayor relevancia en la medida en que se ha introducido el componente ideológico. La presencia del MAS (y en menor medida el MIP), con un discurso y una actitud política claramente contestataria, ha polarizado el escenario político, introduciendo un debate plural y la presencia de una diversidad social y cultural que se mantuvo formalmente al margen del sistema político. Por lo tanto, un sistema de partidos boliviano que hasta hace poco podía ser caracterizado como multipartidista moderado actualmente incluye el componente de la polarización.

Con todo, en la presente reflexión nos concentraremos en analizar las causas de la recomposición del mapa político haciendo hincapié en algunos de los partidos relevantes. Nos detendremos más detalladamente en los casos del Movimiento al Socialismo y en Nueva Fuerza Republicana, ya que se trata de expresiones políticas nuevas que en verdad se han constituido en una "sorpresa" electoral y, también en el caso de dos partidos con antigua trayectoria política como el MNR y la ADN. María Teresa Zegada Claire. (2002). Elecciones Presidenciales 2002. La Paz Bolivia: Garza Azul.

1.1. Factores que definen el funcionamiento, estabilidad y representatividad de un estado.

Tres factores definen el funcionamiento, la estabilidad y la capacidad representativa de un Estado. El primero es el marco general de fuerzas sociales: la correlación entre las diferentes coaliciones, dominantes y subordinadas, que se disputan la reconfiguración del capital estatal, esto es, la capacidad para influir sobre las decisiones en cuestiones de interés común. En segundo lugar está el sistema de instituciones y normas políticas que arbitran la coexistencia de fuerzas sociales jerarquizadas. De hecho, este marco institucional es una materialización de la

correlación de fuerzas fundacional que da lugar a un régimen estatal particular y de los medios por los que se reproduce legalmente. En tercer lugar, cada Estado depende de una estructura de categorías de percepción comunes, una serie de creencias movilizadoras que generan cierto grado de conformidad social y moral entre gobernantes y gobernados y que cobra forma material en el repertorio cultural y los rituales del Estado. Álvaro García Linera. (2005). Crisis del Estado y Poder Popular. La Paz Bolivia: Garza Azul.

Cuando esos tres componentes de la vida política de un país son operativos, se puede hablar de una correspondencia óptima entre régimen estatal y sociedad. Cuando esos factores se ven suspendidos o resquebrajados nos hallamos ante una crisis del Estado, manifestada en el antagonismo entre el mundo político y sus instituciones, por un lado, y las acciones opuestas de coaliciones sociales de gran alcance, por otro. Esto es precisamente lo que ha venido sucediendo en Bolivia desde el año 2000 aproximadamente. Los sucesivos levantamientos y sublevaciones populares que han sacudido el país desde el año 2000 pueden entenderse sobre todo como síntomas de una profunda crisis del Estado. Álvaro García Linera. (2005). Crisis del Estado y Poder Popular. La Paz Bolivia: Garza Azul.

Esta crisis tiene un doble carácter: a corto plazo, es una crisis del modelo neoliberal y de la base social e ideológica sobre la que se ha construido en Bolivia. Pero también es, una crisis institucional e ideológica del Estado republicano basado desde su fundación en una relación colonial con la mayoría indígena del pueblo boliviano. Estos aspectos en los ámbitos social, institucional e ideológico fueron protagonistas en un contexto anterior y posterior al gobierno segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, durante el periodo 2002 a 2003.

Desde poco después de la fundación de la república, esta relación de fuerzas se ha visto desafiada desde abajo y el acendrado elitismo del Estado neoliberal, se ha puesto en cuestión cuando nuevas formas de organización y politización han invertido la situación de las clases subalternas. Las protestas y bloqueos de carreteras de abril y septiembre de 2000, julio de 2001 y junio de 2002 marcaron la reconstitución regional de movimientos sociales capaces de imponer medidas

políticas, regímenes legales e incluso modificaciones de la distribución del excedente social gracias a la fuerza de sus movilizaciones. Leyes como la Ley 2029 de agua potable y alcantarillado sanitario del 29 de octubre de 1999, que pretendía redefinir la propiedad de las aguas, y las que posibilitaban la venta de empresas del Estado a manos privadas, aumentos de impuestos, etc., fueron anuladas o modificadas bajo la presión de los movimientos sociales y los levantamientos populares. La legislación financiera fue enmendada en línea con las demandas nacionales de grupos populares organizados (comunidades indígenas, jubilados, cultivadores de coca, cooperativas mineras, policías) que demostraban el surgimiento de bloques sociales, los cuales, al margen del Parlamento o con apoyo desde éste tras el éxito del MAS en 2002, contaban con fuerza suficiente para bloquear la puesta en práctica de los planes gubernamentales e imponer la redistribución de los recursos públicos por medios no parlamentarios. Álvaro García Linera. (2005). Crisis del Estado y Poder Popular. La Paz Bolivia: Garza Azul.

En 2000 la distancia entre expectativas y realidades iba empujando al conflicto con la autoridad estatal a una población decepcionada. El inicio de una modernidad sólo había dado lugar a una explotación intensificada y a un incremento del trabajo informal; del 55% al 68% en veinte años; la de mejora social, a una mayor concentración de la riqueza y a un refinamiento de las formas de discriminación étnica. La privatización, especialmente la de los hidrocarburos, lejos de expandir el mercado interno, provocó una fuga acelerada de los beneficios a manos extranjeras. Esta discrepancia entre los planes oficiales y la realidad vivida ha hecho a grandes sectores de la población muy receptivos a nuevas lealtades y creencias movilizadoras. Entre éstas están las reivindicaciones etnonacionales de las masas indígenas, que han dado lugar a una especie de nacionalismo indígena en la población aimara del altiplano; la recuperación por el Estado de los recursos públicos privatizados (agua, hidrocarburos); y la ampliación de la democracia y la participación social mediante el ejercicio de prácticas políticas no liberales de tipo colectivo y tradicional (comunidad indígena, sindicatos, etc.). Estas convicciones han desplazado activamente a las lealtades hacia la ideología liberal y privatizadora del

Estado. Álvaro García Linera. (2005). Crisis del Estado y Poder Popular. La Paz Bolivia: Garza Azul.

En las épocas revolucionarias las sociedades se fragmentan en coaliciones sociales con propuestas, discursos, líderes y programas de poder político antagonistas e incompatibles entre sí. Esto da lugar a ciclos de protesta, oleadas de movilizaciones seguidas por retiradas, que sirven para demostrar la debilidad de los que ejercen el poder (Hugo Banzer entre abril y octubre de 2000 y junio de 2001; Tuto Quiroga en enero de 2002 y Sánchez de Lozada en febrero y octubre de 2003). Tales protestas también sirven para influenciar a otros sectores o incitarlos a utilizar la movilización de masas como mecanismo para defender sus reivindicaciones (profesores, jubilados, campesinos sin tierra, estudiantes). Al mismo tiempo, esas movilizaciones fracturan y desestabilizan la coalición social del bloque dominante, dando lugar a reacciones en contra (el llamado y creciente cívico-político-empresarial en el este del país), que a su vez produce otra oleada de movilizaciones, generando un proceso de inestabilidad y turbulencia política que se retroalimenta. No toda época revolucionaria culmina en una revolución, entendida como un cambio de las fuerzas sociales en el poder, que debería ir precedida por una situación insurreccional. Hay épocas revolucionarias que conducen a una restauración del antiguo régimen (golpe de Estado-regímenes de facto), o a una modificación negociada y pacífica del sistema político mediante la incorporación parcial o sustancial al bloque de poder de los insurgentes y sus propuestas de cambio. Álvaro García Linera. (2005). Crisis del Estado y Poder Popular. La Paz Bolivia: Garza Azul.

1.2. Los conflictos sociales como transformadores de coyuntura.

En función a lo anterior expuesto, estos hechos sociales no sólo representan tensiones entre grupos sociales, disonancias entre la sociedad y el Estado o expresiones de malestar o esperanza, sino que también son formas de ejercer la ciudadanía, son medios para ampliar y conseguir derechos individuales y colectivos, y son también procedimientos para conquistar o defender privilegios de grupos.

En cierta medida, los conflictos sociales reflejan la dinámica correlación de fuerzas de los actores sociales y políticos en su interacción pública. Por ello, la represión de

los movimientos sociales por parte de gobiernos tanto democráticos como dictatoriales, permiten visualizar las razones por las cuales se inician estas represiones tan duras y sangrientas, y las desigualdades que aquejan a una sociedad, pero también la falta o debilidad de mecanismos institucionales que permitan resolverlos de otra manera que no sea la represión antes de que se manifiesten en los espacios públicos y, sobre todo, antes de que vulneren los derechos de otros ciudadanos, que es algo que suele ocurrir cuando los actores apelan a la violencia.

Durante las últimas cuatro décadas, Bolivia ha atravesado profundas transformaciones en lo político, económico, social e institucional, como ser: la reinstauración de la democracia, las acciones de corte neoliberal, incremento del PIB, incremento del ingreso por IDH, incremento de la explotación de los hidrocarburos, la pérdida de legitimidad de los partidos políticos tradicionales, entre otros, lo cual a su vez ha reconfigurado los escenarios, los actores, las demandas y las reglas de juego dentro de las cuales se desarrollan los diferentes escenarios y coyunturas, entre: demandas, imposiciones, legalidades, conflictos sociales y su respectiva represión.

A esto debe añadirse que nunca antes en nuestro país, desde el retorno de la democrática en 1982, se dio enfrentamientos tan violentos que afectan e involucran a porciones tan grandes de la sociedad como en el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003). Estos sucesos nos muestran un panorama de deterioro de los mecanismos institucionales, que son cada vez menos capaces para canalizar y resolver de forma pacífica los conflictos sociales.

Se observa también la emergencia de nuevos actores con nuevas demandas y nuevas maneras de plantearlas, pero lo que no cambia es la misma forma y los mismos instrumentos de represión que se utilizan tanto en gobiernos democráticos como en gobiernos de dictadura. Lo que queda claro es que se hace necesario encontrar y promover nuevos escenarios de concertación para la convivencia pacífica a partir, sobre todo, del reconocimiento entre los diversos grupos y actores que existen o han surgido recientemente en Bolivia y los intereses y expectativas que representan.

Es necesario para entender mejor, las razones que llevan a un tipo de gobierno como es el democrático, a adoptar las mismas características de represión de una dictadura, realizar una comparación de algunos aspectos de ambas.

Ahora bien, la proporción de los eventos registrados en los principales centros urbanos del país es muy parecida a la de los dos periodos anteriores, en cambio, la de aquéllos que tienen por escenario el área rural experimenta una caída, pero mucho más importante es el aumento del porcentaje de conflictos que abarcan a la totalidad del país. A nivel departamental, fue en La Paz donde sucedieron la mayor parte de los eventos, seguido por Cochabamba y Oruro y Potosí, y en menor proporción Santa Cruz.

Los protagonistas más importantes de los conflictos fueron los sectores medios; en este caso, destacan los estudiantes, los empleados públicos, el magisterio urbano y los bancarios. En segundo lugar tenemos a los obreros, especialmente los fabriles y los mineros. También podemos mencionar al sector denominado ciudadanía en general como ser empleados de empresas privadas, comerciantes minoristas informales, gremiales, entre otros.

Una de las características de esta época fue que la mayor parte de los conflictos giraron en torno a reivindicaciones de tipo socio-económico, y por otro lado de tipo cívico, político-institucional y coyuntural, exigiendo mayores libertades democráticas y demandas de tipo jurídico o relativas a los Derechos Humanos, abogando también por el cambio de las leyes y normas dentro el país.

También fueron importantes los reclamos por mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de consumo o debido al incremento en el costo de la vida.

También podemos mencionar a las luchas sociales, casi siempre exigiendo una mayor participación ciudadana en designaciones, destituciones o cambio de funcionarios públicos.

También durante esta coyuntura fueron las huelgas la principal forma en que se visibilizaron los conflictos sociales en el país. Otra forma frecuente de los conflictos fueron las marchas y manifestaciones.

Este periodo, que agrupa a un buen número de gobiernos de facto o dictatoriales, también supuso restricciones autoritarias a las libertades democráticas y a los Derechos Humanos, por lo cual, no sorprende que la mayor parte de los conflictos sociales en Bolivia hayan sido del tipo pasivo, aunque en menor proporción que en el periodo anterior.

En relación al actor catalogado como adversario por los grupos que lideran conflictos, se observa que el Estado a nivel central lo fue en mayor medida que el resto, y en menor proporción las reparticiones estatales a nivel local, las empresas del Estado y la empresa privada. Raúl Peña U. (2012). 30 años de Democracia en Bolivia. La Paz Bolivia: Pagina Siete.

1.3. El principio de la caída del MNR y de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El triunfo del MNR en las elecciones del 2002 olía a derrota. Por primera vez en la historia desde Constantino Lima, uno de los primeros candidatos indígenas en las elecciones de los 80 dos postulantes originarios tenían opciones claras de tomar el poder vía elecciones.

Los candidatos de los partidos tradicionales, Gonzalo Sánchez de Lozada y Manfred Reyes Villa, rondaban por separado entre el 15 y 20% del apoyo popular, pese a la maquinaria mediática que tenían. En cambio, los candidatos del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y el Movimiento Al Socialismo- Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Felipe Quispe y Evo Morales, con pocos recursos y aparato, tenían cerca del 30% del electorado. Raúl Peña U. (2012). 30 años de Democracia en Bolivia. La Paz Bolivia: Pagina Siete.

Estos datos no sólo reflejaban el descontento de la sociedad con la llamada partidocracia. También comenzaban a mostrar la recuperación de la autoestima de los pueblos indígenas, expresando su confianza, a través del voto, en alguien que se parecía a cada uno de ellos. Raúl Peña U. (2012). 30 años de Democracia en Bolivia. La Paz Bolivia: Pagina Siete.

Tras el acto eleccionario, el candidato presidencial del MAS se puso a centímetros de Palacio. El candidato del MNR, Sánchez de Lozada, ganó las elecciones con el

22,5% y el MAS quedó con el 20,9%. Por primera vez en la historia del país, un candidato indígena estaba tan cerca de la presidencia del país; en ese entonces, el segundo tenía la opción constitucional de ser presidente en el Congreso si el primero no lograba el apoyo electoral del 50% más un voto.

Quispe pidió a Morales hacer alianzas en el Congreso y pelear la Presidencia. Morales prefirió postergar sus aspiraciones presidenciales para las elecciones siguientes. Y sucedió lo previsto, los partidos tradicionales se aliaron en torno a Sánchez de Lozada, ya sea por voluntad propia u obligación, como confesó Manfred Reyes Villa cuando dijo que apoyó a Goni por imposición de la embajada de Estados Unidos. Esa revelación explicó el cambio de postura de sus colegas políticos, quienes tras la campaña bajo la consigna de todos contra el MNR, terminaron aliándose para cerrar el paso al candidato indio.

La agonía de la partidocracia se agudizaba. La mayoría de la población no perdonaba la subasta del patrimonio nacional, vía capitalización, realizada durante la llamada época lúcida del neoliberalismo (1985-1997); tampoco que hayan convertido la política en negocio familiar y práctica corrupta de acumulación de fortuna y reproducción de poder en pocas manos.

Se habían eclipsado medidas positivas como la participación popular y la descentralización, que abrieron las puertas de la administración del Estado a las mayorías. A esas alturas, la revisión de la capitalización había descubierto la estafa y el poder de las transnacionales petroleras en Bolivia, las que de cada 100 dólares se llevaban más de 80. También se había descubierto que estas empresas habían tenido acceso a información privilegiada gracias a que algunos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) les habían facilitado datos para beneficiarse con empleos y comisiones millonarias. Raúl Peña U. (2012). 30 años de Democracia en Bolivia. La Paz Bolivia: Pagina Siete.

Esta sumisión de la oligarquía boliviana a las petroleras, a los organismos financieros internacionales y a la embajada de Estados Unidos generó reacción en la dermis social, que luego se tradujo en indignación. Esta reacción hormonal, si vale el término, fue muy bien interpretada por intelectuales de izquierda, periodistas,

activistas, movimientos sociales, cuando vislumbraron el advenimiento del nuevo tiempo sobre los hombros del nuevo sujeto histórico: el boliviano indígena originario campesino. Raúl Peña U. (2012). 30 años de Democracia en Bolivia. La Paz Bolivia: Pagina siete.

1.4. La guerra del gas inicia.

En este contexto estalló la “guerra del gas” en octubre de 2003. Surgió de una manera circunstancial, el lunes 8 de septiembre de 2003 en instalaciones de radio San Gabriel, ubicadas en El Alto, donde la Federación de Campesinos de La Paz declaró una huelga de hambre en demanda de la libertad de uno de sus dirigentes, Edwin Huampo, quien había sido encarcelado por haber participado en un acto de justicia comunitaria que concluyó con la muerte de dos presuntos ladrones de ganado, quienes habían sido linchados por pobladores de una comunidad en la provincia Los Andes del departamento de La Paz.

La dirigencia, tras una marcha de campesinos en la sede de Gobierno, amplió sus demandas y pidió cumplimiento de los convenios de la Isla del Sol, firmados en 2002, los cuales exigían básicamente libertad para Huampo, abrogación de la Ley 264 del 31 de julio de 2012, Ley del sistema nacional de seguridad ciudadana “para una vida segura”, e indemnización a los familiares de los campesinos fallecidos y heridos en los diferentes conflictos sociales.

El problema se agravó cuando campesinos bloquearon la carretera La Paz-Sorata, a donde habían llegado un centenar de turistas extranjeros para la fiesta patronal de esa población turística.

En ese intento se produjo la masacre de Warisata, el sábado 20 de septiembre de 2003. Aquel día, fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas, dirigidas por Carlos Sánchez Berzaín, tomaron el control de la carretera bloqueada.

La acción de rescate terminó con seis muertos, entre ellos una niña, además de un militar asesinado. La violencia desatada en Warisata unió al movimiento campesino con la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto, que se declararon en emergencia y bloquearon calles el 10 de octubre, justo el día que la democracia

cumplía su mayoría de edad, 21 años. En ese momento surgió la consigna o el discurso sensible para aglutinar a todas las fuerzas sociales y políticas que buscaban el cambio: no a la venta de gas a Chile, nacionalización de los yacimientos gasíferos, Asamblea Constituyente y refundación del Estado. El presidente que había sido uno de los artífices de la enajenación de YPFB, diez años después, era exigido a recuperar esos recursos naturales en beneficio de Bolivia. Raúl Peña U. (2012). 30 años de Democracia en Bolivia. La Paz Bolivia: Pagina siete.

El presidente que había facilitado, diez años antes, la presencia de un indígena en la Vicepresidencia se negaba a abrir las puertas del poder de par en par para que entren los nuevos actores.

Entre el 10 y 17 de octubre, el Gobierno de la coalición, conformada por el MNR, MIR, NFR y UCS, protagonizó la mayor masacre de la era democrática, causó 67 muertos (según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y más de 80 según otras instituciones como el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA) y cerca de 300 heridos. La mayoría de las víctimas había salido a marchar y bloquear las calles frente a un Ejército movilizado con artillería e infantería.

Probablemente, los movilizados no se dieron cuenta esos días de que lo que estaban haciendo iba a cambiar el destino del país.

El martes 14 de octubre, Mesa hizo una jugada de ajedrez político cuando declaró públicamente, tras percatarse de la gravedad de los hechos, que renunciaba al Gobierno pero no a la vicepresidencia. Esta posición fue letal para la caída de Goni, pues demostró el resquebrajamiento de la estructura interna del Gobierno.

El miércoles 15 de octubre, la embajada de Estados Unidos en Bolivia expresó su apoyo al “gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada”. El viernes 17 de octubre, el vicepresidente del Gobierno del MNR, Carlos Mesa, juró como presidente en reemplazo de Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos dejando a un país enlutado, pero con la esperanza de construir un nuevo Estado y una nueva sociedad.

Mesa asumió el mando con la llamada agenda de octubre: nacionalización del gas, Asamblea Constituyente y nuevo Estado. Sin embargo, su falta de decisión para

inclinarse por los marginados y querer mantener equilibrios en un momento que daba para jugarse, le costó el mando.

Fue asfixiado por los dos extremos: por un lado, la extrema derecha que había sido desplazada del poder, y la extrema izquierda que exigía el nacimiento del nuevo Estado cuanto antes. Para peor, Mesa tenía Palacio, pero no el poder. Asumió el gobierno con el Congreso donde Predominaban los diputados y senadores cuyos partidos habían sido expulsados por las masas movilizadas.

Pese a esta adversidad, en la gestión de Mesa se reformó la Constitución, en la que se incluyó La Asamblea Constituyente y el referéndum. No obstante, no pudo concluir el período que le restaba. El referéndum sobre el gas no fue suficiente; su gestión avanzaba a diez kilómetros por hora, la historia a 100.

Al final Mesa tuvo que renunciar a su mandato en julio de 2003, agobiado por las presiones; lo reemplazó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien tuvo como misión solamente organizar las elecciones nacionales de diciembre de 2005. Raúl Peña U. (2012). 30 años de Democracia en Bolivia. La Paz Bolivia: Pagina siete.

1.5. Desgaste del neoliberalismo en lo social, económico y político.

Todos los acontecimientos ocurridos durante la coyuntura de las dictaduras en Bolivia y las que se produjeron durante y después de la recuperación de la democracia a partir de 1982, desembocaron de forma progresiva hacia finales de los 90” en varios factores, económicos, políticos y sociales que de alguna manera cambiaron las características propias de un gobierno elegido democráticamente, es así que el último gobierno de Sánchez de Lozada, del 7 de agosto de 2002 al 17 de octubre de 2003, durante su segundo mandato presidencial, trató de retomar el curso de las reformas estructurales y el modelo económico que había empezado a implementar durante su primera gestión. Sin embargo, el panorama social resultó ser muy diferente al que prevalecía durante aquella primera ocasión.

Cabe mencionar, por ejemplo, que durante esta coyuntura creció el desencanto entre la población en torno al modelo neoliberal, sobre todo a partir de las críticas a la

capitalización realizadas sistemáticamente, tanto desde el gobierno como desde las organizaciones sociales, durante los gobiernos de Hugo Bánzer y Tuto Quiroga.

De esta manera, a pesar de que el país había multiplicado sus reservas de gas de 60 trillones de pies cúbicos en el año 2000 a 78 trillones de pies cúbicos en 2002 (*datos INE*) y desarrollado un potencial significativo para situarse como un núcleo energético en el continente, se culpaba al presidente Sánchez de Lozada por la supuesta pérdida de nuestro recurso natural más importante, el gas, ante las transnacionales. Por otro lado, y a diferencia de su primera gestión, intelectuales independientes y militantes de la izquierda no fueron tomados en cuenta dentro del gobierno, por lo que debió abrirse incluso a los partidos que lo combatieron, como el MIR y NFR, a fin de tener una base parlamentaria sólida.

A lo expuesto debe sumarse la crisis económica y fiscal, agravada por un manejo inadecuado de la reforma de pensiones en el gobierno de Bánzer y la reducción de los sembradíos de coca en el Chapare. Un momento extremadamente crítico se produjo en febrero de 2003, cuando al presentarse el proyecto de Ley Financial o Presupuesto General de la Nación, se propuso una nueva reforma tributaria que pretendía gravar en mayor proporción los ingresos más altos, lo que fue utilizado como pretexto para un levantamiento policial seguido de manifestaciones que derivaron en actos de vandalismo ante la ausencia de mecanismos de control social. La agitación social aumentó progresivamente, ocasionando, en octubre de 2003, la renuncia del Presidente. Los conflictos surgidos a raíz de estas tensiones sociales derivaron en enfrentamientos entre la población y la Policía e incluso con las Fuerzas Armadas, con el saldo de numerosos muertos y heridos.

En comparación con los periodos previos, durante el segundo y breve gobierno de Sánchez de Lozada el promedio de conflictos nuevos por mes se incrementó, la mayoría de los eventos se desarrollaron en los principales centros urbanos del país, en tanto que al área rural ocurrieron con menos intensidad, así mismo, los conflictos de alcance nacional presentaron una crecida y frecuencia con relación a la época entre 1982 y 2000.

Como es habitual, la mayor parte de las acciones conflictivas tuvieron como escenario a los departamentos del eje Central de Bolivia: Santa Cruz, La Paz, y Cochabamba, también destacaron los departamentos de Oruro y Potosí.

La mayor parte de los grupos en conflicto optaron por las marchas y manifestaciones como medidas de presión, y si bien las tomas u ocupaciones de instituciones y motines ocupan el segundo lugar en importancia, estas son notablemente más frecuentes que en anteriores coyunturas, a estas le siguen las huelgas de hambre, los bloqueos de vías de comunicación en los centros urbanos y en el área rural, y las huelgas laborales por tiempo definido.

El Estado a nivel central fue el destinatario de la mayor parte de los reclamos y demandas de los grupos en conflicto, y en menor proporción lo fueron las alcaldías, las empresas estatales, y los aparatos del estado a nivel local.

Entre los años 2002 - 2003 Bolivia sufrió graves crisis que afectaron profundamente el sistema democrático existente en el país, y captaron la atención de la comunidad internacional. La crisis de octubre del 2003, que a primera vista era una protesta por la exportación del gas natural, dio como resultado la destitución del entonces presidente Sánchez de Lozada, y la sucesión constitucional del Vicepresidente Carlos Mesa.

El tumulto político y el desasosiego popular que se difundió desencadenaron también iniciativas importantes relacionadas a los conflictos de parte de las agencias de cooperación. Antes de octubre del 2003, la mayoría de ellas no consideraban a Bolivia un estado “frágil” o “débil”, ni tampoco conducían sus programas desde una perspectiva sensible a los conflictos. Como parte integrante de un enfoque sensible a esta temática, está el análisis de los conflictos, aspecto que también parece haber estado ausente en gran parte de los programas de cooperación con el Estado boliviano. Kimberly Inksater. (2005). Análisis de Conflicto en Bolivia. La Paz Bolivia: Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

1.6. Estado del arte.

Una de las mayores inquietudes ha sido; cómo podría la población evitar que una dictadura se estableciera y cómo detenerla o desaparecerla. Esto se nutrió en parte por la convicción de que los seres humanos no deben ser ni dominados ni destruidos por semejantes regímenes, esta creencia se ha fortalecido con lecturas sobre la importancia de la libertad humana y la naturaleza de las dictaduras desde Aristóteles hasta los analistas del totalitarismo, y la historia de las dictaduras, especialmente en los sistemas nazi y comunista. Gene Sharp. (1993). De la dictadura a la democracia: Institución Albert Einstein.

Los regímenes dictatoriales, ya sean propiamente dictatoriales o democráticos transformados en dictaduras, conforman una parte importante dentro de la memoria histórica del país, es por esto que, aparte de constituirse en hechos históricos como tales, es decir que son fácilmente ubicables en el panorama general de la Historia de Bolivia, se ve la necesidad de realizar un estudio de caso sobre este fenómeno político.

Entonces, es dentro de este marco que se puede considerar que las prácticas coercitivas llevadas a cabo en regímenes democráticos, tendrían algún efecto dentro de la conducta de la sociedad y de la misma democracia boliviana.

Se ve la importancia de realizar un estudio de caso basado en los hechos históricos suscitados durante el último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ya que hasta el momento se sabe muy poco sobre el porqué de la transformación de este gobierno democrático en casi un gobierno dictatorial, puesto que, poco o nada se ha investigado sobre este fenómeno de transformación.

De esta manera y acudiendo a la historia de los hechos suscitados en Bolivia durante el periodo último del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, abarcaremos algunos datos históricos escritos, en donde se escribieron sobre temas como: democracia, dictadura, gobernabilidad, conflictos sociales, etc., para unirlos en un sentido objetivo y conceptual.

La Derrota del Neoliberalismo en Bolivia, es una obra escrita por Samuel Arriarán, en la cual explica el desarrollo reciente de los acontecimientos económicos, políticos y sociales en Bolivia que desembocaron en la impresionante derrota del

neoliberalismo, con base en la necesidad de buscar otro tipo de explicación que no se reduzca a un catálogo de fechas históricas, ni de biografías de personajes destacados. En la filosofía y en las ciencias sociales hoy en día está totalmente desacreditada aquella versión positivista que concebía el pasado como mera acumulación de datos. Ni siquiera las versiones alternativas como la historia de las mentalidades o del imaginario colectivo, gozan hoy de un pleno reconocimiento. En lugar de estas concepciones se plantea el enfoque de las prácticas sociales ligadas indisolublemente a las interpretaciones de los sujetos. Si actualmente hay un reconocimiento generalizado sobre la necesidad de las interpretaciones, el enfoque hermenéutico parece ser entonces una de las metodologías más fecundas. En el caso de las sociedades como Bolivia que presentan una dinámica muy compleja a raíz de su diversidad cultural, es posible hacer inteligible su funcionamiento social a partir de metodologías interpretativas como la hermenéutica. Estas metodologías nos permiten explorar la memoria social para la recuperación simbólica del pasado. No basta la investigación histórica como una indagación sistemática de acontecimientos políticos, económicos y sociales. Es necesario complementarla con un enfoque problemático de la memoria colectiva en la medida en que se condensan problemas morales y políticos, de acción y de conocimiento. Esto significa que hay algo que excede la explicación racional y que debe ser analizado a la luz de otros componentes simbólicos y culturales, es decir de aquellas creencias, escenas, visiones y mitos que dan sentido a la sociedad ¿de qué tratan estos mitos? Ciertamente de acontecimientos fundacionales. En la historia moderna de Bolivia, habrían por lo menos los siguientes: la revolución de 1952; la dictadura de Bánzer; el surgimiento de la democracia representativa; la implantación del neoliberalismo y su derrota. Samuel Arriarán. (2007). La derrota del neoliberalismo en Bolivia: Torres asociados.

Javier Díaz Cassou y La Crisis Boliviana y la Caída del Gobierno de Sánchez de Lozada, una gran obra contextualizada en la difícil época del segundo gobierno de Lozada (2002-2003), y en donde nos relata sobre los acontecimientos sociales y políticos desde un enfoque explicativo y descriptivo antes y aun después del 18 de octubre cuando caía el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, poniendo así fin a la llamada “guerra del gas”,

conflicto que se saldó con la vida de cerca de 70 personas en la capital boliviana y en la vecina ciudad de El Alto. Si bien la controversia al respecto de la explotación y exportación de las vastas reservas de gas del país fue el desencadenante del conflicto, éste solo puede entenderse en el contexto de la profunda crisis institucional, económica y social por la que Bolivia atraviesa desde hace algunos años. Este artículo explora las causas de la crisis boliviana así como las perspectivas del nuevo gobierno de Carlos Mesa.

En un trabajo del Departamento de Estado de los estados Unidos, plasmado en el libro titulado *La Democracia en Síntesis*, veremos a todos elementos en general que hacen a la democracia como tal, de igual manera veremos análisis sobre la cultura de la democracia, relaciones entre civiles y militares y el estado de derecho entre otros.

Por su parte, en el libro, *38 Años de Conflictos Sociales en Bolivia*, escrito por Roberto Laserna y Miguel Villarroel, encontramos parte de las escenas políticas en tiempos de dictadura. La escena política y social a lo largo de esta coyuntura es de transición a la democracia, por tanto, las expectativas electorales son una de las principales preocupaciones de los diferentes actores sociales. Debido a ello, gran parte de la acción colectiva y de los conflictos sociales giró en torno a establecer un estado de derecho y defenderlo de las amenazas golpistas. La crisis económica e inflacionaria contribuyó a agudizar las protestas a lo largo de estos años. A finales del periodo, específicamente durante el gobierno de García Meza, se vivió la dictadura más violenta y represiva de cuantas hubo en la historia del país, además, durante este gobierno, la corrupción y los negociados por parte de los funcionarios del Estado crecieron de forma alarmante, así mismo, hubo una fuerte expansión de las actividades relacionadas con el narcotráfico que, en este caso, gozaba de la protección de algunos miembros del poder ejecutivo. La insostenible presión popular e internacional propició levantamientos militares y una sucesión de juntas de gobierno y gobiernos de facto. Por supuesto, la agregación que se hace (tomar como un solo régimen la etapa comprendida entre los gobiernos de Pereda a G. Meza) tiene solamente fines expositivos y no implica un desconocimiento a las profundas diferencias que hubo entre los diferentes gobiernos ni tampoco ignora los esfuerzos realizados por algunos de ellos, especialmente los

que presidieron Wálter Guevara y Lidia Gueiler, por restablecer la institucionalidad democrática.

Lorenzo Peña en *Dictadura, Democracia, República, un Análisis Conceptual*, nos da su análisis conceptual a cerca de democracia y dictadura, es así que este autor realiza un análisis sobre los tres conceptos, de democracia, dictadura y república, los nexos conceptuales y las implicaciones que los asocian, así como las relaciones entre esas nociones y otras afines, como las de monarquía (antítesis de república) y las de monocracia y policracia (antítesis de democracia). El análisis tiende a mostrar que tales conceptos son muy complicados, a menudo escurridizos, susceptibles de graduaciones y de difícil aplicabilidad a los casos concretos de la vida política siempre mucho más enrevesados que lo que prevén las teorías, por lo cual no suministran criterios precisos o definitivos para clasificar a los sistemas políticos. Por consiguiente, la utilización de esos conceptos ha de hacerse siempre con mucha cautela y salvedad para no incurrir en el cajón de sastre que desconozca las enormes variaciones de las situaciones reales o subsuma arbitrariamente sistemas muy diferentes bajo fáciles rótulos identificatorios. Empezaré analizando las notas del concepto de democracia para ver por qué ese concepto implica la existencia de un ordenamiento constitucional, un estado de derecho en el que las grandes decisiones de los poderes públicos se tomen con respeto al bien común y a un haz de libertades ciudadanas y de garantías. Examinaré, a continuación, los vínculos entre democracia y república para, finalmente, analizar los conceptos opuestos de dictadura, tiranía y régimen totalitario.

Los Usos de la Dictadura en la Democracia Posdictadura y las Formas de Dominación por el Consenso, del escritor Álvaro Rico, es una investigación sobre la historia política reciente, particularmente sobre el período dictatorial y luego sobre las formas de dominación y legitimación del orden político estatal en la democracia pos dictadura en Bolivia.

Por su parte, José Antonio Rivera, en su libro titulado *La Evolución Político Institucional en Bolivia entre 1975 a 2005*, que aborda la evolución político-institucional en Bolivia entre 1975 y el 2005, con un análisis descriptivo del proceso que abarca el régimen democrático

de gobierno, incluyendo el sistema político, sistema electoral, los partidos políticos y mecanismos de participación ciudadana, para luego identificar los aspectos singulares de ese proceso de evolución y concluyendo el mismo con una reflexión sobre los avances y amenazas para la democracia.

Por su parte Ricardo Sanjinés Ávila en su libro *La Democracia Bajo Fuego*, hace un análisis desde los dos puntos de vista como son la democracia y la dictadura, en un contexto nacional, es decir diferentes citaciones y gobiernos que se han vivido en nuestro país a lo largo de del último cuarto de siglo, donde ve y señala la época de las dictaduras como abominables, pues como nunca antes se miró con indiferencia la degradación del ser humano, sin que a nadie le conmueva el infortunio ajeno, pese a las ventajas que pudo albergar el sistema con democracia y libre mercado, nunca hubo en Bolivia una etapa tan cruel y exenta de solidaridad. Con Walter Guevara y Lidia Gueiler renació la democracia, ambos productos legítimos del sistema constitucional, lucharon por el estado de derecho exponiendo la propia piel y cayeron víctimas de golpes alentados por una parte de la civilidad que temía los desbordes sociales. Con Hugo Banzer y García Mesa, los golpes que dieron paso a gobiernos de facto, dictatoriales, manchando de sangre y vergüenza la democracia boliviana, y poniendo en duda el sistema que hasta entonces perduraba, una dictadura que puso por los suelos las intenciones de gobernantes, hombres y mujeres que trataron de cambiar este país y su rumbo hacia un futuro incierto. Y una mezcla híbrida de dictadura y democracia manifestada en Gonzalo Sánchez de Lozada quien se empeña en retomar el poder y la suma de factores perniciosos, crisis, déficit, narcotráfico, pobreza, subversión, ausencia de estado-lo derrotaron, cayendo finalmente por poner condiciones dictatoriales en un gobierno llamado constitucional, legal y legítimo.

La Rebelión Aymara y Popular de Octubre de 2003, es una obra escrita por Esteban Ticona Alejo, donde este pretende hacer una aproximación general y en gran medida testimonial al tema señalado, desde la perspectiva de algunos barrios populares de la ciudad de La Paz, como Munaypata, Villa Victoria, La Portada y Qallampaya. Villas que están ubicadas cerca de El Alto, pero no lejos de la “hoyada” paceña. En esta ponencia se intenta responder básicamente a la siguiente pregunta: ¿Cómo fue la rebelión de los aymaras y sectores populares en algunos barrios entre el 11 y el 17 de

octubre de 2003?, que fue uno de los movimientos sociales más contundente entre otros que, como resultado dio la renuncia y posterior huida del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

1.7. Marco teórico.

No existe una definición precisa y universal de la democracia y dictadura, la mayoría de las definiciones hacen énfasis en las cualidades, procedimientos e instituciones. Así podemos tomar los conceptos sobre estos dos términos, de los siguientes autores.

Stanley Moore, en su obra, "Teoría del Origen de la Dictadura", hace referencia a él origen histórico de las dictaduras, y el porqué de los rasgos que la caracterizan, haciendo una retrospectiva y construcción histórica hasta nuestros días, comprobando y justificando el porqué de lo duro de los regímenes dictatoriales.

Según Gene Sharp, en su libro "De la Dictadura a la Democracia", Sin embargo, cualesquiera que sean los méritos de la opción para la violencia, un punto está claro, *Al depositar la confianza en los medios violentos, se ha escogido precisamente el modo de lucha en el cual los opresores casi siempre tienen la superioridad, los dictadores pueden aplicar la violencia irresistiblemente.* Un golpe militar contra una dictadura puede parecer, relativamente hablando, una de las maneras más rápidas y fácil de quitarse de encima un régimen particularmente repugnante, sin embargo existen serios problemas con respecto a esta técnica, después de consolidar su posición, la nueva camarilla puede resultar más despiadada y ambiciosa que la anterior. Bajo una dictadura las elecciones no se pueden utilizar como instrumento para un cambio político significativo, algunos regímenes dictatoriales, tales como los del antiguo bloque oriental dominado por la Unión Soviética, simulaban elecciones solo con el propósito de aparentar ser democráticos.

Por su parte Ricardo Sanjinés Ávila, hace un análisis desde los dos puntos de vista como son la democracia y la dictadura, en un contexto nacional, es decir diferentes citaciones y gobiernos que se han vivido en nuestro país a lo largo de del último cuarto de siglo, donde ve y señala la época de las dictaduras como abominables, pues como nunca antes se miró con indiferencia la degradación del ser humano, sin que a nadie le

conmueva el infortunio ajeno, pese a las ventajas que pudo albergar el sistema con democracia y libre mercado, nunca hubo en Bolivia una etapa tan cruel y exenta de solidaridad. Con Walter Guevara y Lidia Gueiler renació la democracia, ambos productos legítimos del sistema constitucional, lucharon por el estado de derecho exponiendo la propia piel y cayeron víctimas de golpes alentados por una parte de la civilidad que temía los desbordes sociales. Con Hugo Banzer y García Mesa, los golpes que dieron paso a gobiernos de facto, dictatoriales, manchando de sangre y vergüenza la democracia boliviana, y poniendo en duda el sistema que hasta entonces perduraba, una dictadura que puso por los suelos las intenciones de gobernantes, hombres y mujeres que trataron de cambiar este país y su rumbo hacia un futuro incierto.

Y una mezcla híbrida de dictadura y democracia manifestada en Gonzalo Sánchez de Lozada quien se empeña en retomar el poder y la suma de factores perniciosos, crisis, déficit, narcotráfico, pobreza, subversión, ausencia de estado lo derrotaron, cayendo finalmente por poner condiciones dictatoriales en un gobierno llamado constitucional, legal y legítimo.

Por su parte, en el libro, "38 Años de Conflictos Sociales en Bolivia" escrito por Roberto Laserna y Miguel Villarroel, encontramos parte de las escenas políticas en tiempos de dictadura. La escena política y social a lo largo de esta coyuntura es de transición a la democracia, por tanto, las expectativas electorales son una de las principales preocupaciones de los diferentes actores sociales. Debido a ello, gran parte de la acción colectiva y de los conflictos sociales giró en torno a establecer un estado de derecho y defenderlo de las amenazas golpistas. La crisis económica e inflacionaria contribuyó a agudizar las protestas a lo largo de estos años. A finales del periodo, específicamente durante el gobierno de García Meza, se vivió la dictadura más violenta y represiva de cuantas hubo en la historia del país, además, durante este gobierno, la corrupción y los negociados por parte de los funcionarios del Estado crecieron de forma alarmante, así mismo, hubo una fuerte expansión de las actividades relacionadas con el narcotráfico que, en este caso, gozaba de la protección de algunos miembros del poder ejecutivo. La insostenible presión popular e internacional propició levantamientos militares y una sucesión de juntas de gobierno y gobiernos de facto. Por supuesto, la agregación que se hace (tomar como un solo régimen la etapa comprendida entre los

gobiernos de Pereda a G. Meza) tiene solamente fines expositivos y no implica un desconocimiento a las profundas diferencias que hubo entre los diferentes gobiernos ni tampoco ignora los esfuerzos realizados por algunos de ellos, especialmente los que presidieron Wálter Guevara y Lidia Gueiler, por restablecer la institucionalidad democrática.

Lorenzo Peña nos da un marco conceptual sobre términos como, democracia, dictadura y república, cuando nos dice: El concepto de democracia contiene dos únicas notas conceptuales unidas por un vínculo de conjunción: la de poder y la de pueblo. Hemos de analizar esas dos notas, e.d. esos dos conceptos, y reflexionar sobre ese vínculo entre ambos. Empezamos por la noción de pueblo.

De esos diferentes ismos, el populismo ha corrido una suerte especial. Por un lado es difícil de encontrar individuos o grupos que se reconozcan a sí mismos tras ese rótulo, que digan ser populistas. Por otro lado, la calificación peyorativa de «populista» se utiliza con una profusión que supera, con mucho, la de otros ismos políticos. Y, en tercer lugar, el común denominador del populismo es nulo, porque, no habiéndolo definido nadie, puede aplicarse como a cualquiera le dé la gana: subir los impuestos, bajarlos, aumentar el gasto público, disminuirlo, construir obras públicas, no hacerlo, lanzar programas de escolarización o abstenerse de los mismos, incrementar las penas contra los delincuentes o dejarlas como están o rebajarlas: cualquier medida puede ser calificada de populista. Lo único seguro es que, para cada partido o tendencia política, los populistas son sus adversarios.

La noción vaga y usual de dictadura hoy en circulación es, en realidad, negativa: dictadura es no-democracia. De ese modo, por definición, la pareja conceptual de dictadura y de democracia es conjuntamente exhaustiva y mutuamente exclusiva. Las muchas matizaciones que hemos introducido más arriba con relación al concepto de democracia nos llevan a relativizar, correspondientemente, la noción de dictadura, si nos atenemos a ese valor entendido y al uso corriente de la palabra en nuestros días. Alternativamente, si quisiéramos aferrarnos a esa dicotomía conceptual, podríamos empezar por brindar una definición independiente del concepto de dictadura para luego definir el de democracia como lo que no sea dictadura. Pero dudo que esa senda sea muy

fructífera para las aclaraciones conceptuales. En realidad, aunque la noción de dictadura tiene, en su uso habitual, esa pretensión puramente negativa o privativa, lo que se quiere vehicular con ella es algo mucho más fuerte, porque, si no, se entendería mal la carga axiológica peyorativa. Hubo un tiempo en que un régimen político podía declararse dictatorial (como lo hizo p.ej. el régimen monárquico militar del general Primo de Rivera en España, 1923-30); pero después ningún gobernante ha aceptado ser un dictador. Como los demagogos, como los populistas, los dictatoriales son siempre los adversarios, nunca uno mismo. En ese uso banal, el concepto de dictadura carece de utilidad. No se dispone de ningún contorno claro ni de ninguna dilucidación fructífera que nos ayuden a emplearlo con discernimiento y de tal manera que con ello el análisis político salga beneficiado en capacidad de comprensión y de explicación.

1.7.1. Problema, hipótesis objetivos.

- Pregunta de la Investigación.

El problema de la investigación nace con la siguiente interrogante: *¿Por qué el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), adopta características dictatoriales?*

- Hipótesis.

El segundo gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), adopta características y rasgos dictatoriales debido a: la escasa legitimidad y representación electoral que deriva en decisiones circunscritas sólo al poder ejecutivo, la debilidad y fragmentación en la coalición de gobierno, y las políticas públicas poco oportunas en relación al contexto, como el impuestazo y la política hidrocarburífera.

- Objetivos.

Objetivo General.

Explicar los factores por los cuales el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), adoptó algunas características dictatoriales.

Objetivos Específicos.

- Examinar la escasa legitimidad y representación electoral del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, analizando datos bibliográficos.
- Analizar la debilidad y fragmentación en la coalición de gobierno MNR-MIR-FNR, examinando datos bibliográficos.
- Indagar las circunstancias en que fueron adoptadas ciertas políticas públicas clave que fueron erosionando la efectividad gubernamental ante las demandas de la población y los problemas públicos del momento.

1.8. Enfoque teórico.

No existe una definición precisa y universal de la democracia y dictadura, la mayoría de las definiciones hacen énfasis en las cualidades, procedimientos e instituciones. Así podemos tomar los conceptos sobre estos dos términos, de los siguientes autores.

En este contexto, Stanley Moore, en su obra, "Teoría del Origen de la Dictadura", hace referencia a él origen histórico de las dictaduras, y el por qué de los rasgos que la caracterizan, haciendo una retrospección y construcción histórica hasta nuestros días, comprobando y justificando el porqué de lo duro de los regímenes dictatoriales.

Según Gene Sharp, en su libro "De la Dictadura a la Democracia", Sin embargo, cualesquiera que sean los méritos de la opción para la violencia, un punto está claro, *Al depositar la confianza en los medios violentos, se ha escogido precisamente el modo de lucha en el cual los opresores casi siempre tienen la superioridad, los dictadores pueden aplicar la violencia irresistiblemente.* Un golpe militar contra una dictadura puede parecer, relativamente hablando, una de las maneras más rápidas y fácil de quitarse de encima un régimen particularmente repugnante, sin embargo existen serios problemas con respecto a esta técnica, después de consolidar su posición, la nueva camarilla puede resultar más despiadada y ambiciosa que la anterior. Bajo una dictadura las elecciones no se pueden utilizar como instrumento para un cambio político significativo, algunos regímenes dictatoriales, tales como los del antiguo bloque oriental dominado por la Unión Soviética, simulaban elecciones solo con el propósito de aparentar ser democráticos.

Por su parte Ricardo Sanjinés Ávila, hace un análisis desde los dos puntos de vista como son la democracia y la dictadura, en un contexto nacional, es decir diferentes situaciones y gobiernos que se han vivido en nuestro país a lo largo de del último cuarto de siglo, donde ve y señala la época de las dictaduras como abominables, pues como nunca antes se miró con indiferencia la degradación del ser humano, sin que a nadie le conmueva el infortunio ajeno, pese a las ventajas que pudo albergar el sistema con democracia y libre mercado, nunca hubo en Bolivia una etapa tan cruel y exenta de solidaridad. Con Walter Guevara y Lidia Gueiler renació la democracia, ambos productos legítimos del sistema constitucional, lucharon por el estado de derecho exponiendo la propia piel y cayeron víctimas de golpes alentados por una parte de la civilidad que temía los desbordes sociales. Con Hugo Banzer y García Mesa, los golpes que dieron paso a gobiernos de facto, dictatoriales, manchando de sangre y vergüenza la democracia boliviana, y poniendo en duda el sistema que hasta entonces perduraba, una dictadura que puso por los suelos las intenciones de gobernantes, hombres y mujeres que trataron de cambiar este país y su rumbo hacia un futuro incierto.

Y una mezcla híbrida de dictadura y democracia manifestada en Gonzalo Sánchez de Lozada quien se empeña en retomar el poder y la suma de factores perniciosos, crisis, déficit, narcotráfico, pobreza, subversión, ausencia de estado-lo derrotaron, cayendo finalmente por poner condiciones dictatoriales en un gobierno llamado constitucional, legal y legítimo.

Por su parte, en el libro, "38 Años de Conflictos Sociales en Bolivia" escrito por Roberto Laserna y Miguel Villarroel, encontramos parte de las escenas políticas en tiempos de dictadura. La escena política y social a lo largo de esta coyuntura es de transición a la democracia, por tanto, las expectativas electorales son una de las principales preocupaciones de los diferentes actores sociales. Debido a ello, gran parte de la acción colectiva y de los conflictos sociales giró en tomo a establecer un estado de derecho y defenderlo de las amenazas golpistas. La crisis económica e inflacionaria contribuyó a agudizar las protestas a lo largo de estos años. A finales del periodo, específicamente durante el gobierno de García Meza, se vivió la dictadura más violenta y represiva de cuantas hubo en la historia del país, además, durante este gobierno, la corrupción y los negociados por parte de los funcionarios del Estado crecieron de forma

alarmante, así mismo, hubo una fuerte expansión de las actividades relacionadas con el narcotráfico que, en este caso, gozaba de la protección de algunos miembros del poder ejecutivo. La insostenible presión popular e internacional propició levantamientos militares y una sucesión de juntas de gobierno y gobiernos de facto. Por supuesto, la agregación que se hace (tomar como un solo régimen la etapa comprendida entre los gobiernos de Pereda a Garcia Meza) tiene solamente fines expositivos y no implica un desconocimiento a las profundas diferencias que hubo entre los diferentes gobiernos ni tampoco ignora los esfuerzos realizados por algunos de ellos, especialmente los que presidieron Wálter Guevara y Lidia Gueiler, por restablecer la institucionalidad democrática.

Lorenzo Peña nos da un marco conceptual sobre términos como, democracia, dictadura y república, cuando nos dice: El concepto de democracia contiene dos únicas notas conceptuales unidas por un vínculo de conjunción: la de poder y la de pueblo.

De esos diferentes ismos, el populismo ha corrido una suerte especial. Por un lado es difícil de encontrar individuos o grupos que se reconozcan a sí mismos tras ese rótulo, que digan ser populistas. Por otro lado, la calificación peyorativa de «populista» se utiliza con una profusión que supera, con mucho, la de otros ismos políticos. Y, en tercer lugar, el común denominador del populismo es nulo, porque, no habiéndolo definido nadie, puede aplicarse como a cualquiera le dé la gana: subir los impuestos, bajarlos, aumentar el gasto público, disminuirlo, construir obras públicas, no hacerlo, lanzar programas de escolarización o abstenerse de los mismos, incrementar las penas contra los delincuentes o dejarlas como están o rebajarlas: cualquier medida puede ser calificada de populista. Lo único seguro es que, para cada partido o tendencia política, los populistas son sus adversarios.

La noción vaga y usual de dictadura hoy en circulación es, en realidad, negativa: dictadura es no-democracia. De ese modo, por definición, la pareja conceptual de dictadura y de democracia es conjuntamente exhaustiva y mutuamente exclusiva. Las muchas matizaciones que hemos introducido más arriba con relación al concepto de democracia nos llevan a relativizar, correspondientemente, la noción de dictadura, si nos atenemos a ese valor entendido y al uso corriente de la palabra en nuestros días.

Alternativamente, si quisiéramos aferrarnos a esa dicotomía conceptual, podríamos empezar por brindar una definición independiente del concepto de dictadura para luego definir el de democracia como lo que no sea dictadura. Pero dudo que esa senda sea muy fructífera para las aclaraciones conceptuales. En realidad, aunque la noción de dictadura tiene, en su uso habitual, esa pretensión puramente negativa o privativa, lo que se quiere vehicular con ella es algo mucho más fuerte, porque, si no, se entendería mal la carga axiológica peyorativa. Hubo un tiempo en que un régimen político podía declararse dictatorial (como lo hizo p.ej. el régimen monárquico militar del general Primo de Rivera en España, 1923-30); pero después ningún gobernante ha aceptado ser un dictador. Como los demagogos, como los populistas, los dictatoriales son siempre los adversarios, nunca uno mismo. En ese uso banal, el concepto de dictadura carece de utilidad. No se dispone de ningún contorno claro ni de ninguna dilucidación fructífera que nos ayuden a emplearlo con discernimiento y de tal manera que con ello el análisis político salga beneficiado en capacidad de comprensión y de explicación.

1.9. Diseño de la investigación.

El paradigma con el cual abordo el presente trabajo de investigación, es el paradigma *Histórico-positivista*, tomando como espacio de tiempo la característica *longitudinal*, se toma este paradigma, ya que, se retomarán pasajes de la historia de Bolivia, tanto en su etapa de gobiernos democráticos, como en su etapa de gobiernos dictatoriales, señalando dos gobiernos y fechas específicos para su estudio y comparación, como ser: (el gobierno dictatorial de Luis García Meza 1981 y el gobierno democrático de Gonzalo Sánchez de Lozada 2002), es por estas características de la investigación en lugar y tiempo, que se toma el mencionado paradigma.

El tipo de investigación que se aplicará será cualitativa, esto debido a que se realizará la descripción de las cualidades del fenómeno a estudiar, busca conceptos que puedan abarcar una parte de la realidad. No se tratará de probar ni de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible.

Según el grado de complejidad de esta investigación, esta será de tipo descriptivo-explicativo, ya que además de describir características de fenómenos políticos, se realizará la descripción de estos y sus cambios según tiempos y circunstancias (relación, causa-efecto). El instrumento utilizado para llevar a cabo la investigación será la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias bibliográficas, esta es una técnica para obtener datos que consisten en una recopilación de datos bibliográficos, que al unirse se someten a un análisis objetivo, dando como resultado una conclusión que apoya a la hipótesis planteada.

CAPÍTULO II

La legitimidad y representación electoral del segundo gobierno de Gonzalo

Sánchez de Lozada

Las elecciones generales de 2002 determinan un viraje en las relaciones de poder en el sistema partidista, ya que marcan la desaparición de algunos actores y la emergencia de otros que luego pasarían a tener un lugar protagónico en el desarrollo político boliviano.

2.1. Reconfiguración del sistema de partidos, elecciones de 2002.

Esta elección tuvo efectos importantes sobre el sistema de partidos: reconfiguración, polarización, emergencia de nuevas fuerzas políticas, indígenas y campesinos que avanzaron fuertemente en su representación política y el voto se redistribuyó territorialmente. A diferencia de los partidos neopopulistas de los 90' que es el resurgimiento de la corriente populista en Latinoamérica, tras las dictaduras de la década de los 80 en la región, las nuevas fuerzas como ser el MAS y el MIP, contribuyeron a la polarización del sistema, ya que no se incorporaron al sistema preexistente, sino que mostraron actitudes principalmente hostiles hacia los actores políticos, la democracia representativa y el modelo económico.

Los partidos que emergen de las elecciones del 2002 concentran su fuerza electoral en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, mientras que los partidos tradicionales conservan su votación en Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca.

Las elecciones de 2002 estuvieron marcadas por las demandas de las movilizaciones de 2000 y 2001. Los movimientos sociales que instalaron estas demandas se transformaron en partidos, y el programa reivindicativo y anti sistémico de éstos apuntaba entre otras cosas a: cambios en el modelo económico, convocatoria a una asamblea constituyente, lucha contra la corrupción y una oposición al modelo de democracia pactada (coalición de partidos).

La transformación del sistema de partidos en 2002 se explica por dos tendencias de acumulación política prolongadas que comenzaron a desarrollarse desde las reformas

electorales de 1994 y 1996 que impulsaron la territorialización de la votación, y la Ley de participación popular que ha dado impulso a nuevos campos de competencia política en niveles antes inexistentes como el municipal. La combinación de distritos plurinominales con uninominales y la ley de participación popular contribuyeron en la territorialización del voto, la personalización y el protagonismo de los movimientos y partidos locales.

En 2002 se observa un aumento de partidos políticos en competencia para las elecciones generales, el MNR y el MIR conservan parte de su adhesión pero irrumpe el MAS y la Nueva Fuerza Republicana (NFR), quienes obtienen un 22.29% y un 17.19% de los escaños respectivamente. CONDEPA desaparece y UCS obtiene un resultado marginal, donde la votación nacional y a nivel departamental se ve polarizada en torno al Movimiento al Socialismo (MAS) y el Poder Democrático y Social (PODEMOS).

En las elecciones de 2002, los electores se dividen entre quienes están satisfechos con las políticas y la orientación macroeconómica, representados antes por el MNR, ADN y MIR (ahora por PODEMOS) y quienes están descontentos y que votan básicamente por el MAS y el MIP, con todo, en 2002 es más clara la división bipolar entre estos dos grupos, representados por dos partidos que no se oponen sólo a nivel de propuestas y matices programáticos. Andrés Dockendorff Valdés. (2007). Sistema de Partidos y Gobernabilidad Democrática en Bolivia (1985-2005). La Paz Bolivia: Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

La elección presidencial 2002 definió un escenario político novedoso. En clara ruptura con los pasados escrutinios presidenciales. El segundo lugar del Movimiento al Socialismo (MAS) constituyó un resultado sin precedentes para una formación de izquierda radical que ejecutó su campaña sin concesiones. Se adelantó por pocas centenas de votos a Nueva Fuerza Republicana (NFR), otro debutante exitoso en la elección. Entre ambos se aproximaron al 40% de los sufragios, al frente, con menos de 10% entre los tres, quedaron la gobernante Acción Democrática Nacionalista (ADN), Conciencia de Patria (CONDEPA) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) que cinco años antes convencieron a la mitad del electorado, sin embargo, la insistencia

en los nuevos elementos oculta líneas de continuidad que también existieron en la presidencial de 2002.

La más importante es sin duda la dispersión del voto que impide a cualquier organización superar el quinto de los sufragios; a ella se añade la capacidad del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) para permanecer como un actor central desde la transición democrática, consiguiendo su tercera victoria a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada, que iguala así un liderazgo partidario-político sólo con Víctor Paz y Hernán Siles.

2.2. Los resultados electorales del 2002.

Los datos de la elección 2002 pueden interpretarse a la luz de cuatro evoluciones: el estancamiento de los principales partidos de gobierno (MNR, MIR, ADN). El derrumbe de los principales partidos contestatarios de fines del siglo XX (CONDEPA, UCS), la fracasada llegada de los nuevos partidos (MCC. L y J) y el éxito del MAS y de NFR que concentraron a gran parte de los insatisfechos.

Como se mencionó, los partidos que ejercieron el gobierno desde hace veinte años, el MNR, el MIR y ADN, disminuyen su capacidad para conquistar votantes, en especial de los grupos más frágiles. En 2002, la penalización fue especialmente dura con ADN, mientras que el MNR y el MIR se mantuvieron dentro de los niveles alcanzados cinco años atrás. En efecto, el MNR apenas se benefició con su trabajo opositor, Sánchez de Lozada tuvo el mismo porcentaje de Banzer en 1997 (20.8%), vale decir que se trató del menor marcador en la historia de las presidenciales. Si el vencedor mejoró el nivel de Durán, consiguió un porcentaje que no difiere mucho del que da la suma del MNR y del MBL cinco años antes, el MIR, también tuvo un porcentaje próximo al logrado por Paz. En 1997, ligeramente orientado hacia abajo. El gran castigado fue ADN, partido que soportó los costos de la desportillada administración de Banzer sin aprovechar la popularidad del presidente Quiroga. Nunca antes un partido de gobierno terminó tan mal ubicado (séptimo) y con un porcentaje tan débil (3.1%). fue evidentemente el peor resultado histórico de ADN desde su fundación. Con excepción del MIR, la participación en la gestión de Banzer acarreo graves problemas a los integrantes de la coalición: Mac Lean, Fernández y

Valdivia no alcanzaron ni 10% de los votos, treinta puntos menos que lo alcanzado por sus partidos en 1997.

En efecto, en 2002 este partido contó con la simpatía de los grupos sociales aventajados y de la media luna conservadora que une el norte de La Paz y Pando con el sur de Potosí pasando por Santa Cruz. Su votación señaló una convergencia entre los grupos favorecidos de la sociedad y las tierras tradicionales del MNR que dejó de lado a los grupos y a las regiones pobres.

El MNR fue el único partido que consiguió victorias en por lo menos uno de los municipios de los nueve departamentos. Repartió de manera equilibrada con ADN los triunfos en Pando, ganó en todos los municipios de Beni salvo Santa Rosa, fue mayoritario en Santa Cruz, se impuso en gran parte del Chaco, dominó el suroeste de Bolivia, en los departamentos de Potosí y Chuquisaca y ratificó su fuerza en el este de Oruro. En las otras regiones, sólo contó con triunfos aislados.

Su distribución espacial del voto pone en evidencia el patrón típico del voto del MNR, con sólidos porcentajes en Beni (40.6%), Pando (32.5%), Tarija (31.4%) y Santa Cruz (28.1%), departamentos situados claramente por encima del promedio nacional. No menos clásicos son sus lugares débiles: Cochabamba (15.7%) y La Paz (14.3%).

Entre 1997 - 2002, el MNR progresó en más de la mitad de los municipios. Los avances se produjeron gracias a tres grandes evoluciones: el refuerzo en las capitales y en las principales ciudades intermedias, donde la candidatura de Sánchez de Lozada recuperó votantes, en el norte del país. Donde el MNR aprovechó el debilitamiento de su principal competidor regional (ADN), y en el centro de Chuquisaca donde jugó la alianza con el MBL.

El crecimiento en las ciudades fue significativo, superior a 7 puntos en Trinidad, Sucre, Cobija, Yacuiba, La Paz, Tarija o Potosí, pero no uniforme. Sánchez de Lozada sedujo con más facilidad votantes de categorías acomodadas que de sectores populares, ampliando la brecha ya existente. La ciudad de Cochabamba ejemplifica el proceso general. Mientras que el MNR progresó mucho en la favorecida

circunscripción 23 (+7 puntos), su avance fue modesto al sur. Donde se reúnen los barrios pobres (+1.9). En los sectores altos, la propuesta del MNR fue percibida como una garantía de estabilidad en un entorno internacional de incertidumbre y como capaz de mantener la autoridad del Estado; en cambio, en los sectores populares, Sánchez de Lozada, el recuerdo de la capitalización restaba credibilidad a cualquier promesa social y las medidas represivas contra campesinos y mineros despertaba temores. Incluso, Sánchez de Lozada no pudo mantener bajo una misma bandera a las clases altas, que lo siguieron, y a vastos sectores de la clase media, que escogieron a NFR. Por primera vez desde 1985 se observó una divergencia en las preferencias electorales de las circunscripciones del centro y del sur de La Paz. Mientras que en la zona sur, Sánchez de Lozada aumentó en más de 10 puntos la votación del MNR y ganó con 32.9%, el incremento en las circunscripciones 8 (Miraflores) y 10 (Sopocachi) fue insuficiente para evitar la victoria de Reyes Villa. Una de las transformaciones más significativas de la sociología política revelada por la elección ha sido el distanciamiento entre los grupos altos y los medios, cuando los primeros apostaron por un líder experimentado y reputado por su autoridad, los segundos prefirieron la renovación detrás de NFR.

Ciertamente, el MNR aprovechó el derrumbe de ADN en las categorías medias y altas urbanas, pero el proceso fue aún más visible en el norte del país donde ambos partidos sostienen intensos duelos que dan a la zona un aspecto bipartidista. El MNR contó con el desencanto dejado por la administración de Banzer y las dudas con la candidatura de Mac Lean para imponerse en amplias regiones de Beni y Pando, acentuando una implantación sólida. Existe una correlación entre la votación de ADN en 1997 y la evolución del MNR entre 2002 y 1997 (0.29) que señala que la candidatura de Sánchez de Lozada se agrandó con electores de Banzer. Entre los 25 municipios donde más creció el MNR. Figuran 12 pertenecientes a Pando, Beni y el este de Santa Cruz que habían ofrecido elevados porcentajes a ADN en 1997 y que le retacearon su respaldo en 2002 (San Ignacio de Moxos, San Miguel, Quijarro, Humaitá, etc.).

Resultados elecciones nacionales 2002

Candidato	Partido	Votos	%
Gonzalo Sánchez de Lozada	Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR	624.126	22.50%
Evo Morales	Movimiento al Socialismo, MAS	581.884	20.90%
Manfred Reyes Villa	Nueva Fuerza Republicana, NFR	581.163	20.90%
Jaime Paz Zamora	Movimiento de Izquierda Revolucionaria - Nueva Mayoría, MIR	453.375	16.30%
Felipe Quispe	Movimiento Indígena Pachakuti, MIP	169.239	6.10%
Johnny Fernández	Unidad Cívica Solidaridad, UCS	153.21	5.50%
Ronald MacLean Abaroa	Acción Democrática Nacionalista, ADN	94.386	3.40%
Alberto Costa	Partido Libertad y Justicia, U	75.522	2.70%
Rolando Morales	Partido Socialista, PS	18.162	0.70%
René Blattmann	Movimiento Ciudadano Para el Cambio, MCC	17.405	0.60%
Nicolás Valdivia	Conciencia de Patria, CONDEPA	10.336	0.40%
Total (participación : 71.9%)		2.778.808	100.00%

Votos nulos		215.257	
Total		2.994.065	

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE.

Por último, Sánchez de Lozada cosechó los frutos de su alianza con el MBL que le permitió adelantar posiciones en las tierras de su socio minoritario, el centro de Chuquisaca y el oeste de Tarija: ganó por arriba de la decena de puntos en Zudañes, El Villar, Villa Serrano o Yunchará. Sin embargo, el MNR recibió una transferencia de votos inferior al caudal del MBL en muchas provincias, en especial en el empobrecido norte y centro de Potosí donde probablemente el aparato del MBL no resistió el proselitismo del MAS, basado en una insistencia más fuerte en las cuestiones sociales, ni persuadió al electorado de la utilidad de un pacto con Sánchez de Lozada. Así, el MNR incluso se encontró con menos apoyo en lugares que votaron por MBL en la elección precedente (Sacaca, Caripuyo. Toro Toro).

Las zonas donde el MNR se debilitó con respecto a 1997 se concentran en el oeste de Bolivia: en el altiplano de La Paz y Oruro, en el norte y centro de Potosí, en el sur y centro de Cochabamba. Como ejemplo, las pérdidas superaron los 7 puntos en Arampampa, Sacaca. Desaguadero, Ancoraimes, Choquecota, Carangas o Arbieto. José Luis Gálvez Vera. (2002). Elecciones Presidenciales 2002. La Paz Bolivia: Garza Azul.

En muchos de esos municipios, en los años 2000 y 2001, se produjeron intensas acciones de protesta que atacaron al gobierno de ADN y criticaron con dureza al conjunto de políticas estatales aplicadas desde 1985: la legitimidad del MNR quedó mermada ante la fuerza de las reivindicaciones sociales o étnicas promovidas por el MIP y el MAS. Para el MNR, se confirmó la debilidad de 1997 y las dificultades para movilizar al campesinado de pequeña propiedad desde que aplicó medidas económicas liberales y abandonó sus acostumbradas referencias al mundo rural. José Luis Gálvez Vera. (2002). Elecciones Presidenciales 2002. La Paz Bolivia: Garza Azul.

Con una intensidad menor. El MNR perdió peso en municipios cruceños del "norte integrado" poblados por campesinos inmigrantes o por pequeños productores agrícolas de los valles. Si bien a menudo conservó el primer lugar, sus porcentajes decayeron en Mineros, Santa Rosa del Sara, Buena Vista, San Julián o Saipina. Se erosiona su capacidad de aglutinamiento de los intereses de los distintos grupos sociales de esas zonas: empresarios. Pequeños campesinos, colonizadores, etc. Las pérdidas se agudizan en el electorado más vulnerable, de las zonas rurales, siguiendo una lógica descrita arriba.

Para dar un único ejemplo, en el municipio de Mineros, el MNR avanzó en la capital de la sección pero declinó en las localidades agrícolas. José Luis Gálvez Vera. (2002). Elecciones Presidenciales 2002. La Paz Bolivia: Garza Azul.

2.3. Políticas de gobierno y de Estado, del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Gonzalo Sánchez de Lozada, a la cabeza del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), participó por tercera vez como candidato a la Presidencia en las elecciones nacionales de junio de 2002. Como no obtuvo la mayoría absoluta en esos comicios, fue en el Congreso Nacional con el apoyo del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), fundamentalmente donde logró acceder, por segunda vez, a la Presidencia de la República. En la campaña electoral, el también jefe del MNR presentó una propuesta, convertida luego en Programa de Gobierno, que se resume en los siguientes puntos:

Restitución del pago del Bono de Solidaridad (Bonosol). Concebido en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), reformulado durante el Gobierno de Hugo Banzer (1997-2000) y destinado a la tercera edad, el Bonosol, además de constituirse en parte central de la política social del MNR, se convirtió en un efectivo mecanismo de convocatoria electoral. Su pago proviene de los dividendos que obtienen las empresas capitalizadas y que entregan al Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) del reformado sistema de Seguridad Social (pensiones). Esos dividendos, sin embargo, nunca lograron cubrir el monto requerido para hacer efectiva su cancelación. En promedio, las citadas empresas entregaron 40

millones de dólares por año. Para el pago del Bonosol se requieren 90 millones de dólares. Para subsanar ese déficit, el segundo gobierno de Sánchez Lozada fusionó el mencionado FCC y el Fondo de Capitalización Individual (FCI), poniendo en riesgo las rentas de jubilación de los actuales trabajadores que aportan al segundo de esos fondos.

Implantación del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI). El principal objetivo de esta medida fue la ampliación pretendidamente “universal” de la cobertura y las prestaciones médicas a madres y niños. Funcionó con recursos de los municipios y sus resultados son relativos y altamente cuestionables.

Obras con Empleos. La ejecución de esta propuesta, la más publicitada en el periodo electoral, requería la suma de 4.500 millones de dólares. Su financiamiento procedía de fuentes externas y donaciones. El programa consistía en la construcción de carreteras, dotación de energía eléctrica y ejecución de planes de riego en el área rural, especialmente en el altiplano, instalación domiciliaria de gas y construcción de viviendas de corte popular. La profundidad de la crisis económica, las fuertes limitaciones presupuestarias y la imposibilidad de contar con fondos de contrapartida, impidieron que este programa supere la etapa de su planificación (excepto la instalación de gas domiciliario, que sí dio sus primeros pasos). En general, Sánchez de Lozada y su equipo económico fueron incapaces de percibir y aprehender la dimensión de la crisis económica para enfrentarla con programas y políticas acordes a esta situación.

Hospital de Empresas. En pocas palabras, el objetivo de este programa era apoyar la recuperación de empresas consideradas “viables” y cancelar aquellas que no lo fueran. El programa adquirió forma en la Ley de Reestructuración Voluntaria de Empresas que consistía, sustancialmente, en la suscripción de contratos de transacción entre aquellas empresas consideradas “viables” y sus deudores y acreedores. Las empresas consideradas “viables” eran aquellas que, luego de una evaluación, fueran capaces de reestructurar sus deudas con el sistema bancario con el apoyo del Estado. La citada ley facilitaba los mecanismos de liquidación de las empresas que no calificaran para el proceso de reestructuración. Esta propuesta,

concebida bajo los lineamientos básicos del ajuste estructural, estaba dirigida, una vez más, a apoyar la recuperación de un reducido número de empresas, las denominadas “grandes”, sólo un 5% del total. Como todas las propuestas de Sánchez de Lozada, el “Hospital de Empresas” sólo pudo formularse en sus líneas básicas, con resultados extremadamente parciales. Carlos Villegas Quiroga. (2004). El Movimiento Social y la Caída de Sánchez de Lozada. La Paz Bolivia: Plural.

Como no había sucedido nunca en más de 20 años de democracia en Bolivia, el segundo gobierno de Sánchez de Lozada apenas pudo sostenerse durante 14 meses de los 60 que supone una gestión de gobierno de cinco años. Por supuesto, en ese corto periodo se hizo evidente la imposibilidad de formular un programa de gobierno coherente.

La conformación de la alianza gubernamental con el MIR desde el inicio y con la posterior incorporación de Nueva Fuerza Republicana (NFR) no contribuyó a la mejora sustancial del escuálido programa presentado por Sánchez de Lozada en tiempo de elecciones. La crisis económica, en medio de un proceso de deterioro político permanente, se mantuvo intocada con su natural consecuencia de malestar social sobre amplios sectores del país. Carlos Villegas Quiroga. (2004). El Movimiento Social y la Caída de Sánchez de Lozada. La Paz Bolivia: Plural.

Junto a todo ello, comenzó a crecer la reivindicación y la discusión sobre la propiedad de los recursos hidrocarburíferos. La única y tímida respuesta que ofreció el gobierno de Sánchez de Lozada respecto de este último punto, en términos de realizaciones gubernamentales concretas, fue el inicio del programa de instalación domiciliaria de gas natural, especialmente en la ciudad de El Alto. En esa misma línea, como parte de una promesa electoral y debido a la presencia del MIR en la alianza gubernamental, el gobierno más breve de la democracia boliviana acordó revisar el proceso de Capitalización de las empresas públicas. Con ese propósito, se incorporó en el Ejecutivo la figura del Delegado Presidencial para la Revisión y Mejora de la Capitalización. Carlos Villegas Quiroga. (2004). El Movimiento Social y la Caída de Sánchez de Lozada. La Paz Bolivia: Plural.

2.4. Los partidos de la alianza, una imagen de cierre.

En las elecciones generales de 2002 se realizó una alianza política que suscribieron el 25 de julio el MNR y el MIR, el MNR con un porcentaje de voto del 22,42% y el MIR con un porcentaje de voto del 16,32%, haciendo un total de 38,74%, y poniendo como ganador al MNR, por muy encima del MAS que obtuvo sin ninguna alianza el 20,94% de la votación.

El MIR estaba, nuevamente, desafiando a los matemáticos y estadísticos. Desde un tercer lugar había logrado la presidencia de la República para Paz Zamora en 1989 y desde un cuarto lugar estaba en la perspectiva de tener la mitad del nuevo gobierno en el 2002.

La opinión pública estaba presionando para que se dé la alianza, y lo hacía por poderosas razones. El ejemplo de la pesadilla financiera que vivía la Argentina por esos días, y el propio Uruguay, hacía que la situación bancaria sea vista con angustia. Los ahorros se estaban saliendo y el gobierno hubiera tenido que dictar un congelamiento de depósitos se forma casi inmediatamente después de asumir el mandato, dos meses después de la posesión del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se pudo saber que los depósitos que salieron del sistema bancario sumaron 530 millones de dólares. Humberto Vacaflor Gaman. (2002). El Escenario pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

Al parecer no es un comportamiento que se pueda atribuir a la irresponsabilidad del MNR y MIR, es probable que la actitud algo descuidada que tienen los aliados en sus primeras semanas de gobierno obedezca a la creencia que tienen de que el avance de las opciones electorales campesinas ha llegado a su punto máximo y que ahora sólo puede retroceder.

La idea que está detrás de esa probabilidad es que los electores urbanos que apoyaron al candidato de los cocaleros han sido sacudidos por el pánico que cundió durante los días de la incertidumbre sobre el desenlace de las elecciones. Que esos electores hayan llegado a la conclusión de que el voto reproche a los partidos del sistema, que habían concebido como una travesura estuvo demasiado cerca de provocar una conmoción política. Y que nunca más harán una cosa semejante.

Lo cierto es que los dos partidos aliados están ante el mayor desafío de sus agitados existencias, lo malo es que enfrentan este desafío cuando en sus estructuras internas hay vientos de renovación, lo que quita firmeza a las acciones del gobierno.

El MNR sabía que Sánchez de Lozada no podría volver a ser candidato en el 2012, ya que los aspirantes a reemplazarlo están formando parte del gabinete de ministros. Eso permite predecir que existirá una división de esfuerzos, que terminaría disminuyendo la fuerza del conjunto.

El MIR, por su lado, mira con curiosidad a un aspirante temprano a reemplazar a Paz Zamora, esa situación ha creado cierta división dentro del MIR, lo que tampoco ayuda mucho a dar fuerza al gobierno.

Así, debilitados o divididos, los dos partidos que se aliaron el 25 de julio para evitar que la desconfianza ciudadana acabe con el sistema financiero, al retirar sus ahorros, se enfrentarían a una situación muy compleja.

Las reformas económicas han dejado un Estado muy empobrecido, las inversiones que llegan se concentran en actividades que no generan empleo y los desocupados están creando ya una situación de inseguridad y violencia como nunca antes había vivido Bolivia.

El panorama se complica por la existencia de una grave crisis regional, que comenzó en la Argentina, se extendió a Uruguay y Paraguay y a fines de este año 2002 estaba a punto de contagiar incluso a Brasil.

Un líder que sabe que no volverá a ser presidente y otro que duda de la posibilidad de volver a ser candidato dirigen este gobierno en un momento difícil.

Si tienen éxito habrán preservado la permanencia del sistema partidario tradicional. De lo contrario estarán dando lugar al surgimiento de nuevas figuras. Que esas figuras vayan a ser de las ciudades o del campo lo dirán los acontecimientos. Humberto Vacaflor Gaman. (2002). El Escenario pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

2.5. Alianzas del segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Las previsiones de las encuestas sobre los resultados de la elección generaron un primer escenario post electoral que quedó pronto descartado. En efecto. Las estimaciones iniciales dieron el triunfo al MNR y el segundo lugar a NFR, lo que implicaba que Sánchez de Lozada y Reyes Villa tenían posibilidades de disputar la presidencia en el Parlamento. El MAS anunció inmediatamente que no se aliaría con ninguna otra fuerza, reduciendo considerablemente el número de alianzas posibles, mientras que el MIR mantuvo una línea de espera.

De entrada, las posibilidades del MNR eran mayores pues contaba con la bancada parlamentaria más numerosa y la diferencia era especialmente contundente en el Senado.

Siguió una fase de espera cuando se comprobó que los datos oficiales darían probablemente el segundo puesto a Morales por encima de Reyes Villa. La incertidumbre creció e incluso el sistema financiero registró caídas en los depósitos. El MIR, luego de una reunión en Tarija, anunció que no respaldaría a ninguna de las dos primeras fuerzas aunque prometió que diseñaría nuevos métodos de trabajo en el Parlamento. El MNR anunció que abría negociaciones con NFR mientras que el MAS parecía en la imposibilidad de lograr acuerdos partidarios y se contentaba con la manifestación de apoyos individuales (J. Justiniano del PS, A. Veliz de NFR).

Cuando parecía que un trato MNR - NFR estaba a punto de sellarse, Reyes Villa dio por concluidas las negociaciones, explicando que se encontraron diferencias insalvables entre los programas de ambas organizaciones y que NFR insistiría en un recuento de las actas electorales. En medio de una incertidumbre creciente, el MNR anunció su disposición a gobernar en minoría pero logró reanudar las negociaciones con el MIR hasta concretar un acuerdo. Gracias a él, Sánchez de Lozada conformaba una mayoría parlamentaria sólida, el MIR accedía a la dirección de importantes puestos en el gabinete y las prefecturas, y se acordaba un "plan de gobierno Bolivia". Los principales puntos contemplados en ese plan siguieron los lineamientos fijados por el MNR en su "Plan de emergencia": atención prioritaria al empleo, lucha contra la corrupción, pago del Bonosol, reformas a la Constitución sin recurrir a la Asamblea Constituyente, definición de una política nacional sobre el gas, pero

también incorporó la revisión de la Capitalización y generar políticas de inclusión social. De esta manera, el MNR contaba con el respaldo del MIR y los votos de UCS y de ADN que definió respaldar la elección congresal de Sánchez de Lozada pero permaneciendo en la oposición.

El acuerdo suscrito por el MNR y el MIR tiene relevancia por varios factores. Confirma al MNR como el partido central del período liberal de la democracia boliviana: de las dos décadas de régimen representativo, es el partido que más ha gobernado y, al final de su período, habría ejercido el poder durante más de la mitad del cuarto de siglo de democracia. Coloca igualmente a Sánchez de Lozada como una figura clave, aparte de ganar tres elecciones, es el único mandatario del período democrático que logró una reelección.

Más allá de esos elementos, el pacto Sánchez de Lozada - Paz Zamora mantiene vigente una de las características centrales del régimen político: el sistema de coaliciones post electorales que trabajan de forma compartida en el Parlamento y en el gobierno. Este rasgo, que le da una personalidad propia a la democracia boliviana en el conjunto latinoamericano, minimiza problemas políticos, por lo que D. Nohlen no dudó en considerar sus efectos como "muy buenos".

Asimismo, después de los pactos MNR - ADN (1985 - 1989) y ADN - MIR (1989 - 1993; 1997 - 2002), la unión MNR - MIR termina de conformar un bloque político que integra al MNR, al MIR y a ADN, con cerca de 40%. Esos partidos hoy hacen frente a un bloque compuesto por el MIP y el MAS, agrupaciones que acumulan un quinto de los votantes.

La firme decisión del MAS y del MIP de permanecer al margen de acuerdos políticos de gobierno contribuye a diseñar, por lo menos por los próximos años, un sistema partidario bipolar con pocas zonas de entendimiento.

Para concluir, es útil comparar los inicios de los dos mandatos de Sánchez de Lozada para esbozar algunas perspectivas para el quinquenio 2002-2007. El gobierno de Sánchez de Lozada se inicia en condiciones muy distintas del que presidió en 1993. En aquel entonces, llegó con un porcentaje muy alto y una amplia legitimidad social

y política; ahora triunfó con un marcador bajo y su éxito tiene un sabor paradójico pues es uno de los políticos más resistidos. Esas diferencias anuncian un estado de gracia breve, agravado por las transformaciones de la vida política y social ocurridas durante el período de Banzer que han revigorizado las alas más radicales del movimiento campesino. Luego, si en 1993 el MNR era claramente la cabeza del gobierno y sus aliados (UCS, MBL) tenían escasa capacidad de presión sobre el mandatario, en 2002 el MNR comparte el gobierno con un aliado que no tiene una talla significativamente diferente de la suya y que consiguió una presencia fuerte en el poder ejecutivo (MIR). Por lo tanto, además de tener una menor capacidad de dirección, como sucede en este tipo de coaliciones, es probable que el MNR pague la mayor parte del costo del desgaste gubernamental. Finalmente, en su primer gobierno, Sánchez de Lozada llegó con una plataforma ambiciosa y una cómoda mayoría para ejecutar sus reformas; para su segunda presidencia, cuenta con medios mucho más limitados que recortan su iniciativa y carece de un programa de tantas pretensiones como el Plan de Todas. En 1993, el MNR llegó con un programa de transformaciones que le daba la iniciativa, en 2002 propuso un plan de reacción ante una situación considerada muy deteriorada.

El perfil inicial de ambas gestiones difiere sensiblemente por razones inherentes al MNR pero también por causas externas: en 2002, el tipo de oposición es diferente. Ocho años antes, el MNR tenía al frente a un disuelto Acuerdo Patriótico, cuya visión del país tenía numerosos puntos de encuentro con la suya y que tenía dos integrantes centrales (MIR - ADN) golpeados por los resultados electorales de 1993. En cambio en 2002, si NFR sufre serios problemas para mantener su cohesión, el MAS vive su segundo lugar como una notable victoria, puede tener capacidad para federar a otras organizaciones políticas y sociales detrás de él, y no concibe su acción limitada sólo al Congreso lo que complicaría la tarea de Sánchez de Lozada. José Luis Gálvez Vera. (2002). Elecciones Presidenciales 2002. La Paz Bolivia: Garza Azul.

Entre 1985 y 2002, las tiendas políticas se vieron obligadas a hacer alianzas, inspiradas en el reparto de espacios de poder, antes que en la coincidencia de programas, lo que terminó desgastando su credibilidad. Lo que se fortaleció fue la

opción democrática del pueblo boliviano que acudió, entre 1985 y 2005, a seis elecciones presidenciales y a ocho municipales, además de dos referéndums y una elección de constituyentes y otra de prefectos.

Para que Gonzalo Sánchez de Lozada tomara la presidencia en el año 2002, en esas elecciones generales tuvo que hacer una alianza partidaria entre el MNR, MIR, UCS y el NFR, consiguiendo así el 22.5% de la votación total.

Más allá del voto, la ciudadanía ha sido constante en su demanda para que en democracia se logre el gran objetivo del bien común. Juan Carlos Núñez. (2008). 25 Años de Democracia. La Paz Bolivia: Jubileo Bolivia.

El 30 de junio de 2002 se llevaron a cabo elecciones generales para renovar los poderes públicos legislativos y ejecutivo. En dicha ocasión, la alianza política MNR-MBL con un 22,46% de los votos lograba una victoria electoral. A partir de ello y en aplicación de los conocidos pactos y mecanismos parlamentarios se posibilitó la reelección de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien accedería a la presidencia de la República por segunda vez en menos de 10 años.

Con ésta elección se cerró la política de pactos y los comportamientos político-electorales fragmentados. Por otra parte, se convulsionaría de tal modo este periodo de gobierno que se produjo poco tiempo después de las elecciones de 2002 intensas movilizaciones que expresaban insatisfacción social acumulada con relación a la situación económica y a la propiedad de los recursos naturales (tierra, hidrocarburos, empresas del Estado, etc.). Estas movilizaciones estuvieron acompañadas de violencia ciudadana y estatal.

Casi como un efecto de las intensas movilizaciones que colocaron al borde del colapso y la parálisis total del Estado Nacional y de la democracia incluyente, se produjeron una serie de eventos que profundizarían la crisis de gobierno y de Estado. Estos hechos se pueden resumir en la renuncia forzada del Presidente de la República (octubre 2003) luego de movilizaciones populares que obligaron a ésta extrema decisión; dos sucesiones presidenciales consecutivas; el acortamiento del mandato del Poder Legislativo y en consecuencia del periodo de gobierno, elecciones

anticipadas para la renovación total del poder público, efectuadas en diciembre de 2005. Estas últimas elecciones cambiarían radicalmente dos elementos centrales de la tradición presidencialista y del funcionamiento institucional. Por una parte, el comportamiento ciudadano electoral dejó a un lado la fragmentación electoral y se encaminó hacia la polarización del sistema de partidos políticos.

Finalmente, se eliminó drásticamente la política de pactos parlamentarios para la designación del presidente de la República, en razón de la concentración del voto a favor del Movimiento al Socialismo MAS (53,74%). Lo cual le permitió obtener de manera directa la nominación presidencial. Por tanto, convirtió en superflua la utilización del mecanismo constitucional de la elección del Presidente en el Congreso, estipulado en el Artículo 90° de la Constitución.

Este nuevo comportamiento político del elector y la concentración del voto terminó por sepultar la política de los pactos. Unos meses antes de la realización de elecciones de diciembre de 2005, en los cortos gobiernos que accedieron al poder mediante el mecanismo de la sucesión presidencial, las presidencias de Carlos D. Mesa Gisbert (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), –la política pactada– había recibido un duro golpe. Ambos gobernantes si bien llegaron a ejercer la presidencia del país como consecuencia de acuerdos políticos en el Parlamento, administraron el Estado sin la participación directa en el gobierno de los partidos políticos. En uno de los casos el gobierno de Mesa Gisbert- gobernó con la abierta hostilidad del Parlamento, partidos y grupos sociales movilizados.

Un hecho importante a destacar de este complejo tiempo político, entre 2002 y 2005, es que el sistema de partidos en los momentos agónicos de su influencia política, logra aprobar una segunda Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución Política del estado orientada a reformar, por segunda vez en menos de 10 años, la Constitución de 1967. Las últimas reverberaciones de la política pactada entregan su último legado y tributo al país con la aprobación de la Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado, Ley N° 2631 de 20 de febrero de 2004. Esta reforma, sancionada por Mesa Gisbert, permite la incorporación de institutos de la democracia directa como la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum y la

Asamblea Constituyente. José Luis Gálvez Vera. (2002). Elecciones Presidenciales 2002. La Paz Bolivia: Garza Azul.

2.6. Consecuencias estructurales-políticas de las elecciones presidenciales 2002.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 30 de junio de 2002 han tenido cuatro grandes consecuencias:

- a) Una significativa recomposición del sistema de partidos.
- b) Una fuerte polarización entre partidos tradicionales y nuevas fuerzas políticas.
- c) Un avance cualitativo de la representación política por la inclusión de sectores indígenas y campesinos al sistema político
- d) Una importante redistribución territorial del voto.

José Luis Gálvez Vera. (2002). Elecciones Presidenciales 2002. La Paz Bolivia: Garza Azul.

El efecto de mayor trascendencia ha sido, sin duda, la recomposición del sistema de partidos: el sistema moderado de cinco partidos que prevaleció desde las elecciones de 1989 (MNR, MIR, ADN, UCS y CONDEPA) se ha transformado en un sistema polarizado de cuatro partidos y movimientos políticos importantes (MNR, MIR vrs. MAS, NFR). Desde 1985 hasta estas elecciones, este sistema, que nunca produjo mayorías absolutas, fue dominado por un eje o trípode de tres partidos -MNR, MIR y ADN- cada uno de los cuales fue partido predominante en cuatro gobiernos de coalición. Estos tres partidos concentraban entre el 57 % y el 65% los votos y el 66% y el 80% de los escaños formando con la ayuda de partidos menores dos bloques -ADN/MIR y MNR- que se alternaban en el gobierno. En estas elecciones se produjo un fenómeno de vasto alcance, puesto que tuvo lugar una recomposición que no se tradujo, sin embargo, como pronosticaron varios analistas políticos, en una descomposición del sistema de partidos. Es cierto que el trípode de partidos se deshizo: ADN, que en las elecciones de 1997 obtuviera el 22,26% de los votos y 45 escaños, sufrió una catastrófica derrota al alcanzar sólo el 3,4% de votos y 5 escaños, pero lo destacable es precisamente que el MNR y el MIR mantuvieran sus posiciones

de partidos relevantes. El MNR ganó estas elecciones por una ligera mayoría relativa, con el 22,46% de los votos; pero obtuvo la bancada más fuerte con 47 escaños, mientras que el MIR, con el 16,32% de los votos, se colocó como tercera fuerza parlamentaria con 31 de los 157 escaños parlamentarios. El sistema de cinco partidos también se deshizo, porque dos partidos neopopulistas -UCS y CONDEPA- que surgieron a fines de la década de los ochenta pasaron al limbo. UCS se convirtió en un partido marginal, al alcanzar sólo el 5,5% de los votos y 5 escaños, y CONDEPA simplemente desapareció del mapa y perdió su personería jurídica, al obtener el 0,36% de los votos.

La recomposición ha sido también significativa debido a dos factores importantes. En primer lugar, el movimiento campesino liderizado por Evo Morales, cuyo núcleo son los sindicatos de campesinos cocaleros de la región del Chapare, se ubicó en segundo lugar con el 20,94% de los votos y 35 escaños participando con la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS). Si se agrega al Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) dirigido por Felipe Quispe -otro movimiento con arraigo en algunas provincias del Norte de La Paz- que consiguió el 6,09% de los votos y 6 escaños, los movimientos campesinos, transformados en movimientos políticos, han logrado una representación histórica: conjuntamente tienen el 27,03% de los votos y 41 escaños, que constituyen el 26% del total de escaños en el Parlamento. En segundo lugar, Nueva Fuerza Republicana, un partido neopopulista dirigido por Manfred Reyes Villa, se ubicó, en términos de votos, en el tercer lugar con el 20,91% de los votos pero, en términos de escaños, en el cuarto lugar.

El segundo efecto importante ha sido la polarización del sistema multipartidista moderado en virtud del surgimiento de un movimiento político de tendencia fuertemente antisistémica, el MAS, y un partido neopopulista muy personalista y débilmente estructurado, el NFR. Ambos han capturado el descontento con los partidos que dominaron el proceso democrático y encabezaron las reformas políticas y económicas realizadas desde 1985, aunque sin lograr desplazarlos. Es decir, la polarización ha modificado el escenario político y ha creado una nueva correlación de fuerzas políticas, pero los dos partidos que formaron el eje del sistema el MNR y el MIR han resistido el embate neopopulista y antisistémico manteniendo las pautas

centrales de negociación y concertación que han sido la base de la democracia pactada en Bolivia a partir de 1985. De otra manera, habría sido imposible que el MNR y el MIR tuvieran la fuerza política necesaria para formar un nuevo gobierno de coalición como ha tenido lugar el 6 de agosto con el ascenso de Sánchez de Lozada a la presidencia de la República.

El tercer efecto de relevancia ha sido la inclusión de nuevos sectores sociales al sistema político. Debido a las características del sistema electoral de doble circunscripción y representación proporcional personalizada que está vigente desde 1997, el sistema democrático ha demostrado tener una gran capacidad de inclusión fortaleciendo la tendencia hacia una representación autónoma de sectores populares y campesinos. Ha permitido que movimientos sociales puedan transformarse en movimientos políticos.

Finalmente, el cuarto efecto de las elecciones tiene que ver con una significativa redistribución territorial y regionalización del voto. Es notable que el MAS haya ganado las elecciones por mayoría relativa en cuatro de los cinco departamentos donde está concentrada la población indígena: La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí. Por otra parte, el MNR triunfó en los departamentales orientales y amazónicos -Santa Cruz, Beni y Pando- mientras que el MIR ganó sólo en Tarija.

Estas elecciones tuvieron los resultados más imprevisibles e inciertos desde la transición, tan imprevisibles que cayeron en gruesos errores las encuestas realizadas por los medios de comunicación y la gran mayoría de los pronósticos catastrofistas de los analistas políticos. El resultado fundamental fue una situación de extrema polarización entre dos alternativas: la alternativa de cambio radical y utópico del MAS, y la alternativa de reforma controlada, propuesta por el MNR, para resolver los problemas económicos y sociales de urgencia sin echar por la borda los avances políticos y económicos logrados desde 1985. Descartado el MAS como potencial socio porque era además el competidor en la elección congresal, el MNR entabló casi simultáneamente negociaciones a dos bandas con el NFR y el MIR puesto que el apoyo de uno de esos partidos era imprescindible para allanarle el camino al poder. De hecho, a raíz de una primera decisión del MIR de no formar coalición con el

MNR, se vislumbraba como única opción posible una coalición del MNR con el NFR, a pesar de las grandes diferencias y contradicciones entre sus programas. Por otra parte, como he destacado, la competencia política desde 1985 entre los tres partidos relevantes había dado lugar, por diversas razones, al surgimiento de dos bloques que hicieron imposible hasta ahora una coalición entre el MNR y el MIR. A partir de las elecciones de 1989, estos partidos estuvieron enfrentados, más por razones de la lucha por el poder y la competencia personal entre sus líderes que por cuestiones ideológicas o programáticas.

Habiendo quedado excluido de la carrera presidencial, el MIR desplegó un juego en tres movimientos que, a mi criterio, parece haber estado encaminado desde un principio a colocarse como actor dirimidor de la formación de gobierno y, por lo tanto, no descartaba a priori el objetivo de concretar alguna forma de coalición con el MNR. En efecto, el primer movimiento consistió en pasar a la oposición y ofrecer apoyo al gobierno de Sánchez de Lozada “gobernando desde el Parlamento”; decisión con la que se proponía colocarse en una posición equidistante entre el futuro gobierno y la oposición del MAS y el MIP. Esta decisión tenía también la ventaja de que el MIR no diera la impresión de ser un partido ávido por cogobernar nuevamente, aunque empujaba momentáneamente al MNR a negociar con el NFR. Por otro lado, contando quizás con el rechazo previsible de Reyes Villa a formar gobierno con Sánchez de Lozada, esta decisión tenía la otra gran ventaja de aumentar el poder de negociación del MIR.

De hecho, el rechazo de Reyes Villa el 21 de Julio no le dejaba al MNR otra alternativa que formar un gobierno minoritario con un inestable apoyo parlamentario del MIR, pero débil y muy probablemente incapaz de resistir la anunciada ofensiva de la oposición del MAS y el MIP contra el modelo económico y político. Esta alternativa parecía, en efecto, inevitable. En este punto y en un contexto de enorme fragilidad e inseguridad regional, se fue agravando, sin embargo, la crítica situación postelectoral de incertidumbre política y económica, y la estabilidad financiera del país empezó a ser erosionada con una limitada corrida bancaria. Parecía cernirse irremediamente un horizonte de ingobernabilidad en el cual se pondría en juego la viabilidad futura del sistema político y del modelo económico. El MNR no podría

gobernar sin un fuerte aliado en el Congreso y el poder ejecutivo. Perfilándose una situación de suma cero, la muy probable perspectiva de desestabilización del país y fracaso de un gobierno minoritario del MNR habría amenazado con arrastrar también al MIR. En consecuencia, el MIR tenía que contemplar la posibilidad de que el descalabro de un gobierno aislado de Sánchez de Lozada arrastrara al país a una crisis de ingobernabilidad sin precedentes comprometiendo al sistema político en su conjunto.

La lógica de la situación misma hacía del MIR el dirimidor y el actor decisivo. En este contexto, importantes sectores como los principales medios de comunicación, las organizaciones empresariales, e instituciones como la iglesia católica, los organismos internacionales y la embajada de Estados Unidos ejercieron una poderosa presión, reclamando al MNR y el MIR, responsables de lo bueno y lo malo que se hizo en el proceso democrático desde 1985, que establecieran un pacto de gobernabilidad. Por esto, al margen de las preferencias subjetivas de los líderes del MNR y el MIR que habrían optado por otras alternativas si es que éstas hubieran existido, se puede afirmar que esta situación objetiva, que imponía la necesidad de evitar una eminente perspectiva de ingobernabilidad, indujo finalmente a ambos a buscar un acuerdo de gobierno. En el cálculo estratégico de intereses con el que se jugó la política postelectoral, el MIR aprovechó entonces el espacio dejado por el MNR proyectándose como el socio imprescindible para la coalición tanto gubernamental como parlamentaria que se estableció el 25 de julio en el marco del llamado “Plan Bolivia”; una coalición que le permite tener al gobierno de Sánchez de Lozada con el apoyo adicional de UCS y ADN una mayoría absoluta de 88 escaños en el Congreso. De esta manera, el acuerdo MNR-MIR cerró un ciclo de dos décadas de la historia política en el cual estos partidos estuvieron fuertemente enfrentados.

Es evidente que esta coalición de gobierno tiene muchas de las características de un “matrimonio obligado por las circunstancias”. En los medios de comunicación se impuso la analogía del matrimonio sin amor. Sería un error, empero, imponer un criterio puramente moral para evaluar el surgimiento de una coalición forjada en una coyuntura de polarización política y crisis económica. Por cierto, no faltan voces que tras la experiencia negativa del gobierno de Banzer- condenan drásticamente esta

coalición con el argumento de que carece de base programática y que su motivo principal fue la distribución de cargos y el clientelismo. A partir de su alianza con Banzer en 1989, el MIR estuvo además siempre bajo la crítica de sobreponer las ambiciones de poder a los principios y de actuar de manera utilitaria en función de los beneficios materiales que proporciona el acceso al Estado. Sin embargo, tampoco se puede ignorar que en el proceso de gestación de la nueva coalición se debatieron y trazaron los lineamientos básicos de un programa de políticas públicas como columna vertebral del acuerdo MNR-MIR y, que una vez logrado el acuerdo, se abordó la cuestión de la división de responsabilidades en el manejo de gobierno. Tanto el MNR como el MIR hicieron concesiones mutuas que no fueron fáciles, aunque es el MNR el que ha impuesto sus ideas fundamentales y controlará siete de los dieciocho ministerios claves relacionados con la política económica y la política interna. Por cierto, tampoco es superflua la sospecha acerca de si el Plan Bolivia es una simple justificación del motivo principal de satisfacer apetitos de poder o si es una estrategia viable y consistente para la solución de los problemas que afectan a la economía y sociedad bolivianas. Pero, de hecho, sería desconocer la naturaleza de la política si se piensa que, en un sistema de gobierno basado en acuerdos interpartidarios, una coalición gubernamental es un ejercicio desinteresado y puede prescindir de la distribución de cargos estatales entre los socios. Sólo las decisiones políticas y la puesta en marcha de las políticas públicas prometidas por el gobierno de Sánchez de Lozada revelarán si estamos ante una coalición programática con visión política de largo plazo o ante una coalición miope de simples intereses de poder como fue el gobierno de Banzer. En el mismo sentido, sólo la coherencia programática así como la eficacia sostenida de la acción gubernamental podrán disipar las dudas sobre la naturaleza de la coalición y su capacidad para enfrentar los problemas centrales del país en esta coyuntura tan decisiva para el sistema político y la economía.

La coalición MNR-MIR ha sido el fruto de un parto difícil y no le será fácil en la política diaria lograr acuerdos y tomar decisiones. En los gobiernos que lideró, el MNR ha sido un partido acostumbrado a jugar un rol hegemónico mientras que el MIR ha sido un partido incómodo y poco leal con los gobiernos en los que fue aliado

(gobiernos de Siles Zuazo y Banzer). Es la primera vez que el MNR tendrá que cogobernar con un aliado con un fuerte peso tanto en el Congreso como en el poder ejecutivo donde ocupa el 40% de las carteras ministeriales. Pero, en virtud de la situación por la que atraviesa el país, todo parece indicar que ambos partidos están obligados a entenderse y, sobre todo, a asumir el reto de desarrollar un nuevo estilo de política deliberativa que exige una permanente concertación no sólo entre ellos, sino entre el gobierno y la oposición parlamentaria así como entre el gobierno y las organizaciones sociales. Esta nueva política es, a mi modo de ver, urgente como necesaria para enfrentar desafíos tan complejos en el campo económico y político. El gobierno deberá no sólo combatir la recesión económica y el desempleo, e impulsar un desarrollo económico integral en el área rural y las ciudades elevando sustancialmente la inversión pública. Está igualmente ante el inmediato desafío de recuperar la capacidad de acción gubernamental de los partidos políticos, restaurar la autoridad del Estado -tan venida a menos en el gobierno de Banzer- así como fortalecer y ampliar su rol y capacidad de conducción en un difícil contexto de sobrecarga de demandas sociales y síntomas graves de anomia social.

Por supuesto, el escenario de una coalición difícil, aunque sustentable, entre el MNR y el MIR es uno de los más probables. Otros escenarios menos deseables, que no se pueden descartar a priori, son: por una parte, que -ante la magnitud de los problemas económicos y los conflictos sociales, y sobre todo ante la oposición radical del MAS y de otros movimientos sociales- sobrevenga una ruptura de la coalición que deje al gobierno de Sánchez de Lozada en la condición de gobierno minoritario y lo presione a buscar otro aliado que le permita recomponer su mayoría parlamentaria y continuar con su mandato. Por otra parte, también es posible, aunque menos probable, un escenario catastrófico: un fracaso total de la coalición que derive en una grave crisis de gobierno y obligue a Sánchez de Lozada a una renuncia anticipada. Rene Antonio Mayorga. (2004). La crisis del Sistema de Partidos Políticos en Bolivia. La Paz Bolivia: Plural.

Uno de los objetivos del retorno de Sánchez de Lozada a la presidencia, fue recuperar la imagen y la dirección de las reformas estructurales de su primer gobierno, duramente criticadas (y en algunos casos frenadas o boicoteadas desde el

gobierno) en las gestiones de Banzer-Quiroga (ADN-MIR) y desde las posiciones de izquierda contrarias al supuesto liberalismo de ese proceso. Sánchez de Lozada, sin embargo, no hizo una lectura correcta del escenario nacional de principios de siglo. El rechazo masivo a la capitalización lo identificó ante las grandes mayorías como responsable de la enajenación del recurso natural más importante del país, el gas. Se había producido además un recambio generacional que marcó claramente la presidencia de Jorge Quiroga, quien tras siete mandatarios sexagenarios y septuagenarios desde 1979, se posesionó con apenas 41 años (el Presidente civil más joven de la historia). La saga de los Banzer (ya fallecido), Sánchez de Lozada y Paz Zamora, había concluido por razones generacionales y por agotamiento de propuestas.

Hay que subrayar también la diferencia muy grande entre su primer y segundo gobierno. La apertura del primero a independientes e incluso militantes de la izquierda seducidos por el ambicioso programa de cambios, fue uno de sus rasgos distintivos. Técnicos e intelectuales de primer nivel tuvieron cabida en esa gestión. En el segundo gobierno la consigna fue “ahora le toca al MNR”. Un gobierno de partido, basado en prebendas y privilegios para la militancia y no por la excelencia, sustituyó la lógica anterior. El 35% de voto popular de 1993 que pasó a un reducido 22% en las elecciones de 2002, colocó al Presidente en posición débil, lo que lo forzó a acuerdos apadrinados por los Estados Unidos entre el MNR y el MIR, entre Gonzalo Sánchez y Jaime Paz, cuyos rencores personales nunca se superaron. Los débiles aliados del MBL y UCS no pudieron contrarrestar a un MIR que controló y debilitó al gobernante desde el primer día.

El acuerdo, como en 1989 y 1997 cuando el MIR fue protagonista de gestiones de estado, se basó en un reparto de cargos y cuotas de poder así al 50% para cada uno, desnaturalizando cualquier opción de una gestión que recuperase el espíritu de 1993. La responsabilidad de lo que ocurrió en este periodo fue en consecuencia de ambos líderes y de ambos partidos. El parlamento marcó por su parte una nueva composición que parecía reflejar un cambio histórico, pero que mostró muy rápidamente su incapacidad y la repetición de viejas prácticas prebendales y de sujeción al ejecutivo terriblemente negativas para el país. La cámara alta tuvo 3

senadores indígenas sobre 27, el 11%. La cámara de diputados contó con 24 indígenas sobre 130 representantes, el 18 %, un crecimiento significativo aunque insuficiente en la proporción de la población india, que de acuerdo al censo de 2001 (manipulado por una pregunta que obligaba a una identificación étnica, desconociendo la categoría de mestizaje) representaba el 62% del total por autoidentificación de los censados y solo 45 % de acuerdo a la lengua materna indígena hablada por los censados.

La oferta gubernamental básica fue la generación de obras con empleos. El principal problema del país, el desempleo, se había agudizado por la recesión. De hecho el gobierno solo pudo paliar la situación con la continuación del “Plane”, un programa de empleo temporal equivalente al salario mínimo nacional para obras de infraestructura a cargo del gobierno que no pudo encarar la solución estructural del desempleo.

La situación económica que heredó era muy crítica. La recesión que se había iniciado en 1999 remitió leve aunque insuficientemente en el 2002, el 2003 fue el año de inflexión de la economía. El principal problema era el déficit fiscal. En los gobiernos de Banzer y Quiroga subió de 4,65 a 8,81. A pesar de esa realidad, el gasto público se incrementó por la presión del cuoteo político. Al terminar el 2003, el déficit había bajado apenas 0.9 puntos. Para lograr ese resultado se incrementó los impuestos sobre beneficios a las refinerías de petróleo en manos privadas. Se calcula que en 2003 el contrabando le restó al TGN ingresos por 480 millones de U\$., alrededor de un 5 % del PIB. Se aprobó el nuevo código tributario cuyo objetivo era hacer más eficientes las recaudaciones. Las exportaciones crecieron en un 17% en el periodo 2002-2003. En tanto, el sistema financiero seguía con dificultades, altos niveles de mora, casi 10.000 juicios a deudores y más de 210 millones de U\$. de propiedades agrícolas entregadas en dación de pago. La crisis había dejado a la empresa privada local devastada y exhausta, con serias dificultades, gigantescas deudas financieras y también deudas con el estado (impuestos, Afp's y CNS). El proyecto del “hospital de empresas”, basado en el apoyo a empresas en dificultades que se acogieran al programa, no arrancó por la imposibilidad de acuerdos con los entes financiadores del proyecto.

Los sucesivos conflictos sociales de enero, febrero y septiembre de 2003, debilitaron progresivamente al gobierno y lo llevaron a su caída. Tras los hechos de febrero el MBL se retiró del gobierno. En su mensaje litúrgico de 20 junio de ese año, el cardenal Julio Terrazas describió al ejecutivo como hipócrita y soberbio. En respuesta la administración buscó a la iglesia que aceptó promover un acuerdo nacional que se frustró el 2 de septiembre cuando Evo Morales boicoteó su firma. En agosto de 2003, en un último esfuerzo por reposicionarse, Sánchez de Lozada y el cogobernante Paz Zamora, que habían dejado el manejo político en manos de Carlos Sánchez Berzaín y Óscar Eid, intentaron apuntalarse inútilmente con el ingreso al gobierno del NFR de Manfred Reyes Villa en agosto. Se recompuso el gabinete con un nuevo socio para el reparto de cargos del estado. Ricardo Paz Ballivian. (2003). La Crisis del Estado en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

CAPÍTULO III

Debilidad y Fragmentación en la Coalición de Gobierno MNR-MIR-NFR

Durante su segundo mandato presidencial, Gonzalo Sánchez de Lozada trató de retomar el curso de las reformas estructurales y el modelo económico que había empezado a implementar durante su primera gestión. Sin embargo, el panorama social resultó ser muy diferente al que prevalecía durante aquella primera ocasión.

Cabe mencionar, por ejemplo, que durante esta coyuntura creció el desencanto entre la población en torno al modelo neoliberal, sobre todo a partir de las críticas a la capitalización realizadas sistemáticamente, tanto desde el gobierno como desde las organizaciones sociales, durante los gobiernos de Bánzer y Quiroga.

De esta manera, a pesar de que el país había multiplicado sus reservas de hidrocarburos y desarrollado un potencial significativo para situarse como un núcleo energético en el continente, se culpaba al presidente Sánchez de Lozada por la supuesta pérdida de nuestro recurso natural más importante, el gas, ante las transnacionales, por otro lado, y a diferencia de su primera gestión, intelectuales independientes y militantes de la izquierda no fueron tomados en cuenta dentro del gobierno, por lo que debió abrirse incluso a los partidos que lo combatieron, como el MIR y NFR, a fin de tener una base parlamentaria sólida, a esto debe sumarse la crisis económica y fiscal, agravada por un manejo inadecuado de la reforma de pensiones en el gobierno de Bánzer y la reducción de los sembradíos de coca en el Chapare, un momento extremadamente crítico se produjo en febrero de 2003, cuando al presentarse el proyecto de Ley Financial o Presupuesto General de la Nación, se propuso una nueva reforma tributaria que pretendía gravar en mayor proporción los ingresos más altos, lo que fue utilizado como pretexto para un levantamiento policial seguido de manifestaciones que derivaron en actos de vandalismo ante la ausencia de mecanismos de control social, la agitación social aumentó progresivamente, ocasionando, en octubre de 2003, la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, así mismo los conflictos surgidos antes de la renuncia y a raíz de estas tensiones sociales derivaron en enfrentamientos entre la población y la Policía e incluso con las Fuerzas Armadas, con el saldo de numerosos muertos y heridos.

3.1. El origen de la crisis de octubre negro en Bolivia.

Como toda crisis política que acumula un abanico de múltiples contradicciones la crisis de octubre en Bolivia tiene un origen multicausal, pero se considera que son tres los factores principales que contribuyen a su gestación:

- 1) La existencia de al menos dos visiones acerca del Estado en el imaginario político boliviano: la que fue difundida y heredada desde la Revolución Nacional de 1952 y la que se promueve a partir de las reformas neoliberales.
- 2) La existencia de dos visiones diferenciadas de aquello que se entiende por democracia: una visión de democracia representativa con legitimación del proceso político a través del voto y otra visión de democracia participativa con legitimación del proceso político a través de la participación directa de la sociedad con lógica asambleísta.
- 3) La asociación del modelo político de democracia representativa con el modelo económico neoliberal desde el inicio del proceso democrático boliviano.

Estos tres factores contribuyen a ampliar la brecha entre sociedad y sistema político debido a que no existe intersubjetividad entre ambas, es decir que las dos instancias no comparten subjetivamente un mismo significado respecto al Estado, la democracia y el neoliberalismo, lo cual contribuye a profundizar la crisis de legitimidad, credibilidad y representatividad del sistema político, especialmente de su sistema de partidos. Veamos brevemente cada uno de éstos factores.

3.1.1. La concepción de “Estado” a partir de 1952.

Durante el periodo democrático y hasta el presente, el imaginario político enfrenta dos visiones contradictorias respecto al Estado: una muy difundida basada en una Estatolatría de los actores sociales que ven al Estado con la obligación de atender y resolver todos los problemas públicos y aún privados, producto de la imagen de Estado que se difunde con la Revolución Nacional de 1952; otra menos extendida que ve al Estado como Estado regulador normador que delega responsabilidades al sector privado, distante de la sociedad y que se rige de acuerdo a las

“recomendaciones” de los organismos internacionales, o sea el Estado del modelo neoliberal.

Esta última visión, entra en absoluta contradicción con la idea de Estado que se promueve en Bolivia a partir de la Revolución de 1952 que implementó reformas políticas vitales con efectos centrales sobre el imaginario político y sobre las representaciones sociales acerca del rol del Estado. El primer gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (1952-1956) como vanguardia de la triunfante revolución, estableció el monopolio en la exportación del estaño, alentó la política petrolera, recuperó el control sobre la explotación y la exportación de productos y recursos naturales, promovió la diversificación económica, la vertebración del país con la construcción de carreteras, la inversión pública en el oriente del país –hasta entonces concentrada en la zona andina-, la industrialización, la producción de petróleo, apostó al fomento del sector agrícola e implementó medidas estructurales como las que se describen a continuación.

- El decreto del **Voto Universal** del 21 de julio de 1952, con el que se rompió la democracia excluyente y el voto calificado haciendo elegible a cualquier mayor de edad. La ampliación de la participación y el ejercicio de la ciudadanía política fueron de impacto central en el imaginario colectivo, no solamente en términos de ampliación del número de electores, sino porque se le daba a los excluidos la decisión de quienes iban a ser sus gobernantes y ese fue un cambio de fondo.
- El decreto de **Nacionalización de las Minas** del 31 de octubre de 1952, a través del cual el 80% de los ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a poder del Estado, el objetivo era tomar el control total de la economía y descabezar a los grandes mineros del estaño, para que el Estado vuelva a ser dueño de sus recursos naturales y administrarlos para desarrollar el país.
- El decreto de **Reforma Agraria** de Agosto de 1953, que devolvió la tierra a los campesinos e incorporó a casi 2.000.000 de personas en la economía interna. Se procedió a la parcelación de tierras, distribuyéndose grandes extensiones entre los indígenas en el transcurso de los siguientes años.

- En 1955 se dictó un nuevo **Código de Educación** que la hizo universal y obligatoria, con instalación de núcleos escolares rurales para los campesinos, contribuyendo así a mediano y largo plazo la formación de estudiantes a lo largo de las poblaciones rurales del país, tratando con esto la disminución de la pobreza a largo plazo (la educación como pilar para estrechar la brecha entre riqueza y pobreza).

3.1.2. El proceso democrático boliviano y el sentido de “democracia”.

Los cambios en el modelo estatista se producen a partir del periodo de continuidad democrática iniciado en 1982 y consolidado en 1985. Desde entonces rige la democracia representativa como democracia pactada que ha posibilitado la estabilidad del régimen y la implementación de diversas y trascendentales reformas políticas que le dan nuevas características al funcionamiento del sistema político. Pero hasta la reforma constitucional de 2004 efecto de la crisis de octubre, la democracia boliviana tenía monopolio de representación para los partidos políticos y los ciudadanos sólo podían acceder a cargos de decisión a través de ellos, de modo que se creó una seria dependencia de las organizaciones sociales hacia un sistema de partidos que no representa la heterogeneidad de la composición social boliviana.

Las últimas encuestas de percepción política muestran un escenario de crisis de legitimidad, representatividad y credibilidad de los partidos políticos oficialistas y opositores-, y las organizaciones sociales que cumplían funciones de mediación política se han debilitado y fragmentado, se han separado de los gobiernos y han dejado de legitimarlos. En veinte años de democracia los partidos políticos no han logrado representar la pluralidad al interior del sistema. Aunque tampoco ningún actor de la sociedad ha podido lograr esa representación y articulación fuera del Parlamento.

La ausencia de mayorías absolutas en el comportamiento del voto debido a la pluriculturalidad y fragmentación de la sociedad boliviana, llevó al sistema político a depender de la conformación de alianzas en el Congreso para la designación del gobierno con la mayoría absoluta, la denominada democracia pactada. Ese rasgo llevó a una forma de elección indirecta del presidente que produjo una articulación

entre gobierno y parlamento, que en una primera fase funcionó a partir de mayorías absolutas (1985-1997) y posibilitó las reformas políticas e institucionales; y que en una segunda fase funcionó a partir de la captura oficialista de los dos tercios (1997-2003) y debilitó la separación y el equilibrio de los poderes públicos, atenuó el rol de fiscalización del Congreso sobre el gobierno, y posibilitó el incremento de la corrupción política, el mal uso de los escasos recursos públicos y amplió la brecha entre ciudadanos y representantes hasta llegar a una crisis generalizada en el mes de octubre de 2003.

3.1.3. La asociación de: democracia y neoliberalismo en el imaginario político.

El tercer factor que genera la crisis es la asociación del régimen democrático con el modelo neoliberal, que se inicia con el primer gobierno de democracia pactada, con el Pacto por la Democracia establecido entre MNR y ADN entre 1985 y 1989, que aplicó las reformas de primera generación y dio paso a la economía de libre mercado en un momento en que la economía boliviana estaba en una crítica situación con cuatro años de crecimiento negativo, un alto déficit fiscal, endeudamiento externo y un proceso hiperinflacionario que llegó al 11.495%. Este fue el cuarto gobierno del histórico líder movimientista Víctor Paz Estensoro y la situación en la que se inició el periodo era caótica: hiperinflación con ingobernabilidad, a lo que se sumó el impacto de un ambiente mundial inestable que afectó adversamente al país con altas tasas de interés internacionales, resistencia a otorgar créditos a países altamente endeudados, y la caída del precio internacional del estaño.

En su primer gobierno constitucional (1993-1997) Gonzalo Sánchez de Lozada llevó adelante las reformas de segunda generación que fueron respuesta a demandas sociales postergadas por más de una década. La descentralización administrativa y la municipalización del país institucionalizaron nuevos mecanismos de participación ciudadana y de redistribución más equitativa de los recursos públicos hacia las zonas más vulnerables del país a través de los gobiernos locales, medidas que contribuyeron a generar apoyo de la sociedad al sistema político y a contener el descontento social ante la ausencia de resultados de reactivación económica.

En este mismo periodo se aprobó la reforma constitucional 1995 que reconoció la pluriculturalidad, se promulgaron las leyes de Participación Popular (LPP 1551) que redistribuye ingresos hacia los gobiernos locales, de Reforma Educativa (LRE 1565), de Descentralización Administrativa (LDA 1654), y diversas Leyes sociales como las de Seguridad Social Materno-infantil y el Seguro de Vejez, se introdujeron nuevas organizaciones como las Superintendencias, la Defensoría del Pueblo, los representantes Uninominales, el Consejo de la Judicatura y otros que permiten iniciar la transparentación de la gestión pública; pero también se promulgaron las Leyes de Capitalización y de Pensiones: la primera, una forma particular de privatización que pasa el 51% de las acciones de la propiedad de las empresas públicas a nombre de los bolivianos de manera simbólica y sin la mediación estatal por lo que el Estado no puede tomar decisiones sobre el uso de esas acciones y el otro 49% a empresas privadas nacionales o extranjeras; y la segunda con fuerte incidencia sobre el déficit fiscal. Jimena Costa Benavides. (2004). La “Guerra del Gas”. Representaciones Sobre Neoliberalismo y Defensa de los Recursos Naturales en la Crisis Política de Octubre de 2003 en Bolivia. La Paz Bolivia: Trebol.

El 17 de octubre de 2003 llegó a su fin el proyecto estatal desplegado desde mediados de los años ochenta sobre la base de la articulación del neoliberalismo y de la democracia representativa como resolución de los clivajes que marcaron la transición democrática y la reforma estatal: democracia-autoritarista y el Estado-mercado. Después de octubre, a través del referéndum sobre el gas y la Asamblea Constituyente se redefinirán, precisamente, las reglas del sistema político a partir de resolver la tensión entre democracia representativa y democracia participativa, así como, las pautas del papel del Estado en la economía a partir de la reformulación de la política económica vigente en casi dos décadas.

En los últimos años, las críticas a la democracia pactada, como modalidad de gestión política basada en la centralidad de los partidos, se condensaron en la demanda de convocatoria a una Asamblea Constituyente como respuesta a la crisis de representatividad del sistema de partidos a partir de apelaciones a la democracia participativa. Por su parte, las críticas al neoliberalismo se concentraron en el cuestionamiento a la capitalización de las empresas públicas y adquirieron nuevos

contornos a partir del debate respecto a la exportación de gas que se transformó en una demanda de mayor protagonismo del Estado en la economía.

Ambos temas surgieron en el año 2000 con la guerra del agua y los bloqueos campesinos en el altiplano y, luego, signaron el debate programático en el proceso electoral de junio de 2002 cuyos resultados provocaron la recomposición del sistema de partidos, merced a la emergencia de nuevas fuerzas políticas (Movimiento Al Socialismo, MAS; Nueva Fuerza Republicana, NFR y Movimiento Indígena Pachakuti, MIP) que esgrimieron estas demandas en La Asamblea Constituyente para superar la democracia pactada y revisión o reversión de la capitalización para recuperar el protagonismo económico del Estado y produjeron una polarización político-ideológico que desplazó la tendencia centrípeta que había caracterizado el funcionamiento del sistema de partidos en la década de los 90”.

3.2. La polarización entre el oficialismo y la oposición.

Esta polarización se exacerbó con la conformación de la coalición gubernamental entre el Movimiento nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) para elegir y secundar a Sánchez de Lozada y la presencia de MAS, NFR y MIP en la oposición parlamentaria. Se produjo, pues, la última combinación posible entre los partidos tradicionales que habían ejercido el poder gubernamental desde 1985 y cuya suma de votos no superaba el 40% de apoyo en las urnas. Al mismo tiempo, la conformación de la coalición de gobierno prescindía, por vez primera desde 1989, de la presencia de fuerzas políticas emergentes, las cuales, en conjunto, alcanzaban alrededor del 50% de la votación. La polarización en el sistema de partidos se combinó con el conservadurismo en la coalición de gobierno.

La coalición oficialista cerró filas en torno a las posturas irreductibles de Sánchez de Lozada que rechazaba la Asamblea Constituyente y defendía la capitalización adoptando una postura conservadora que, pese a la crisis de gobernabilidad provocada por los hechos luctuosos de febrero negro, no se modificó de manera sustantiva cuando la Iglesia católica propició un intento de concertación entre

oficialismo y oposición denominado Reencuentro Nacional. Fernando Mayorga. (2007). Democracia y Reforma Estatal en Bolivia. La Paz Bolivia: CESU - UMSS.

A mediados de septiembre de 2003, se iniciaron bloqueos campesinos en la zona del lago Titicaca en protesta contra el proyecto de exportación de gas a los Estados Unidos y México, de las negociaciones del ALCA, y de las condiciones sociales de Bolivia. Este conflicto fue extendiéndose gradualmente hasta convertirse en una huelga general que exigía la paralización del proyecto de exportación del gas boliviano a través de un puerto chileno, la revisión de las políticas del gobierno del presidente Sánchez de Lozada, y en última instancia su dimisión. El 9 de octubre la situación empezó a tornarse violenta en el empobrecido suburbio paceño de El Alto, llevando al presidente a ordenar un despliegue militar que a la postre desembocaría en la muerte de docenas de manifestantes. La desmesurada reacción de Gonzalo Sánchez de Lozada y de las fuerzas de seguridad, junto con el clima de crispación reinante, generó fisuras cada vez más profundas en la frágil coalición gobernante, que a mediados de octubre veía como varios ministros dimitían y el vice-presidente Carlos Mesa retiraba su apoyo al presidente. La situación se tornó insostenible, y el 18 de octubre Sánchez de Lozada dimitía, y huía del país, poniendo así fin a la que vino a conocerse popularmente como la “guerra del gas”. El vice-presidente Carlos Mesa tomaba el relevo al frente del ejecutivo, y se enfrenta en la actualidad al reto de gobernar Bolivia en un contexto de gran crispación, fragmentación política, y tendencias rupturistas.

Estos acontecimientos no pueden interpretarse como un episodio aislado en la historia reciente de Bolivia. En abril de 2000 se desató en Cochabamba un violento levantamiento de la ecléctica Coordinadora del Agua y la Vida en contra de la privatización de los servicios de agua que logró paralizar el proceso. En febrero de 2003, la introducción de un nuevo impuesto sobre la renta generó violentos enfrentamientos en La Paz, saldándose con cerca de 30 muertos, y con la retirada del impuesto por parte del gobierno. Entre tanto, La Paz ha vivido manifestaciones casi a diario, en la región del Chapare el movimiento cocalero se ha venido enfrentando periódicamente con las fuerzas del orden en contra de la política de erradicación de la hoja de coca, y en el Altiplano, el nacionalismo aymara se ha mostrado

irreconciliable. Estos conflictos han sido desencadenados por acontecimientos aparentemente aislados, pero todos ellos son síntomas de las profundas brechas que fracturan al país, y de la crisis por la que atraviesa la institucionalidad boliviana tras dos décadas de reformas políticas y económicas.

3.4. Emergen las fuerzas políticas indígenas.

La manifestación más evidente de esta crisis ha sido la emergencia de nuevas fuerzas sociales y políticas a menudo con un marcado carácter indígena. La más conocida es el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el cocalero Evo Morales, que a punto estuvo de ganar las elecciones celebradas en junio de 2002, en parte gracias a la reacción que generaron en el electorado boliviano las amenazas del embajador norteamericano de tomar represalias en caso de que triunfase el MAS en los comicios. Este partido se asemeja a otros movimientos que han surgido en el continente en oposición a las reformas neoliberales y de mercado enmarcadas en el Consenso de Washington, y algunos han llegado a comparar a Evo Morales con Lula. Sin embargo, su movimiento tiene un marcado carácter distintivo que se pone de manifiesto en sus bases indigenistas, y en sus reivindicaciones en torno a la política de erradicación de Coca, que tiene una poderosa significatividad cultural y simbólica en el imaginario boliviano.

Más difícil de ubicar en el contexto latinoamericano es el movimiento nacionalista aymara liderado por el carismático Felipe Quispe, conocido popularmente como “el Mallku” (Gran Cónдор). Este movimiento rechaza la institucionalidad republicana boliviana, a la que tilda de régimen neo-colonialista, y aboga por la autonomía de los Ayllus, lo que en definitiva significa la formación de un estado paralelo basado en la tradición andina. Si bien este movimiento, articulado a través de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y del Movimiento Indio Pachakuti, está representada en el parlamento boliviano de manera mucho más modesta que el MAS de Evo Morales, cabe destacar que en estos últimos años ha demostrado tener una gran capacidad de movilización, especialmente en la zona altiplánica. Es posible que la menor representación parlamentaria no signifique un menor apoyo al movimiento, sino que más bien sea un reflejo de su absoluto rechazo a las instituciones políticas bolivianas.

Adicionalmente, cabe destacar a las organizaciones de los pueblos nativos de la Amazonía y del Chaco, que vienen movilizándose desde hace años en defensa de los intereses de los indígenas del oriente boliviano. En su conjunto, todos estos movimientos han surgido de forma fragmentada, y en torno a conflictos con un carácter marcadamente local. Sin embargo, lo sorprendente es que en un plazo tan reducido de tiempo, y a pesar de la debilidad que había caracterizado a los actores sociales del país tras la pérdida de peso político de la Central Obrera Boliviana (COB), estas fuerzas emergentes hayan logrado convertirse en actores políticos capaces de amenazar a la estabilidad de los sucesivos gobiernos.

El auge de estos nuevos movimientos ha venido reforzado por el creciente desprestigio de los partidos políticos tradicionales. Los cerca de 20 años de democracia boliviana han estado marcados por una gran fragmentación parlamentaria que se manifestó en la institucionalización de un régimen de coaliciones y pactos. Este régimen, denominado “democracia pactada”, tenía por principal objetivo la estabilidad política del país y la gobernabilidad de la economía. En la práctica, este régimen de pactos se articuló a través de un reparto del control de las instituciones del Estado entre los distintos partidos tradicionales, el llamado “cuoteo político”, que generó un problema creciente de gobernabilidad, fraccionamiento y corrupción en la administración pública. Las elecciones, más que dar pie a una alternancia política, desembocaban periódicamente en un nuevo reparto del Estado entre los partidos tradicionales que resultaba necesario para lograr el apoyo del legislativo al ejecutivo, y de este modo la estabilidad necesaria para la puesta en marcha de las ambiciosas reformas estructurales que tuvieron lugar en la década de los 90 (principalmente durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada). En este contexto, muchos consideran que la transición boliviana a la democracia no ha sintetizado la realidad socioeconómica, cultural, simbólica y política del país, sino que ha desembocado en un sistema elitista que excluyó del proceso político a las capas de la sociedad históricamente excluidas de la vida política boliviana, sin lograr el objetivo que en cierto modo lo justificaba: la modernización del país.

Esto último quedó puesto de manifiesto en los comicios electorales celebrados el 30 de junio de 2002, en los que lo más relevante fue el avance de los nuevos partidos campesinos, el relevo de un 90% de los miembros del congreso, y el descalabro de

tres de los grandes partidos conservadores del país. El Movimiento al Socialismo se convirtió en la segunda fuerza parlamentaria a tan solo 3 puntos del MNR de Sánchez de Lozada. El Movimiento Indio Pachacuti (MIP) de Felipe Quispe logró igualmente un sorprendente caudal de votos, especialmente en la zona rural aymara del Departamento de La Paz. Si bien Gonzalo Sánchez de Lozada logró formar una coalición conservadora con mayoría parlamentaria, su gobierno se enfrentaba a la oposición más complicada de la historia reciente de Bolivia, y a un nutrido grupo de parlamentarios que amenazaban constantemente con el uso de la capacidad de movilización que ya habían demostrado tener en los últimos años. En el parlamento se miraban de frente por primera vez las dos Bolivias, reflejando las fracturas que tradicionalmente han existido en el país, pero que nunca anteriormente, ni siquiera durante la fase revolucionaria (1952 en adelante) habían compartido un lugar en las más altas instancias políticas del país.

3.5. La coyuntura económica como factor de crisis institucional.

Un factor clave para alimentar esta crisis institucional ha sido la difícil coyuntura económica por la que ha atravesado Bolivia en estos últimos años. A lo largo del último quinquenio se interrumpió abruptamente la fase de crecimiento económico moderado pero sostenido que mantuvo Bolivia durante gran parte de la década de los noventa. En efecto, desde 1999 el país presenta tasas de crecimiento que han oscilado alrededor de un modesto 1%. Si tenemos en cuenta que las estadísticas oficiales no recogen la importancia que para la economía del país supone la explotación de la hoja de Coca, probablemente esta tasa de crecimiento, de por sí reducida, está sobreestimada. Si el ritmo de crecimiento exhibido por la economía boliviana hasta 1998 resultó insuficiente para reducir de forma significativa la pobreza que afecta a la mayoría de los bolivianos, resulta claro que la presente fase de desaceleración y crisis está generando un retroceso en las condiciones sociales del país. Esta situación de crisis económica ha venido alimentada por varios factores, como son los shocks exógenos que supusieron la crisis argentina y la inestabilidad regional, un deterioro de la coyuntura económica de algunos de los principales mercados de las exportaciones bolivianas, o la erradicación de la hoja de coca, de cuya explotación dependían cerca de 300,000 personas, y que no ha venido acompañada de una implantación exitosa de cultivos alternativos.

Adicionalmente, la economía boliviana ha sufrido en estos últimos años las consecuencias de un inacabado e imperfecto proceso de reforma estructural. Buena parte de la expansión económica de los 90” se explica por el éxito de las reformas estructurales de primera generación, que con sorprendente celeridad lograron estabilizar la economía, y abrir un paulatino proceso de liberalización interna y externa. Sin embargo, las reformas de segunda generación resultaron mucho más complejas. En general, puede decirse que la retirada del Estado de la actividad productiva no vino acompañada de una dinamización suficiente del sector privado, que carece de competitividad y que ha tenido una capacidad muy reducida de absorción de la mano de obra. El resultado es una estructura económica caracterizada por la dualidad, la informalidad y el subempleo. Algunas de estas reformas han tenido igualmente un impacto macroeconómico que no se había previsto en su inceptión. El ejemplo más sangrante es el de la reforma del sistema de las pensiones, cuyo déficit de transición se sitúa en la actualidad en cifras próximas al 7% del PIB (de un déficit público que supera ya el 8% del PIB), muy por encima de las cifras más pesimistas que se adelantaron durante el diseño de la reforma. Este abultado déficit fiscal es el que llevó, en parte por presiones del Fondo Monetario Internacional, a introducir el impuesto que desembocó en febrero del 2003 en el conflicto del facturazo. Esta situación fiscal insostenible viene agudizada por el hecho de que existen expectativas de que Bolivia se gradúe en los próximos años del grupo de países con acceso a financiación concesional de organismos internacionales, a pesar de que estos recursos constituyen una aportación fundamental a las finanzas públicas del país. Javier Díaz Cassou. (2004). La Crisis Boliviana y la Caída de Sánchez de Lozada. La Paz Bolivia: Fundación CILAE.

3.6. El principio del fin del modelo económico.

Cuando los indígenas de las tierras bajas marcharon en 1990 desde Trinidad hasta La Paz, reclamando dignidad, tierra y territorio, y el dirigente indígena Ernesto Noe, en un discurso en la histórica plaza San Francisco, dijo que “nosotros también somos bolivianos, por eso el Estado debe incluirnos y para que nos incluya tiene que haber algo así como un proceso de cambio”, en realidad estaba denunciando al Estado excluyente y a sus administradores de entonces.

La acumulación de la energía histórica en contra del grupo gobernante explotó con la guerra del agua, que se produjo entre febrero y abril de 2000, en la ciudad de Cochabamba, donde se unieron campesinos, indígenas, clases medias, proletarios en contra del gobierno del presidente Hugo Banzer, quien había decidido privatizar el agua.

Este hecho marcó el principio del fin del modelo económico que se había establecido en 1985 con el Decreto Supremo 21060, soporte jurídico-ideológico del neoliberalismo parido por el Consenso de Washington y regentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM); por supuesto, con la aquiescencia del club de la partidocracia conformado por MNR, MIR, ADN, UCS.

Con este movimiento comenzó la agonía del Estado neoliberal, que se había desprendido de muchas de sus responsabilidades sociales respecto a la población más empobrecida y había asumido una opción por el capital transnacional. La lucha visible fue por el elemento simbólico de la vida: el agua. Pero fue una movilización política, por tanto admonitoria. Además, por primera vez en la era democrática se había producido una alianza de clases, pregonada en la Revolución Nacional de 1952 por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Este fenómeno sociológico estaba mostrando que la mayoría de la población había optado por el cambio. A la guerra del agua le siguieron otras movilizaciones, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB).

Tras el acto electoral del 2000, el candidato presidencial del MAS se puso a centímetros de Palacio. El candidato del MNR, Sánchez de Lozada, ganó las elecciones con el 22,5% y el MAS quedó con el 20,9%. Por primera vez en la historia del país, un candidato indígena era presidenciable; en ese entonces, el segundo tenía la opción constitucional de ser presidente en el Congreso si el primero no lograba el apoyo electoral del 50% más un voto.

Quispe pidió a Morales hacer alianzas en el Congreso y pelear la Presidencia. Morales prefirió postergar sus aspiraciones presidenciales para las elecciones siguientes. Y sucedió lo previsto, los partidos tradicionales se aliaron en torno a Sánchez de Lozada, ya sea por voluntad propia u obligación, como confesó Manfred

Reyes Villa cuando dijo que apoyó a Goni por imposición de la embajada de Estados Unidos. Esa revelación explicó el cambio de postura de sus colegas políticos, quienes tras la campaña bajo la consigna de todos contra el MNR, terminaron aliándose para cerrar el paso al candidato indio.

La mayoría de la población no perdonaba la subasta del patrimonio nacional, vía capitalización, realizada durante la llamada época lúcida del neoliberalismo (1985-1997); tampoco que hayan convertido la política en negocio familiar y práctica corrupta de acumulación de fortuna y reproducción de poder en pocas manos. Lo malo había eclipsado medidas positivas como la participación popular y la descentralización, que abrieron las puertas de la administración del Estado a las mayorías.

En este contexto estalló la guerra del gas en octubre de 2003, surgió de una manera circunstancial, el lunes 8 de septiembre de 2003 en instalaciones de radio San Gabriel, ubicadas en El Alto, donde la Federación de Campesinos de La Paz declaró una huelga de hambre en demanda de la libertad de uno de sus dirigentes, Edwin Huampo, quien había sido encarcelado por haber participado en un acto de justicia comunitaria que concluyó con la muerte de dos presuntos ladrones de ganado, quienes habían sido linchados por pobladores de una comunidad en la provincia Los Andes del departamento de La Paz.

La dirigencia, tras una marcha de campesinos en la sede de Gobierno, amplió sus demandas y pidió cumplimiento de los convenios de la Isla del Sol, firmados en 2002, los cuales exigían básicamente libertad para Huampo, abrogación de la Ley de Seguridad Ciudadana e indemnización a los familiares de los campesinos fallecidos y heridos en los diferentes conflictos sociales.

El problema se agravó cuando campesinos bloquearon la carretera La Paz-Sorata, adonde habían llegado un centenar de turistas extranjeros para la fiesta patronal de esa población turística. Las embajadas presionaron al Gobierno para liberar a sus connacionales. En ese intento se produjo la masacre de Warisata, el sábado 20 de septiembre de 2003. Aquel día, fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas, dirigidas por Carlos Sánchez Berzaín, tomaron el control de la carretera

bloqueada. La acción de rescate terminó con seis muertos, entre ellos una niña, además de un militar asesinado. La violencia desatada en Warisata unió al movimiento campesino con la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto, que declaró paro indefinido y bloqueo de calles el 10 de octubre, justo el día que la democracia cumplía su mayoría de edad, 21 años. En ese momento surgió la consigna o el discurso sensible para aglutinar a todas las fuerzas sociales y políticas que buscaban el cambio: no a la venta de gas a Chile, nacionalización de los yacimientos gasíferos, Asamblea Constituyente y refundación del Estado.

El presidente que había sido uno de los artífices de la enajenación de YPF, diez años después, era exigido a recuperar esos recursos naturales en beneficio de Bolivia. El presidente que había facilitado, diez años antes, la presencia de un indígena en la Vicepresidencia se negaba a abrir las puertas del poder de par en par para que entren los nuevos actores.

3.7. El ocaso de las coaliciones de gobierno.

Entre el 10 y 17 de octubre, el Gobierno de la coalición, conformada por el MNR, MIR, NFR y UCS, protagonizó la mayor masacre de la era democrática, causó 67 muertos (según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y más de 80 según otras instituciones) y cerca de 300 heridos. La mayoría de las víctimas había salido a marchar y bloquear las calles frente a un Ejército movilizado con artillería e infantería. Probablemente, los movilizados no se dieron cuenta esos días de que lo que estaban haciendo iba a cambiar el destino del país.

El martes 14 de octubre, Mesa hizo una jugada de ajedrez político cuando declaró públicamente, tras percatarse de la gravedad de los hechos, que renunciaba al Gobierno pero no a la vicepresidencia. En otras palabras, rompía con el Gobierno, pero no con el pueblo. Esta posición fue letal para la caída de Goni, pues demostró el resquebrajamiento de la estructura interna del Gobierno.

El miércoles 15 de octubre, la embajada de Estados Unidos en Bolivia expresó su apoyo al “gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada”. El viernes 17 de octubre, el vicepresidente del Gobierno del MNR, Carlos Mesa, juró como presidente

en reemplazo de Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos dejando a un país enlutado, pero con la esperanza de construir un nuevo Estado y una nueva sociedad.

Mesa asumió el mando con la llamada agenda de octubre: nacionalización del gas, Asamblea Constituyente y nuevo Estado. Sin embargo, su falta de decisión para inclinarse por los marginados y querer mantener equilibrios en un momento que daba para jugarse, le costó el mando.

Fue asfixiado por los dos extremos: por un lado, la extrema derecha que había sido desplazada del poder, y la extrema izquierda que exigía el nacimiento del nuevo Estado cuanto antes. Para peor, Mesa tenía Palacio, pero no el poder. Asumió el gobierno con el Congreso donde predominaban los diputados y senadores cuyos partidos habían sido expulsados por las masas movilizadas.

Pese a esta adversidad, en la gestión de Mesa se reformó la Constitución, en la que se incluyó la Asamblea Constituyente y el referéndum. No obstante, no pudo concluir el período que le restaba. El referéndum sobre el gas no fue suficiente; su gestión avanzaba a diez kilómetros por hora, la historia a 100.

Al final Mesa tuvo que renunciar a su mandato en julio de 2003, agobiado por las presiones; lo reemplazó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien tuvo como misión solamente organizar las elecciones nacionales de diciembre de 2005. Cuando el MAS ganó aquellas elecciones, en realidad lo que estaba ganando era el advenimiento de un nuevo tiempo, que comenzó a ser cronometrado desde 1990 con la primera marcha indígena, que exigía algo así como un proceso de cambio. Isabel Mercado. (2012). 30 Años de Democracia en Bolivia. La Paz Bolivia: Pagina Siete.

No obstante la volatilidad electoral y las enormes deficiencias de los partidos como organizaciones, el sistema de partidos pudo desarrollar un grado notable de estabilidad política, basada en acuerdos y gobiernos de coalición, hasta 2000. En una etapa crítica para la supervivencia de la democracia como fue el gobierno de la UDP, los liderazgos políticos tuvieron la capacidad de adaptación a los nuevos problemas que planteaba la necesidad de crear condiciones necesarias para la estabilidad y

gobernabilidad del país. Desarrollaron estilos más adecuados al desarrollo democrático, como la flexibilidad política, la capacidad de compromiso y búsqueda de consensos. ¿Cómo explicar entonces la profunda crisis actual del sistema de partidos políticos? ¿Qué causas estructurales y/o coyunturales están en la raíz de este proceso de involución? Sin suponer un enfoque determinista, pienso que una explicación satisfactoria debe combinar factores causales, tanto estructurales como coyunturales, que empezaron a manifestarse en el gobierno de Bánzer (1997-2002) y finalmente hicieron explosión en la gran crisis que sobrevino después de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2002. El débil gobierno de coalición de Sánchez de Lozada nació determinado por la polarización y el bloqueo entre Parlamento y Ejecutivo: las dos consecuencias de carácter coyuntural más importantes en las que se condensaron aquellos problemas y limitaciones que los partidos políticos fueron acumulando y no pudieron superar a lo largo de la década de los noventa.

La fragmentación de la coalición de gobierno MNR-MIR-NFR, durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se dio por varios factores, políticos, sociales, económicos y coyunturales, los que se detallan a continuación.

Una primera causa del declive y posterior ruptura de la coalición de gobierno; con implicaciones graves, fue que las coaliciones gubernamentales llegaron a convertirse en mecanismos insuficientes de gobierno, provocando la desnaturalización y desaparición del concepto y práctica de una oposición parlamentaria crítica y responsable. Similar a las experiencias de concertación y consenso entre partidos en la Colombia del Frente Nacional y en la Venezuela del Pacto de Punto Fijo, la política boliviana fue, en efecto, una política de acuerdos entre los líderes máximos de los partidos, algo así como una conversación entre caballeros. Los partidos se habían afirmado como sujetos fundamentales de la política dentro del contexto institucional que definí como democracia pactada y presidencialismo parlamentarizado. Pero este tipo de democracia pactada decayó, generando un estilo de hacer política hermética y prebendalista, así como un serio aflojamiento de los nexos de los partidos con la sociedad civil.

Una segunda causa es la transformación de los partidos, de mediadores entre el Estado y la sociedad en actores integrados al poder estatal, que se produjo simultáneamente con la estabilidad política lograda. Es decir, la creciente penetración entre el Estado y los partidos implicó que todos los partidos importantes del sistema compartieran los recursos del Estado. Dado el control irrestricto de las instituciones estatales por las organizaciones partidistas, el sistema de partidos se volvió autorreferente y de autoservicio; en el fondo, un sistema de partidos-cartel.¹⁰ Gobiernos estables de coalición transformaron el Estado en una estructura de incentivos y beneficios que absorbió a los partidos relevantes y pequeños. De forma paralela, los partidos se transformaron en máquinas electorales y agencias de distribución de cargos públicos y apropiación de recursos estatales, desprendiéndose de sus referentes ideológicos y programáticos y relegando sus funciones de articuladores entre la sociedad y el Estado. No pudieron ni quisieron percibir la necesidad de establecer nexos más complejos y creativos con la sociedad civil.

La tercera causa reside en que esta doble transformación de los partidos políticos remató en un modelo hermético de gobernabilidad y en la deformación de la política de acuerdos interpartidarios como principio de formación de gobiernos de coalición. Intereses particularistas se fueron imponiendo sobre objetivos programáticos en las políticas gubernamentales. El modelo de gobernabilidad se desfiguró en los dos últimos gobiernos con el mero clientelismo y la repartición de cargos, desplazando a segundo lugar los aspectos programáticos y la política de negociación con las organizaciones sociales. Por otro lado, los pactos políticos no se ampliaron a pactos sociales y, al final, los gobiernos de coalición con amplia mayoría parlamentaria terminaron suspendidos en el vacío. Los partidos dejaron de ser mecanismos eficaces de agregación y canalización de demandas y conflictos sociales y, sobre todo, mediadores entre la sociedad y el Estado. Como consecuencia, los gobiernos de coalición y las mayorías parlamentarias dejaron también de ser gestores de políticas públicas eficaces quedando inermes ante la ofensiva de los nuevos movimientos sociales indígenas y otras organizaciones sociales.

La política se redujo al manejo mezquino del poder de facciones y camarillas carentes de visión de gran política ni de Estado. Fue sinónimo de vulgar negocio y de

acceso al empleo para desocupados de diversos sectores sociales y, por supuesto, de enriquecimiento ilícito. El resultado perverso y negativo para la legitimidad democrática fue que los partidos que tuvieron responsabilidad de gobierno dilapidaron su capital político, corrompieron la política y, al final, desvirtuaron la democracia pactada.

La cuarta causa consiste en procesos de democratización interna que no alteraron el control caudillista de los líderes sobre las organizaciones partidarias. Se hizo evidente la contradicción aún imperante entre el sistema multipartidista competitivo y la organización interna antidemocrática de la mayoría de los partidos. La renovación regional y local de los partidos, en gran medida por presiones desde abajo ligadas a la ley de participación popular, no abrió suficientemente los cauces necesarios para lograr un impacto en las direcciones nacionales de los partidos.

Se puede identificar también una quinta causa estructural que explica el declive de los partidos políticos: las deficiencias de su organización interna repercutieron en la importante dimensión de la calidad del liderazgo político, que no sólo no se pudo elevar, sino que fue descendiendo dramáticamente a niveles de incompetencia e irresponsabilidad. Como lo demuestran los gobiernos de Bánzer (1997-2002) y Sánchez de Lozada (6/8/2002-17/10/2003), los líderes gubernamentales no estuvieron a la altura de la complejidad de los problemas económicos y sociales que enfrenta el país y menos tuvieron la capacidad para resolver conflictos y negociar acuerdos con los actores sociales. Gran parte de la clase política no logró desarrollar la competencia profesional de sus cuadros de dirección, lo cual incidió negativamente en la capacidad de gestión gubernamental. La aplicación del nuevo sistema electoral para la elección de más de la mitad de los diputados en distritos uninominales fue también una causa adicional significativa: fortaleció la representatividad del sistema político y llevó a la renovación del 70 por ciento de la Cámara, pero tuvo efectos negativos al reducir los ya bajos niveles de profesionalización de los parlamentarios. Los diputados por distritos uninominales son más representativos, pero mucho menos competentes. La crisis de los partidos se refleja, en consecuencia, como una grave crisis de liderazgo político sin alternativas visibles de renovación en el momento histórico actual. En la crisis de octubre de

2003, gran parte del liderazgo político dejó de ser adecuado y funcional para asegurar la viabilidad y la continuidad del sistema democrático. Si la democracia política es un método competitivo de reclutamiento de líderes, hay muchas evidencias de que, por lo menos en la última década, en Bolivia no ha servido suficientemente a tal efecto.

Una sexta causa reside en el carácter limitado del proceso de modernización del Estado. Las prácticas patrimonialistas de los partidos vulneraron y erosionaron los avances institucionales de la democracia. Esto suena a paradoja, porque Bolivia fue considerada en el panorama latinoamericano como uno de los países reformadores más agresivos y como un show case por la aparente y feliz convergencia del ajuste estructural y el rediseño de las instituciones políticas. Sin embargo, la crisis actual del Estado desnuda claramente los límites del proceso de institucionalización. De hecho, no pudo cristalizar una política coherente y sostenida de modernización y construcción estatal al imponerse un estilo de institucionalización perversa; es decir, un proceso de reformas institucionales deformado por las prácticas patrimonialistas de los partidos. Las diversas reformas institucionales (participación popular, descentralización, reforma del poder judicial, etc.) fueron contradichas y contrarrestadas por intentos reiterados para conservar simultáneamente cotos reservados de control partidario, de prebendas y beneficios. Es decir, las nuevas instituciones no fueron suficientemente acompañadas ni reforzadas por cambios en los comportamientos y prácticas tradicionales de los liderazgos y partidos ni por la reorganización de la burocracia estatal de acuerdo a criterios de eficacia y competencia. Hay muchos argumentos para afirmar que la modernización del Estado fue en varios campos ficticia y que hubo, por el contrario, una seria erosión del Estado porque las reformas fueron corroídas por el manejo arbitrario del poder, como ocurrió con la descentralización, minando la capacidad estatal para afrontar demandas económicas y sociales así como para articular políticas de integración nacional.

Por último, es necesario referirse a una causa coyuntural: el estancamiento económico desde 1999, por efecto de la recesión internacional, se reflejó en la caída del crecimiento económico de una tasa promedio del 4% del PIB en la década de los

noventa a un promedio de apenas el 2% del PIB entre 1999 y 2002. En una economía que sigue atrapada en el modelo tradicional de desarrollo sustentado en la exportación de materias primas de bajo valor agregado, por tanto, una economía vulnerable y dependiente del apoyo externo, las políticas económicas liberales y de fomento de la inversión externa generaron un desarrollo muy desigual de las regiones y de la distribución de ingresos. Además, el descenso de la economía fue agravado por una agresiva política de erradicación de la hoja de coca que tuvo el efecto de una contracción del PIB en un 8% en los últimos años.

Todos estos factores estructurales y coyunturales aceleraron un proceso de erosión de los poderes del Estado. Su capacidad para decidir sobre políticas públicas y su autoridad para implementarlas fueron seriamente cuestionadas. Se multiplicaron y agudizaron los conflictos sociales y los partidos más importantes del sistema se deslegitimaron en los dos últimos gobiernos de coalición como actores responsables y eficientes de gobierno y gestión estatal; no reaccionaron eficazmente con políticas públicas adecuadas a los problemas del desempleo, la pobreza y la corrupción, al tiempo que en medio de la degeneración facciosa de la política se cebaban en el uso predominantemente patrimonialista de los recursos del Estado. En el gobierno de Bánzer se estableció una peligrosa dinámica no mediatizada institucionalmente entre el Estado y la sociedad, creándose un círculo vicioso de movilizaciones, demandas y chantajes de toda naturaleza, frente a los cuales el Gobierno adoptaba la posición de ceder y capitular. Pero no sólo el Poder Ejecutivo se debilitó. Las demás instituciones del Estado, como el Parlamento y los gobiernos regionales y locales, tampoco pudieron intervenir como articuladores y canalizadores de las demandas y conflictos sociales. En efecto, todas las instituciones principales del sistema democrático se debilitaron de tal manera que lo que empezó como falta de rumbo de la coalición de Bánzer y crisis de la gestión gubernamental derivó progresivamente en una crisis de Estado que afectó el Poder Ejecutivo, al Parlamento, las Fuerzas Armadas, la policía y que se prolongó y acentuó en el gobierno de Sánchez de Lozada hasta su derrumbe en octubre de 2003.

En este efímero gobierno se vislumbraron claramente la decadencia de las coaliciones gobernantes y la parálisis estatal. La coalición de Sánchez de Lozada,

enfascada en el mezquino juego de la distribución de puestos en la administración del Estado, fue incapaz de imprimir cambios necesarios de rumbo a la política y menospreció la capacidad de movilización de movimientos contestatarios, cayendo víctima de la paradoja de un gobierno de coalición con mayoría parlamentaria, pero paralizado en su capacidad de decisión. De hecho, en un escenario de polarización entre el Ejecutivo y la oposición del MAS y de movimientos radicales, el Gobierno no pudo tomar en absoluto ninguna decisión importante ni hacer aprobar o hacer aceptable ninguna ley relevante referida a los temas esenciales –reactivación económica, reducción del déficit fiscal, política de exportación e industrialización del gas, política de la hoja de coca vinculada al desarrollo basada en el desarrollo alternativo. El estrepitoso fracaso del gobierno de Sánchez de Lozada exacerbó entonces la perversa herencia que dejó el de Bánzer: la crisis económica, la bancarrota de la autoridad del Estado, el divorcio Estado-sociedad y el desprestigio de los partidos políticos y el crecimiento de movimientos políticos anti-sistémicos. Y ambos gobiernos marcaron en dos etapas consecutivas un proceso de agotamiento de los partidos relevantes que más parece presagiar el hundimiento del sistema de partidos. En conclusión, factores causales, tanto estructurales como coyunturales, confluyeron en los gobiernos de Bánzer y Sánchez de Lozada determinando un proceso regresivo de ingobernabilidad e incertidumbre. Rene Antonio Mayorga. (2007). La Crisis del Sistema de Partidos en Bolivia. La Paz Bolivia: IIPS.

En general, el segundo gobierno de Sánchez de Lozada mostró una posición tremendamente inflexible y ortodoxa respecto de una posible y necesaria reconducción de las reformas estructurales realizadas durante su primer gobierno.

Eso es lo que ocurrió en el caso de la modificación de la normativa vigente en el Sector Hidrocarburos, una demanda cada vez más creciente en importantes sectores y regiones de la sociedad que el ex Presidente nunca estuvo dispuesto a escuchar.

Muy pocos meses después de la asunción de Sánchez de Lozada (6 de agosto de 2002), se hizo evidente cuán distinto fue para él gobernar con un fuerte y decisivo apoyo parlamentario un apoyo que en su primera gestión (1993-1997) le permitió definir una nueva institucionalidad y privatizar los recursos naturales y una segunda

versión de su gobierno de apenas 14 meses en el que contó con un precario apoyo parlamentario como producto del surgimiento, en las elecciones de junio de 2002, de nuevas fuerzas política en el escenario político nacional.

Paradójicamente, las reformas estructurales decididas por Sánchez de Lozada entre 1993 y 1997 se constituyeron en las causas que socavaron su gobierno, lo sepultaron políticamente y lo expulsaron del país. Esas reformas provocaron, en términos sintéticos, dos fenómenos hoy todavía vigentes: a) el insostenible déficit fiscal provocado por los exiguos recursos que provienen de los impuestos que pagan las empresas petroleras y por la reforma de la Seguridad Social de largo plazo que implicó una también insostenible obligación asumida por el TGN para el pago de jubilaciones a los ciudadanos bolivianos del antiguo sistema previsional; b) la Capitalización y privatización de los recursos hidrocarburíferos, ocho años después de su ejecución, ha convocado y articulado la reacción de un importante sector de la sociedad boliviana que concibe que el Estado boliviano ha perdido los derechos de propiedad sobre esos recursos y sobre el uso de los excedentes económicos que genera. Carlos Villegas Quiroga. (2004). *El Movimiento Social y la Caída de Sánchez de Lozada*. La Paz Bolivia: Plural.

CAPÍTULO IV

Políticas públicas y el declive de la efectividad gubernamental

Una de las transformaciones más significativas de la democracia en Bolivia fue que, por primera vez en su historia, surgiera un sistema multipartidista moderado, opuesto cualitativamente al sistema multipartidista altamente fragmentado y polarizado que prevaleció en el momento de la transición democrática. A partir de las elecciones de 1985 hasta las elecciones de 2002, predominó un sistema moderado de partidos que descansaba en un eje o trípode de tres partidos MNR, MIR y ADN, cada uno de los cuales fue el pivote en cuatro gobiernos de coalición. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). *El Escenario Pos Electoral en Bolivia*. La Paz Bolivia: Garza Azul.

Estos tres partidos concentraban entre el 65 % y el 57% de los votos y el 86% y el 62% de los escaños formando con la ayuda de partidos menores dos bloques ADN/MIR y MNR que se alternaban en el gobierno. En términos históricos, esta transformación fue crucial. Antes de la revolución de 1952, Bolivia había conocido un sistema multipartidista excluyente y de bajísima capacidad de representación en el contexto de un sistema político oligárquico. La revolución de 1952 trajo como consecuencia no un sistema de partidos, sino el predominio absoluto de un partido verdaderamente hegemónico el MNR que llegó a confundirse con el Estado, asemejándose al PRI mexicano, pero sin llegar obviamente a alcanzar la solidez y longevidad extrema de éste. Sólo con la transición a la democracia se fue configurando un sistema multipartidista que devino en pocos años de fragmentado y polarizado en un sistema moderado -sustentado en el consenso básico sobre la necesidad de impulsar la democracia representativa y la economía de mercado- y en el cual ningún partido ejerció un real dominio hegemónico.

4.1. Políticas Públicas del segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La inversión pública en el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada se reflejó en diversas políticas públicas, de las cuales se enuncian las más importantes.

- *Construcción y conservación de carreteras.*

A la mala calidad de la infraestructura vial en el país, se suma la crónica escasez de caminos; por lo que los incrementos previstos en los niveles de inversión pública deberán enfrentar un doble reto: incrementar la superficie carretera y mejorar su mantenimiento. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Infraestructura de riego.*

El incremento en la inversión pública destinada a la ampliación y mejoramiento de los sistemas actuales de riego, elevará los bajos niveles de productividad de la agricultura, reducirá la vulnerabilidad de esta actividad a condiciones climatológicas adversas e incrementará el nivel de los ingresos agrícolas de los pequeños y medianos productores. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Electrificación rural.*

Más de 576.000 hogares del área rural no tienen electricidad, situación que atenta contra su desarrollo individual y social; profundiza su condición de pobreza y, los excluye de los beneficios del crecimiento económico y la modernidad, al limitar su acceso a educación, salud, tecnologías de información y emprendimiento de proyectos productivos. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Vivienda Social.*

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 una proporción significativa de los hogares bolivianos continúa enfrentando problemas habitacionales; un tercio de las familias no tiene vivienda propia, el 70% no dispone de alcantarillado sanitario, el 65% de las viviendas presenta calidad baja y media en los materiales de construcción y una de cada cuatro viviendas no tiene un espacio destinado exclusivamente para cocina. Con el objetivo de reducir el déficit habitacional en lo cualitativo y cuantitativo, se ha propuesto un programa de construcción y mejoramiento de viviendas destinadas a

familias de ingresos bajos y medios-bajos, del área urbana y rural. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Saneamiento Básico.*

La carencia de alcantarillado sanitario y pluvial y la falta de tratamiento de residuos sólidos son la principal causa de contaminación ambiental y poderosa fuente de infecciones en Bolivia. Por ello, está en aplicación un programa agresivo de inversión pública en saneamiento básico, el cual integra los rubros de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y manejo de residuos sólidos. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Conexiones de gas domiciliario.*

En los próximos años, con el programa de conexiones a redes de gas domiciliario, 250.000 hogares se conectarán a este servicio en capitales de departamento, ciudades principales e intermedias y en un importante segmento del área rural. Para la expansión de las redes de gas se cuenta con inversión privada. La conexión domiciliaria en la nueva etapa, será financiada por el Estado. Adicionalmente, el Gobierno promueve el uso del gas natural - barato y ambientalmente limpio en industrias, microempresas y cooperativas productivas. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Reestructuración productiva y financiera de las empresas.*

La contracción de actividades en el sector real de la economía se reflejó en la caída de las ventas globales de las empresas y en la disminución del nivel de gasto de los hogares. La reducción del ingreso impidió cumplir con el pago de obligaciones con el sistema financiero y evitó la colocación de nuevos créditos, en consecuencia, el sistema se vio afectado con un mayor índice de mora y menores niveles de cartera y depósitos. Ante esta situación, el sector adoptó una actitud de mayor prudencia en su actividad crediticia, contribuyendo aún más a disminuir la actividad económica. En este contexto,

el programa de reestructuración voluntaria de unidades económicas conocido como "Hospital de Empresas" tiene por finalidad detener el deterioro y paralización del aparato productivo, parar el crecimiento del desempleo y crear un entorno favorable a la inversión privada en el país. Asimismo, fortalecer el circuito ahorro-inversión, evitar conflictos y facilitar la negociación entre acreedores y deudores y contribuir a mejorar y fortalecer el sistema financiero. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Para los más pobres: Redes de Protección Social.*

Parte de las acciones de corto plazo estuvieron dirigidas a mejorar las redes de protección social y sentar las bases para articular una estrategia que asegure el cumplimiento de las Metas del Milenio, propuestas por Naciones Unidas, particularmente en salud y educación en el mediano y largo plazo. Los componentes de la propuesta incluyen el Plan de Empleo de Emergencia, la Beca Futuro, el Desayuno Escolar, el Seguro Universal Materno Infantil y el Bonosol. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Bonosol.*

Representa el beneficio social de la Capitalización y está dirigido a un segmento de población, el de la tercera edad, que no contaba con la protección de un sistema previsional que les asegurara una pensión justa y digna para cubrir ciertas necesidades. El Bonosol se constituye en un seguro de vejez universal, que garantiza que todos los beneficiarios reciban estos recursos en forma justa y equitativa, sin ningún costo para el fisco. El pago del Bonosol permite que Bolivia sea el único país en desarrollo con un seguro de vejez universal, que favorece sin exclusión de ninguna clase, a toda la población mayor de 65 años. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).*

La Ley 2426, del Seguro Universal Materno Infantil, tiene como finalidad ampliar las prestaciones a la mujer embarazada hasta los seis meses después del parto y a los niños menores de cinco años. Para financiarlo, prácticamente se han duplicado los recursos de coparticipación reservados para el Seguro Básico de Salud e incrementado de 92 a 406 las prestaciones orientadas al binomio madre-niño. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Empleo de Emergencia.*

En términos absolutos, el número de desempleados al inicio de gestión alcanzaba aproximadamente a 200 mil personas en el área urbana y 14 mil en el área rural. El Plan de Empleo de Emergencia (Plane), concebido como una política anticíclica contribuyó en parte a enfrentar el desempleo, creándose aproximadamente 65 mil empleos mensuales en las áreas urbana y rural. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Beca Futuro.*

Para enfrentar la crisis económica, las familias pobres tuvieron que recurrir al trabajo infantil, poniendo en riesgo la permanencia de sus hijos en la escuela e incrementando la deserción escolar. Para mitigar este problema es necesario cubrir el costo de oportunidad, entendido como el ingreso que los niños dejan de aportar a la familia por dedicar el tiempo al estudio y no al trabajo, protegiendo la formación de capital humano y mejorando las posibilidades de desarrollo del país. La Beca Futuro tiene por objetivo inmediato incentivar la permanencia de los niños en la escuela en el área urbana e incrementar la asistencia y disminuir el rezago escolar en el área rural. En el largo plazo, garantizará la permanencia de los niños en la escuela hasta completar la primaria. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Desayuno escolar.*

Tiene por finalidad complementar la dieta alimenticia de los niños en edad escolar, para reducir la desnutrición infantil y mejorar su rendimiento en la escuela. En tiempos de crisis, políticas como el desayuno escolar apoyan también la economía familiar cubriendo parcialmente la alimentación de los niños. Por ello, es voluntad del Gobierno de Responsabilidad Nacional ampliar este beneficio a los 314 municipios del país. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *La extensión del derecho propietario rural.*

El territorio boliviano tiene una superficie total de 109.858.100 hectáreas, de las cuales, 65 millones de hectáreas, que corresponden al 59.6% del territorio nacional es superficie sujeta a saneamiento. Los 45.3 millones de hectáreas restantes, 40.3% del territorio no es saneable, pues comprende ciudades, ríos, lagos, salares, cordilleras, áreas protegidas, reservas, parques y áreas forestales. Del total de esa superficie sujeta a saneamiento, 18.2 millones de hectáreas, el 28% están ya saneadas; otros 28 millones, el 43%, está en distintas fases de saneamiento y queda por iniciar el proceso en 18.8 millones de hectáreas, equivalentes a casi el 30% de la superficie sujeta a saneamiento. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *La expansión de cadenas productivas nacionales.*

La denominación de "cadena productiva nacional" se basa en un conjunto de criterios de selección inicialmente aplicados en el Diálogo 2000, a partir de los cuales se identificaron y constituyeron 14 cadenas productivas (agroindustria, manufactura y servicios), cuya actividad tiene una incidencia importante en los principales agregados nacionales relacionados a producción, empleo y exportaciones. Estas 14 cadenas generan aproximadamente el 15% del PIB (excluyendo la producción de hidrocarburos), sus exportaciones son del orden de los \$us 656 millones, proporcionan empleo directo e indirecto a 400,000 personas y desarrollan sus

actividades productivas en 278 de los 314 municipios del país. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *El potenciamiento del desarrollo económico local.*

Si bien las cadenas productivas nacionales comprenden un porcentaje importante de la actividad productiva, el elevado grado de dispersión de la población (7.6 hab/km²) y la participación de la población rural en otras actividades productivas, orientadas en mayor medida a los mercados internos y/o regionales, hacen necesario que el Estado tome un rol más activo en la promoción del desarrollo económico local. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

- *Ampliación de Servicios Sociales.*

Un objetivo central de la política social de mediano plazo del Gobierno de Responsabilidad Nacional es ampliar el acceso de bolivianos y bolivianas a servicios de educación, salud, agua y saneamiento básico. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

Así mismo las políticas públicas a implantarse para los posteriores años y que fueron las que detonaron e impulsaron la caída del gobierno, fueron estas dos principalmente:

- *Una política seria para el gas.*

Otro de los temas de profunda polarización de la ciudadanía en agosto de 2002 era sin duda la venta de gas y existían criterios claramente divergentes en torno a dos aspectos, la conveniencia de vender o no el producto a los Estados Unidos y qué puerto usar para la operación. El Gobierno de Responsabilidad Nacional encontró que durante 18 meses se habían elaborado presupuestos, definido inversiones y lanzada la discusión sobre el puerto, pero sin tener un proyecto ni definido un comprador. Por tanto, la primera prioridad siempre fue subsanar esta falencia y contar con un proyecto que permitiera establecer la viabilidad y conveniencia económica de la

operación, por lo que se plantea la exportación de gas a México y Estados Unidos, vía el país de Chile.

- *El impuestazo.*

El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada propuso retener parte de los salarios e ingresos de los trabajadores y empleados del sector público y privado en una proporción que va desde el 4,2% al 12,5%. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

Bolivia marcha al colapso en 2003 si el estado continúa gastando más de lo que tiene. El déficit fiscal del 2002 fue superior al 8,5% y para el 2003 se pretende, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, reducirlo a un poco más del 5%, recortando los gastos del Estado e incrementando sus ingresos a través de mayores contribuciones y sacrificios del sector laboral. La confiscación de ingresos y otras medidas colaterales entrarían en vigencia una vez que el proyecto de Presupuesto General de la Nación del 2003 sea aprobado por el Congreso nacional. El mecanismo definido para la confiscación de salarios e ingresos es la eliminación del crédito fiscal que obtenían asalariados y empleados. Estos sectores podían presentar facturas por un monto igual a sus obligaciones tributarias, y así evitaban transferir parte de sus ingresos al Estado. Humberto Vacaflor Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

Después de grandes conflictos y confrontaciones destructivas entre los partidos y entre éstos y los movimientos sociales durante la fase de transición a la democracia, los partidos llegaron a conformar un sistema de partidos, es decir, un sistema de interacción partidaria de acuerdo a reglas de juego que norman la competencia democrática por el poder. A partir de 1985 y coincidiendo con las reformas estructurales de la economía, el sistema de partidos empezó a perfilarse como un sistema multipartidista moderado caracterizado por tres elementos claves tal como Sartori ha destacado: una distancia ideológica relativamente leve entre los partidos

grandes, una tendencia a la formación de coaliciones entre partidos de distintas posiciones; y una competencia partidaria predominantemente centripeta.

Cuatro factores históricos importantes incidieron en la formación de este sistema de partidos: **1)** la derrota y el desplazamiento político de los partidos de la izquierda tradicional y del movimiento sindical que estuvieron orientados desde la década de los 50 en objetivos radicales de cambio social y político; **2)** un desplazamiento radical hacia posiciones centristas y gradualistas en amplios sectores de la sociedad; **3)** la crisis de la economía estatista y del rol central del Estado y la transformación de la política económica a través de estrategias de ajustes orientadas en la economía de mercado; y **4)** el cambio de la confrontación antagónica entre los partidos por pautas de concertación y acuerdos interpartidarios que hicieron posible gobiernos de coalición en el contexto del diseño constitucional vigente.

Este ha sido un cambio institucional decisivo para el desarrollo del sistema de partidos porque los patrones de interacción y competencia se orientaron hacia la negociación y concertación entre los partidos, y hacia una convergencia programática en cuestiones de política económica y reforma política y, por lo tanto, hacia una competencia de tipo pragmático de propuestas concretas más que a una confrontación estéril de modelos utópicos de organización social y política. Por lo tanto, el gran viraje político se produjo gracias a la implantación de una lógica democrática de acuerdos y consensos entre partidos que reemplazó la lógica tradicional de guerra implacable entre los adversarios políticos desbrozando así el terreno para una democracia pactada.

Han sido varios los rasgos del sistema multipartidista, en primer lugar, tuvo lugar una reducción progresiva y sustancial del número de partidos y, por tanto, una disminución cualitativa del grado de fragmentación partidaria. La reducción del número de partidos llevó a un formato de sistema multipartidista moderado en torno a cinco partidos con representación parlamentaria importante. Con altibajos, el sistema empezó a experimentar a partir de las elecciones de 1985 una fuerte reducción de sus componentes como se comprueba con la diferencia entre partidos

y/o frentes electorales y partidos y/o frentes parlamentarios; es decir, aquellos que lograron acceder al Parlamento.

El aspecto esencial de este proceso no sólo fue la reducción del número de partidos, sino la emergencia de una estructura de tríada partidista (MNR, MIR, ADN), es decir, de tres partidos relevantes en los cuales estuvieron concentrados el “potencial de gobierno” y la capacidad de coalición. En las elecciones de 1985 a 1997, estos tres partidos lograron conquistar conjuntamente entre el 54% al 84% de los escaños parlamentarios y formaron coaliciones gubernamentales en alianzas de diverso tipo con partidos menores.

A pesar de nuevas formaciones políticas como CONDEPA, UCS y otros cuasi partidos, el sistema de partidos no dejó entonces de funcionar durante los períodos constitucionales desde 1985 en torno a un eje político de tres partidos decisivos para la formación de gobiernos. Es cierto que los resultados de las elecciones de 1993 y 1997 modificaron ya este eje ampliando el espectro de partidos con importancia parlamentaria de tres a cinco partidos con la inclusión de CONDEPA y UCS, aunque si miramos más a fondo este eje estuvo dividido en dos bloques partidarios formados por el MNR y ADN/MIR que han sido la cabeza de todos los gobiernos desde 1985. La ausencia de una hegemonía mono o bipartidista fue entonces compensada por la formación de un trípode de partidos. Cada uno de estos partidos ha sido el pivote de construcción de mayorías y coaliciones gubernamentales. Las distintas experiencias partidarias en los gobiernos de coalición en particular, la ruptura del Pacto por la Democracia entre el MNR y ADN en 1989 trajo consigo además un patrón de competencia bipolar puesto que la alternancia en el poder se ha producido entre el MNR, por una parte, y ADN en alianza con el MIR, por otra parte.

En segundo lugar, un rasgo definitorio del sistema multipartidista moderado ha sido la ausencia de mayorías absolutas o la persistencia de mayorías relativas por lo cual ningún partido pudo conquistar una verdadera hegemonía política. En tercer lugar, el sistema partidario se basó en un tipo de competencia centrípeta que ha disminuido sustancialmente la tradicional polarización o distancia ideológica entre los partidos. A partir de 1989, es decir, después del primer período gubernamental de cuatro años

de aplicación de la Nueva Política Económica, un campo de enfrentamiento ideológico menos virulento y radical entre las elites políticas y económicas, que impulsaron la modernización liberal política y económica de la sociedad y el Estado, y nuevas fuerzas populistas, aferradas en muchos sentidos a las prácticas políticas del populismo tradicional, desplazó a los antagonismos entre las tendencias de democratización liberal, por una parte, y la izquierda marxista y populista, por otra.

De esta manera, las contradicciones entre los partidos que abogaban por la democracia representativa, la economía de mercado y el rol regulador del Estado, y aquellos que expresaban orientaciones populistas, comunitaristas y particularismos étnico-culturales marcaron las fracturas ideológico-políticas predominantes durante tres lustros, pero no tuvieron una influencia decisiva sobre el sistema político. Por el contrario, la dinámica de relativa polarización que se desató con la emergencia de CONDEPA y UCS dos partidos populistas de distinto signo, impulsados inicialmente por tendencias antisistémicas, fue neutralizada por los efectos centripetas del sistema de partidos y del sistema de gobierno llevando a una rápida integración de estos partidos neopopulistas y a la virtual desaparición de las organizaciones de la izquierda marxista. En este proceso, las contradicciones tradicionales entre la izquierda marxista-populista y las corrientes de derecha antidemocráticas se desvanecieron completamente. Como resultado, el espectro político quedó claramente definido por los partidos del “centro democrático” y un ambiguo proceso de resurgimiento y simultáneamente de rápida absorción de actores y movimientos neopopulistas.

En este panorama, fue extremadamente notorio que no hubieran cuajado hasta las elecciones de 2002 los esfuerzos de organizar partidos o movimientos sobre principios exclusivamente étnico-culturales y concepciones fundamentalistas. Si, por un lado, la política de inclusión en el sistema de representación continuaba siendo una de las asignaturas pendientes de mayor relevancia de los partidos políticos porque estos no tuvieron la capacidad de integrar ampliamente la multiplicidad de los clivajes étnico-culturales y las demandas de una nación mayoritariamente indígena, llamaba la atención, por el otro, el rechazo mayoritario de la población indígena a

orientaciones partidistas fundamentalistas y puramente indigenistas en la década del ochenta.

En resumen, los rasgos estructurales fundamentales del sistema multipartidista boliviano fueron: un número efectivo de cinco partidos, la vigencia de un formato tripartidista, es decir, de una tríada de partidos relevantes para la formación de coaliciones gubernamentales con mayoría parlamentaria, el pluralismo moderado y una polarización ideológica leve entre los partidos relevantes del sistema, la persistencia de mayorías relativas, y una competencia partidaria predominantemente centrípeta.

A partir de las elecciones de junio de 2002 estamos en una situación nueva. Ocurrieron cambios significativos del sistema multipartidista moderado que, sin embargo, no se tradujeron en una descomposición, sino más bien en una recomposición del sistema de partidos. Si entendemos un sistema de partidos como un conjunto estable de partidos que interactúan según reglas de juego aceptadas por todos, el sistema de partidos boliviano no se ha derrumbado ni ha llegado a su fin.

Esto no ha sucedido porque a pesar de la ambigüedad de las actitudes del MAS, MIP y NFR ante el orden democrático las reglas de juego de la competencia política siguen vigentes. Lo que ha ocurrido, ha sido fundamentalmente un cambio notable del sistema por la desaparición y declinación de algunos de sus componentes y surgimiento de otros lo cual equivale a una metamorfosis pero no a una disolución del sistema de partidos como tal. Es indudable que el trípode de partidos se deshizo. ADN que en las elecciones de 1997 obtuviera el 22.26% de los votos y 45 escaños, sufrió una catastrófica derrota convirtiéndose en un partido marginal y está prácticamente al borde de la desaparición al alcanzar sólo el 3,4% de votos y 5 escaños. Su catastrófica derrota fue algo previsible y casi un resultado esperado debido a la pésima gestión del gobierno de Banzer, cuya muerte terminó en comprometer seriamente el futuro del partido. Para el sistema de partidos, la marginalización de ADN implica ciertamente el debilitamiento del eje de partidos que sostuvo el proceso democrático hasta ahora, pero de ninguna manera una descomposición o su relevo por otro eje de partidos.

La descomposición del trípode MNR, MIR, ADN no trajo entonces como consecuencia el derrumbe conjunto de los tres partidos que lo conformaban ni tampoco el colapso del sistema de partidos. El trípode dejó de existir pero el MNR y el MIR mantuvieron su posición de partidos relevantes de tal manera que se convirtieron en la columna vertebral de una nueva coalición de gobierno. La razón es simple. El MNR ganó las elecciones por una ligera mayoría relativa del 22, 46% de los votos; sin embargo, obtuvo la bancada más fuerte de 47 escaños mientras que el MIR con el 16, 32% de los votos se colocó como tercera fuerza parlamentaria con 31 escaños de un total de 157 escaños parlamentarios. Son estos resultados que reflejan la desproporcionalidad del sistema de representación personalizada los que hicieron posible que el MNR y el MIR armaran una coalición parlamentaria y gubernamental inicialmente con 78 escaños o el 49.67% del Congreso casi la mayoría absoluta de 79 escaños y luego ampliada con el apoyo de UCS y ADN a 88 escaños o el 56.03% del total de escaños. Por lo tanto, no se puede afirmar que las elecciones hubieran desbaratado el sistema de partidos en su conjunto o creado otro eje político alternativo con capacidad de acceder al gobierno. Por el contrario, las elecciones hicieron posible que el MNR y el MIR continuaran como partidos relevantes con fuerza parlamentaria y capacidad de coalición. Atenerse sólo a la votación obtenida por los partidos no permite comprender los cambios en el sistema de partidos y la nueva correlación de fuerzas, y menos la lógica de la formación de gobierno que está inscrita en el sistema de elección congresal del Presidente de la República. Humberto Vacafloz Ganam. (2002). El Escenario Pos Electoral en Bolivia. La Paz Bolivia: Garza Azul.

La insurgencia popular de octubre no tuvo una dirección política única ni objetivos claros en términos de buscar desemboques políticos distintos a la institucionalidad vigente. Sin embargo, los partidos políticos que jugaron un papel activo fueron el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP).

Asimismo, las principales organizaciones sociales que protagonizaron un rol importante fueron la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Central Obrera

Regional de la ciudad de El Alto (COR) y, fundamentalmente, las Juntas Vecinales de esa ciudad, cada una de ellas encabezadas por sus respectivos dirigentes.

En relación al debate nacional sobre los hidrocarburos, los hechos producidos en octubre evidenciaron claramente la existencia de dos posiciones completamente antagónicas. La primera, asumida por el movimiento social, planteó insistentemente la urgencia de recuperar los derechos de propiedad del gas y el petróleo, la industrialización de esos recursos, la oposición a la exportación de gas natural por puertos chilenos y un significativo incremento de los ingresos que provienen de la industria hidrocarburífera con destino al Tesoro General de la Nación (TGN). La segunda posición, abanderada fundamentalmente por los comités cívicos de las ciudades de Tarija y Santa Cruz, y por agrupaciones de empresarios cruceños, considera imprescindible mantener el actual régimen jurídico en el Sector Hidrocarburos para garantizar la realización de los proyectos de exportación, especialmente el de la venta de gas natural a México y Estados Unidos. Respaldando esta segunda posición, el Comité Cívico tarijeño, poco antes del desenlace de los conflictos en octubre, organizó una marcha en la ciudad de Tarija que convocó, por primera vez, a miles de ciudadanos.

El grado de polarización al que llegó el país en los días de octubre, evidenciado no sólo por las dos posiciones antes descritas sino por las contradicciones existentes dentro de cada una de esas posiciones cívicas tarijeñas frente a cívicas chaqueñas, por ejemplo, se explica, entre otras razones, por el pésimo manejo de la problemática del gas natural y del proyecto de exportación a Estados Unidos y México durante de los gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Quiroga y del propio Sánchez de Lozada.

El primer resultado político de ese agudo proceso de polarización fue, precisamente, la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República, el 17 de octubre de 2003, luego de los dramáticos hechos sucedidos en la ciudad de El Alto. Dicha renuncia, aceptada en el Congreso Nacional, posibilitó la asunción del vicepresidente Carlos Mesa en el mando de la nación, siguiendo las normas de la sucesión constitucional. Ese mismo día, el viernes 17 de octubre, el nuevo Presidente se comprometió, ante el movimiento popular que en esas horas celebraba la caída de

Sánchez de Lozada, a llevar adelante dos medidas concretas en el campo de los hidrocarburos: un referéndum vinculante para definir el destino del gas natural y la elaboración de una nueva Ley de Hidrocarburos. Dicho compromiso fue ratificado poco después, el 4 de enero de 2004, en un mensaje del Presidente a la nación. En ese mensaje, además, Carlos Mesa le puso fecha al referéndum (28 de marzo, 2004) y a la presentación del proyecto de una nueva Ley de Hidrocarburos al Congreso (31 de enero, 2004). Sin embargo, fue mucho después, el 13 de abril de 2004, cuando quedó definida la fecha del referéndum (18 de julio de 2004) y cuando se conoció la versión final de la nueva Ley de Hidrocarburos (14 de abril de 2004).

A pesar de fijada la fecha del referéndum, no existe aún definición alguna sobre sus objetivos y contenidos. En un principio, poco después de los conflictos sucedidos en octubre de 2003, se consideraba que esta consulta definiría el futuro de la exportación de gas natural. La supuesta cancelación del proyecto de venta a México y Estados Unidos impulsado por el consorcio Pacific LNG, debido a un acuerdo al que arribaron los probables compradores del gas boliviano con otros proveedores, supuso la necesidad de cambiar la orientación de la consulta. Sin embargo, entre febrero y marzo de 2004, una de las empresas integrantes del mencionado consorcio, Repsol YPF, informó que el proyecto de venta de gas al Norte seguía vigente, hecho que reactualiza uno de los probables contenidos del referéndum: la exportación y el puerto de salida del energético.

Pero además de los seguramente estudiados posicionamientos de las empresas petroleras transnacionales respecto de sus proyectos de exportación en nuevas condiciones políticas, existen al menos dos elementos que complejizan aún más el panorama de la consulta sobre el destino del gas natural. Uno de ellos tiene que ver con la postura asumida por el gobierno de Carlos Mesa frente a Chile respecto de la añeja reivindicación marítima boliviana. El segundo elemento a considerar es la cada vez más evidente necesidad de nuevos mercados para la provisión de gas natural que tienen Chile y Argentina.

A diferencia de sus antecesores inmediatos, Carlos Mesa ha planteado abiertamente y en diversos foros internacionales, la más que centenaria exigencia boliviana a Chile

de un acceso soberano al océano Pacífico. El país vecino, por su parte, ha reiterado su viejo e inflexible discurso de negarle a Bolivia soberanía alguna en su actual territorio. Si a este primer elemento se le añade la cada vez más inocultable necesidad de Chile y de Argentina de proveerse de otras fuentes de gas natural, especialmente porque el segundo de los países mencionados se encuentra en el dilema de cumplir sus compromisos de venta a Chile o atender la creciente demanda interna del energético, el cuadro parece favorecer notablemente a los intereses de Bolivia y podría esclarecer los contenidos del anunciado referéndum. A nuestro juicio, el actual gobierno debería aprovechar estas circunstancias y consultar a los bolivianos si estamos de acuerdo en venderle gas a Chile y exportar a través de un puerto chileno bajo la condición de que el país vecino conceda a Bolivia una salida soberana al mar. Nos parece que éste debiera ser el contenido central del referéndum. No hacerlo así, no aprovechar la circunstancia actual, significaría cometer un error histórico.

Respecto a la nueva Ley de Hidrocarburos, el gobierno de Carlos Mesa parece haber optado por aislarse del movimiento social. El hecho de preparar y definir el diseño y contenidos de la citada ley en el marco restringido de las instancias gubernamentales, sin la participación de los sectores sociales en busca de un acuerdo nacional, así lo confirma.

Pero además, el gobierno decidió presentar y discutir su proyecto de ley, en primer lugar, con las empresas petroleras extranjeras, lo que nos señala que sus contenidos se definirán en función del grado de aceptación de estas empresas. No debería ser necesario señalar que las transnacionales del petróleo y el gas nunca en la historia asociaron sus intereses a los de los países en los que operan; debería estar absolutamente claro que estas empresas actúan en base a un sólo propósito: precautelar y defender a ultranza sus márgenes de ganancia. Hay que recordar aquí estos preceptos porque el gobierno de Carlos Mesa parece haberlos olvidado, hay que recordarlos porque su olvido podría derivar en que el proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos se distancie del conjunto de reivindicaciones planteadas en octubre.

Carlos Villegas Quiroga. (2004). El Movimiento Social y la Caída de Sánchez de Lozada. La Paz Bolivia: Plural.

Para entender la manera en que los actores políticos iniciaron presión sobre el gobierno es necesario volver al punto económico, en especial, a las privatizaciones empleadas en el gobierno neoliberal.

Sánchez de Lozada (1993-1997) con su Plan de Todos inició una privatización de todo el patrimonio del Estado: ferrocarriles, minas, petróleo, electricidad, teléfonos, empresas aéreas, aguas, a favor de empresas mayormente estadounidenses.

Particular importancia tuvo la privatización del agua a la empresa estadounidense Bachtel que producto de un aumento de tarifas del agua potable da lugar a una insurrección en el año 2000: la Guerra del Agua. Ésta sublevación logró que la empresa estadounidense abandonara el país. Fue la primera vez que se rechazó a capital transnacional. Sin embargo, esta no fue la única consecuencia de la acción empleada; la Guerra del Agua permitió la emergencia a Evo Morales, un aymara de 42 años, cocalero, que se vio afectado por el decreto 21060 que había relocalizado a miles de mineros en 1985. Este dirigente es de vital importancia pues años más tarde, 2002, el movimiento cocalero agrupado en el ya mencionado partido político, MAS, logró llevar al parlamento a 35 indígenas y campesinos y, su líder disputó en el congreso la presidencia con Sánchez de Lozada.

Paralelamente, toma importancia el movimiento indígena aymara que también conforma un partido político: el MIP, que en septiembre del mismo año 2000 realiza una contundente huelga general y un bloqueo permanente. El paro en la parte andina de Bolivia impide la llegada de combustibles y alimentos a La Paz por lo que una situación permanente de bloqueo pone en riesgo inmediatamente la estabilidad política del gobierno.

Estos dos partidos cobran tal importancia que en conjunto, en las elecciones del año 2002, ocupan casi un tercio del parlamento boliviano, el 28 por ciento de los votos. Esto no deja de ser importante puesto que sin lugar a dudas cambia los equilibrios de poder tanto porque las fuerzas políticas dominantes, es decir, los empresarios privados, el ejército, la embajada de Estados Unidos, el MNR (Movimiento Nacional Revolucionario) y el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), pierden

poder como para permitir la entrada al congreso de un grupo antes marginado de la esfera política (el MAS y el MIP).

En ese mismo año, ante una nueva parálisis de la economía, el gobierno de Sánchez de Lazada trata nuevamente de actuar bajo la lógica del modelo neoliberal, pese a los anteriores resultados, favorece la exportación del gas natural que ya se entraba en manos privadas puesto que en 1997, dos días antes de dejar el poder, nuevamente actuando bajo el decreto 24.806, el gas boliviano pasa a ser propiedad de empresas transnacionales. A partir de dicho decreto, el Estado boliviano pierde todo poder sobre este hidrocarburo limitándose sólo a decidir la manera y el lugar donde se explotaría el recurso.

Así, se pretendía exportar el gas a través de un puerto chileno, eterno enemigo de Bolivia, producto de la Guerra del Pacífico (1879-1884). Por lo anterior, empieza una dura ofensiva contra el gobierno, la llamada Guerra del Gas donde se exigía que la propiedad de los hidrocarburos volviera a manos del Estado boliviano junto con la no exportación por Chile, ni para Chile.

La demanda del MAS y el MIP no lograba una adhesión significativa. Sin embargo, el 12 de septiembre de 2003, producto de un problema de justicia comunitaria, un grupo de autoridades indígenas, hombres y mujeres se declaran en un acto de movilización y bloqueos permanentes junto con una huelga de hambre por parte de los líderes indígenas. Esta movilización fue realmente exitosa, además hay que recordar que los bloqueos son un punto clave para el desabastecimiento de la capital. Sin embargo, un día después, se manda un pelotón del ejército a la zona del conflicto el cual desató una balacera dejando un saldo de cinco campesinos muertos. De esta forma se formalizó la crisis del gas, empiezan a suscitarse gran cantidad de movilizaciones y éstas a tener cada vez un mayor número de participantes; es más, el 8 de octubre del mismo año se une el COB (Central Obrera Boliviana) que luego de muchos años empieza nuevamente a movilizarse.

Pero, sin lugar a dudas, los días posteriores fueron claves; el 11 y 12 de octubre la represión que ejerció el ejército contra la sociedad civil dejó un saldo de 30 muertos.

Cabe destacar que para muchos la insurrección que depuso al presidente Sánchez de Lazada fue superior en movilización social a la de 1952 con la Revolución Nacional.

Al día siguiente se repiten los dramáticos enfrentamientos dejando nuevamente la misma cifra de muertos. Esta nueva represión tuvo importantes consecuencias: despolitizó el conflicto ya que unió a las clases medias a la demanda de renuncia del presidente Sánchez de Lazada. Así, producto de constantes represiones el presidente Sánchez de Lazada huye a Estados Unidos el 17 de Octubre, sin que Estados Unidos se proponga llevarlo ante la justicia por crímenes contra la humanidad es más, la asesora del Presidente de Estados Unidos, Condolezza Rice, en torno a las revueltas declara que Washington advierte a los manifestantes contra todo intento de derribar por la fuerza a un gobierno democráticamente elegido.

Definitivamente no es ni democrático ni representativo un Estado donde se atenta contra los propios ciudadanos, la soberanía de un Estado conlleva responsabilidades e incumbe al propio Estado la responsabilidad principal de proteger a su población.

Con la salida de Sánchez de Lozada, la sociedad boliviana rechaza el modelo económico que en toda América Latina agravó la corrupción, arruinó a las poblaciones e incrementó la exclusión social. Rene Antonio Mayorga. (2007). La Crisis del Sistema de Partidos en Bolivia. La Paz Bolivia: IIPS.

CAPÍTULO V

Características dictatoriales del segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada

Antes de poder revisar las características dictatoriales del segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, y hacer una comparación entre este gobierno y uno dictatorial, se debe revisar de forma teórica al menos los conceptos tanto de dictadura como de democracia, y otros a fines como poder.

5.1. Dictadura, democracia y conceptos afines.

La noción usual de dictadura es, en realidad, negativa: dictadura es no-democracia. De ese modo, por definición, la pareja conceptual de dictadura y de democracia es conjuntamente exhaustiva y mutuamente exclusiva. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

Los muchos matices que con relación al concepto de democracia nos llevan a relativizar, correspondientemente, la noción de dictadura, si nos atenemos a ese valor entendido y al uso corriente de la palabra en nuestros días.

En este sentido se podría empezar por brindar una definición independiente del concepto de dictadura para luego definir el de democracia como lo que no sea dictadura.

Hubo un tiempo en que un régimen político podía declararse dictatorial, pero después ningún gobernante ha aceptado ser un dictador. Como los demagogos, como los populistas, los dictatoriales son siempre los adversarios, nunca uno mismo. En ese uso banal, el concepto de dictadura carece de utilidad. No se dispone de ningún contorno claro ni de ninguna dilucidación fructífera que nos ayuden a emplearlo con discernimiento y de tal manera que con ello el análisis político salga beneficiado en capacidad de comprensión y de explicación. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

Sería más beneficioso diferenciar entre cuatro conceptos a menudo abusivamente identificados: dictadura, tiranía, régimen totalitario y democracia.

- Para el concepto de dictadura sería más esclarecedor retornar a sus orígenes etimológicos romanos, (del latín *dictatūra*) que es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo (*dictador*) o élite, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, que se caracteriza por una ausencia de división de poderes, una propensión a ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que la apoya, la independencia del gobierno respecto a la presencia o no de consentimiento por parte de cualquiera de los gobernados, y la imposibilidad de que a través de cualquier procedimiento institucionalizado la oposición llegue al poder. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

Entonces podemos entender la dictadura como una interrupción temporal de la vigencia de las instituciones legales, asumiendo, en el ínterim, el poder un individuo o grupo de individuos revestidos de una potestad legislativa que excede el ámbito normal de competencia del legislador en el marco de un Estado de derecho dotado de un sistema constitucional. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

La dictadura puede establecerse legal o ilegalmente; su duración puede prolongarse también legal o ilegalmente. Una dictadura puede ser benéfica o maléfica, tolerante o tiránica. Pero, desde luego, las dictaduras tienden a ser maléficas y tiránicas. Los sistemas constitucionales prevén el establecimiento de dictaduras, aunque no las llamen así, sino situaciones de emergencia o excepción, con suspensión de garantías constitucionales y con plenos poderes al gobierno para legislar en ciertas materias. Tales situaciones son sumamente peligrosas para la preservación de la normalidad constitucional y muchas veces son abusivamente aprovechadas por el gobernante para establecer su tiranía para violar la constitución, instaurando un poder no constitucional.

Los ejemplos abundan: desde la llegada de Hitler a la jefatura del gobierno alemán en enero de 1933 y cómo explotó, en su propio provecho, hasta los golpes de Estado semi-constitucionales de Velasco Ibarra en el Ecuador, Fujimori en el Perú y muchos otros. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

Por otro lado, no existe ningún criterio riguroso y evidente para poder calificar una situación o una evolución política dentro de un sistema constitucional como dictatorial o no. Las restricciones a tales libertades, muy alegremente admitidas en unos países y menos en otros, no autorizan sin más a calificar lo que existe en los primeros de dictadura, porque cualquier sistema de libertades es un juego complejo de derechos y obligaciones, que está sujeto a condiciones y limitaciones, entendiéndose en unos sitios de un modo y en otros de otro. En EE.UU. la doctrina constitucional del originalismo impone que los derechos fundamentales del hombre sean poquísimos como la libertad de palabra pero ilimitados e incondicionales (aunque eso en la práctica nunca ha operado así, ya que la calificación jurídica de incitación a la comisión de actos ilícitos ha permitido muy a menudo cercenar seriamente la libertad de expresión). En otros países se considera que la panoplia de derechos fundamentales es mucho más amplia pero que muy pocos derechos son absolutos y no todos son incondicionales (un derecho absoluto sería el de no ser torturado y aun eso no lo aceptan todos los autores unánimemente). Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

Por lo tanto no disponemos de un catálogo preciso de derechos que nos permita afirmar que donde sean violados estamos en presencia de una dictadura y donde no lo sean, no. Y es que se puede afirmar rotundamente, sin lugar a duda alguna, que en todos los países del mundo siempre se han violado de manera sistemática o no, continuada o puntualmente bastantes de los derechos que hoy consideramos fundamentales y sin cuya salvaguardia no hay democracia. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

Es verdad que tales violaciones son más generalizadas y graves en unos casos, menos en otros, pero lo principal es que el juego mismo de todos esos derechos fundamentales hace que nunca pueda darse una combinación perfecta: una restricción de la libertad informativa en aras de la salvaguardia de la presunción de inocencia, de la privacidad y del respeto a la honra ajena es una solución a los dilemas constitucionales tan aceptable en términos genéricos y abstractos como lo sería, a la inversa, una limitación de esa presunción de inocencia y de esos derechos a la honra y a la privacidad en aras de no colisionar con la libertad informativa. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

Es la perspectiva del desarrollo político de un sistema en un módulo temporal de suficiente duración lo que nos puede permitir determinar, con algún fundamento, si la situación política es o ha sido una de dictadura transitoria, legal o ilegal, o tal vez sólo de semi-dictadura, o bien el régimen analizado merece una calificación más contundente como la de despotado o tiranía. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

- La tiranía (del griego *tyrannía*, en latín *tyrannus*,) en el sentido que se dio al término en la Grecia antigua, era el régimen de poder absoluto, de ordinario unipersonal, instaurado por un tirano; el gobernante que había accedido al poder mediante la violencia, derrocando al anterior gobierno de una polis (las ciudades - estados griegos), gracias al apoyo popular del pueblo o mediante un golpe de estado militar o una intervención extranjera. El tirano ocupaba el poder no por derecho, sino que lo detentaba por la fuerza de facto. Para la mentalidad moderna, la tiranía se identifica con un uso abusivo y cruel del poder político que se ha usurpado, un poder no sólo ilegítimo por su origen, sino también injusto por su ejercicio y que reprime cualquier oposición; pero entre los antiguos griegos, sin embargo, el término no estaba tan cargado de connotaciones peyorativas: en principio tenía una connotación positiva, puesto que muchos tiranos eran

queridos y muy populares entre los ciudadanos de las polis hasta el punto que algunos se contaron en la lista de los siete sabios de Grecia, aunque la demagogia o populismo de su forma de acceder al poder y conservarlo también fueran criticadas por los anteriores ocupantes del poder (la aristocracia), y la corrupción política de su ejercicio por parte de muchos de ellos terminara convirtiendo en odiada la figura de los tiranos, que pasaban a ser a su vez depuestos o incluso asesinados. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

Estrechamente relacionada con la noción recién estudiada, la de tiranía difiere de ella en que la tiranía implica siempre una usurpación ilegal, un ilícito asalto al poder por un individuo o un grupo de individuos que, vulnerando las normas constitucionales, se han adueñado de él y que mantienen su usurpación ejerciendo un poder despótico, oprimiendo a la población y no gobernando para el bien común. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

El concepto clásico de tiranía venía, en el pasado, a funcionar en gran medida como el concepto moderno de dictadura. Era el marchamo que permitía justificar a salvo de ciertas condiciones las conductas subversivas o incluso insurreccionales de la población oprimida o de quienes actuaran legítimamente como sus representantes (una legitimidad en la práctica siempre difícil de determinar y más aún de probar). Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

- El concepto de régimen totalitario suele hoy, si no confundirse, sí a menudo asociarse al no mucho más claro de dictadura, aunque suena tan mal que se suele intercalar un régimen aún peor definido y de contornos todavía más dudosos: el autoritario, que sería cualquier régimen que no fuera ni democrático ni del todo tiránico. Se conoce como totalitarismos a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo

el poder sin divisiones ni restricciones. Los totalitarismos, o regímenes totalitarios, se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes, por lo general exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad con el propósito de formar una persona nueva en una sociedad perfecta, y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como la policía secreta. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

La idea de régimen totalitario más comúnmente aceptada es la de un sistema político marcado por dos rasgos: (1) la adhesión a una ideología que pretende brindar una interpretación de la realidad y que se impone a todos coercitivamente; y (2) el poder estatal se extiende a todos los ámbitos, anulándose el distingo entre Estado y sociedad civil.

Podemos seguir usando la locución régimen totalitario, con un valor entendido, convencional, para referirnos a ciertos regímenes despóticos y tiránicos, especialmente cuando ellos mismos dieron el paso de reivindicar, en uno u otro momento, tal denominación. Más allá de esa convención, tal sintagma pierde interés, porque en rigor no expresa ningún concepto claro, limitándose a ser una mera manifestación de oprobio o desaprobación. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

- Por último, la democracia (del latín *democratia*, y este del griego (*dēmokratía*), es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido

amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. La democracia se puede definir a partir de la clásica clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón, primero, y Aristóteles, después, en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno de los mejores para Platón, de los menos, para Aristóteles), democracia (gobierno de la multitud para Platón y de los más, para Aristóteles). Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos. Lorenzo Peña. (2009). Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual. Toluca México: Madrid.

Finalmente, hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos vinculantes, elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, concepto que incluye la democracia líquida. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso de una de las tres formas en un sistema político concreto. No debe confundirse República con Democracia, pues aluden a principios distintos, la república es el gobierno de la ley mientras que democracia significa el gobierno del pueblo. Para que un régimen político sea una democracia, ciertamente, ha de haber en él mecanismos y garantías que se establezcan de manera que las decisiones políticas adoptadas puedan considerarse procedentes del pueblo en última instancia en virtud de la observancia de esos mecanismos y del respeto de esas garantías. Pero algunos mecanismos y algunas garantías harán más veraz el aserto de que la decisión así tomada emana en última instancia del pueblo; otros mecanismos y otras garantías lo harán menos veraz o más dudoso.

5.2. El poder político.

El concepto de poder se centra en la imposición de la propia voluntad sobre otras personas. Literalmente el poder se puede definir como la capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de otros individuos o grupos en la forma deseada y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en que no se desea.

En un sentido amplio, el poder se refiere a todos los tipos de influencia entre personas o grupos, incluyendo los que se ejercen en las transacciones de intercambio.

El poder político es la lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de gobierno en un país. Generalmente, éste influye en el comportamiento, ya sea en pensamiento o en el actuar de una sociedad.

Es legítimo cuando es elegido conforme a las leyes del país (constitución). En países democráticos tiene como sustento la legitimidad otorgada por el pueblo mediante el voto popular (elecciones), pero se le suele considerar abusivo cuando se excede en el ejercicio de sus funciones, avanzado en materias que están dentro del ámbito de los otros poderes (intromisión de poderes). El poder político es ilegítimo cuando utiliza mecanismos no autorizados por las leyes y se adueña del poder gubernamental (ejecutivo-legislativo) sin tener la legitimidad del pueblo, otorgada por el voto popular.

Una vez habiendo analizando los diferentes conceptos anteriores, nos adentraremos en las características dictatoriales que adoptó o asumió el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y las causas, y efectos que esto ocasionó, analizando los hechos pre y pos caída del gobierno ya mencionado. Lorenzo Peña. (2009). *Dictadura, Democracia, República: Un Análisis Conceptual*. Toluca México: Madrid.

Los conflictos del gas comenzaron en febrero de 2003, en medio de otros encontronazos con el gobierno: se integraron con los primeros enfrentamientos entre la policía (en contra de los recortes de salario y el impuestazo) y el ejército, y los reclamos frente a los proyectados incrementos de los impuestos a las propiedades. El llamado *impuestazo* gravaba de manera excesiva las rentas bajas y bloqueaba los

sueldos de los trabajadores estatales, para llenar el déficit de las cajas del Estado, que registraba un 9%. Pero no era el único ajuste fiscal programado para la zona del El Alto. Los llamados formularios Maya y Paya requerían mayor información sobre la dimensión de las propiedades: de acuerdo con muchos, el objetivo de esta medida era propiciar un ajuste al alza de los impuestos inmobiliarios.

Como si no fuera suficiente, el gobierno aprobó la Ley llamada Protección y seguridad ciudadana. La ley preveía que se pudieran aplicar medidas de emergencia para contener las protestas sociales, y prohibía cualquiera forma de bloqueo de carreteras con sanciones desde cinco hasta ocho meses de cárcel. La aplicación perversa de esta Ley permitió al gobierno de usar indiscriminadamente la violencia durante las movilizaciones del llamado Octubre rojo de 2003.

Lo que encendió finalmente, la mecha de las movilizaciones y de la furia popular fue la encarcelación de Edwin Huampu, secretario general de la central campesina de Cota Cota, provincia de Los Andes, departamento de La Paz.

Huampu había sido advertido por las autoridades judiciales de la detención de dos comuneros sorprendidos por participar en una asamblea de justicia comunitaria. El 20 de julio, dos ladrones habían sido ejecutados por la comunidad. La autoridad llegó en el lugar del hecho y luego de una investigación expeditiva detuvo Huampu, que se percibía como el responsable de la ejecución, a pesar de que la comunidad no hubiera exhibido pruebas suficientes y los acusados no hubieran sido identificados claramente como sospechosos. Huampu fue encarcelado la semana siguiente en La Paz, y las protestas que siguieron fueron el inicio del fin para el segundo mandato de Sánchez de Lozada y de la coalición del MNR.

En medio de esa seguidilla de enfrentamientos y descontento popular, los meses que llevaron al inicio de la guerra del gas, antes del “Febrero negro” que vio la policía enfrentar al ejército, se caracterizaron por protestas de las Federaciones del Trópico, o sea de los productores de coca. Los inevitables pasos sucesivos fueron la militarización de las carreteras y los muertos que cayeron bajo el plomo de los soldados. Choques y bloqueos se sucedieron hasta febrero, y se extendieron en todas las zonas del altiplano y del valle de Cochabamba y Chuquisaca. Como ya señalamos, un producto de los conflictos fue el acercamiento de los tres principales

líderes sociales durante estas últimas protestas antes de los momentos cruciales del “febrero negro y octubre rojo”.

En principio, las Coordinadoras del agua y del Trópico se mantuvieron al margen, hasta que estalló la guerra del gas en 2003 protagonizada por la FEJUVE (Federación de juntas vecinales), cuando Morales y Olivera decidieron apoyar con lucha armada.

Dada la complejidad de los hechos de la llamada guerra del gas, incluimos una cronología que permite detectar la multiplicidad de factores de reclamo y la escalada de violencia. Cuestión que se profundizó en el mes de septiembre de 2003.

5.3. La guerra del gas. De febrero negro a octubre rojo.

5.3.1. Cronología de los hechos.

8 de septiembre 2003, lunes. Los campesinos se unieron a las protestas de la confederación sindical de los chóferes, a los estudiantes de la UPEA (Universidad pública de El Alto) y a los vecinos de El Alto para marchar hacia La Paz. Reivindicaban el rechazo de la venta del gas, la liberación de Huampu, el no al ALCA (Área de libre comercio de las Américas), y la autonomía de la UPEA. La marcha se dividió en tres, en la ceja de El Alto, y desde tres grandes carreteras entró en La Paz. Desde la Plaza de San Francisco la protesta se movió hacia la cárcel donde estaba detenido Huampu. Contemporáneamente en El Alto se convocó un paro indefinido de 24 horas contra los formularios Maya y Paya. Nicola Neso. (2012). La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas. Roma: Albatros.

10 de septiembre, miércoles. La liberación de Huampu era, según los movilizados, la única condición por seguir con las conversaciones. El gobierno no mantuvo el compromiso. Por el día 15 de septiembre se convocó el paro total de las actividades en la ciudad de El Alto. Nicola Neso. (2012). La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas. Roma: Albatros.

15 de septiembre, lunes. El Alto estaba casi completamente bloqueado. El gobierno respondió con detenciones y encarcelamientos, según la ley 2494. El sindicato de los chóferes bloqueó totalmente los transportes, y los estudiantes universitarios promovieron bloqueos de carreteras y se prepararon a enfrentar la policía. Se bloquearon también las vías de acceso a la La Paz y prácticamente todas las carreteras que llevan a las provincias del Norte, al Titikaka y a la frontera con el

Perú. El gobierno dijo que iba a utilizar la fuerza para reprimir las protestas. Nicola Neso. (2012). *La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas*. Roma: Albatros.

16 de septiembre, martes. Continuaba el bloqueo de El Alto. El gobierno derogó los formularios Maya y Paya. En la zona sur de la ciudad se produjeron los primeros choques con la policía, el primer herido grave y una decena de detenciones. Se planeó un bloqueo por el 19 de septiembre, contra la venta del gas, que preveía el apoyo de algunos partidos (el MAS de Morales) y de algunas delegaciones de la ciudad de Cochabamba. Nicola Neso. (2012). *La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas*. Roma: Albatros.

17 de septiembre, miércoles. Se instaló sin preaviso un bloqueo casi total de todas las carreteras que conectaban El Alto con el Norte de la provincia de Omasuyos, y también se pusieron alrededor de Achacachi y del lago Titikaka. Más de tres mil campesinos se dirigían hacia Rojorrojoni para decidir si marcharían nuevamente hasta La Paz.

18 de septiembre, jueves. Una marcha de más de diez mil campesinos se iba desde el sur hacia La Paz con el orden de bloquear todas las vías de comunicación con la sede del gobierno. Al bloqueo se unieron otra vez los sindicatos de los transportistas y la militarización se hizo más pesada. Nicola Neso. (2012). *La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas*. Roma: Albatros.

19 de septiembre, viernes. Los contingentes de protesta procedentes del Norte se juntaron con los que procedían de este en La Paz, para reunirse finalmente en la sede del gobierno con los que hacían parte de la COB y con los transportistas. El enfrentamiento se produjo a lo largo del Prado que separa Plaza de San Francisco de la Plaza del Estudiante. En Cochabamba, entretanto, hubo un cabildo abierto con más de veinte mil personas que se reunían en defensa del gas y de los recursos naturales. Encabezados por Oscar Olivera, los movimientos sociales elaboraron las reivindicaciones: revisión de la ley de hidrocarburos sobre la propiedad del recurso en boca de pozo, la industrialización del gas en territorio boliviano sin vender al exterior (si no con valor añadido), un referéndum para decidir desde que puerto debía salir el gas hacia los Estados Unidos.

20 de septiembre, sábado. Se produjeron enfrentamientos en Warisata y Sorata entre los indígenas y el ejército (500 soldados) y tres personas quedaron muertas. En los

dos pueblos la gente prendió fuego a oficinas del gobierno y detuvo a policías como rehenes. La población empezó a armarse con viejos fusiles Mauser de la guerra del Chaco.

Felipe Quispe, líder indígena y sindical, rompió los negocios con el gobierno luego de los hechos de Warisata y Sorata. Declaró el estado de sitio por el altiplano y animó los movilizados a defenderse con armas si fuera estado necesario. Nicola Neso. (2012). La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas. Roma: Albatros.

21 de septiembre, domingo. En las comunidades del Norte se intensificaron bloqueos y protestas, luego de una reunión campesina en la plaza de Sorata. El mismo día 22 de septiembre hubieron violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que detuvo decenas de personas y logró encontrar el arsenal de Mauser de los rebeldes. El día siguiente hubieron nuevos choques, y el 24, a pesar de que Huampu había sido excarcelado, la policía siguió reprimiendo. Nicola Neso. (2012). La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas. Roma: Albatros.

En Qalachaka, cerca de Achacachi, se instaló el cuartel general indígena. Las mercancías empezaban a faltar.

29 de septiembre, lunes. La ruptura entre Quispe y el gobierno hizo estallar nuevamente la protesta: nuevos bloqueos, mercados cerrados, carreteras hacia La Paz completamente intransitables, el aeropuerto internacional de El Alto totalmente bloqueado por decenas de miles de manifestantes. Hubieron nuevas manifestaciones también en la zona del lago Titikaka. Nicola Neso. (2012). La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas. Roma: Albatros.

30 de septiembre, martes. Desde Cochabamba y el Chapare salieron dos grandes marchas que se reunirían después en la carretera por La Paz: la de la Coordinadora del agua de Oscar Olivera y la de los coccaleros de Evo Morales. La COB proclamó una huelga general con el paro de todas las actividades. El día siguiente el gobierno pidió otra vez el negocio con Quispe. El jueves 2 de octubre hubieron pesados choques con la policía en El Alto, que dejaron muchos heridos. En la plaza de San Francisco en La Paz hubo otro cabildo abierto convocado por la COB. Nicola Neso. (2012). La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas. Roma: Albatros.

3 de octubre, viernes/ 6 de octubre, lunes. En cuatro días se produjeron una decena de marchas en La Paz y Cochabamba, El Alto y Santa Cruz. Las vías de acceso por

los Yungas fueron bloqueadas y el tráfico de productos tropicales hacia la ciudad se detuvo completamente. Los movilizados empezaron a pedir por la Asamblea Constituyente. La COB, luego de años de silencio político volvió a ser uno de los actores principales y más influyentes, debido a su enorme capacidad convocatoria. Nicola Neso. (2012). *La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas*. Roma: Albatros.

El día 5 de octubre el presidente Sánchez de Lozada amenazó a medio de prensa de exacerbar las penas y reprimir los manifestantes. El *Goni* militarizó el Chapare y lo que obtuvo fue un aumento de la rabia del pueblo: el día siguiente en La Paz llegaron también los manifestantes desde Oruro. Nicola Neso. (2012). *La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas*. Roma: Albatros.

9 de octubre, jueves. Fue el segundo día de paro total por la ciudad de El Alto. La marcha de los mineros fue detenida por el ejército que, finalmente, tuvo que ceder luego de la reacción de los marchistas y de los vecinos que ayudaban a los mineros. Después de otros enfrentamientos, los soldados lograron detener la marcha, aún frente a los mineros que seguían lanzando dinamita hacia los militares. Una caravana de autobuses de militares fue atacada por la población. Durante los enfrentamientos murió un niño. Las negociaciones entre la dirección aymara y el gobierno se pararon otra vez. Nicola Neso. (2012). *La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas*. Roma: Albatros.

11 de octubre, sábado. Una caravana de camión cisterna salió del depósito de Senkata, de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (subsidiaria de Repsol), hacia la ciudad de La Paz, escoltada por los militares. Alrededor de 5 mil personas asaltaron a los camiones y al ejército, logrando detenerlos durante más de media hora. Hubieron decenas de heridos y un niño muerto. La reacción de los vecinos hizo que sólo tres de las veinticuatro cisternas llegaran al objetivo. Nicola Neso. (2012). *La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas*. Roma: Albatros.

Los movilizados empezaron a organizarse con estilo militar al fin de lograr resistir hasta que fuera posible: turnos de ronda y vigilancia, nuevas disposiciones por la gente y división de las tareas durante los enfrentamientos.

12 de octubre, domingo. El gobierno anunció la total militarización de La Paz y El Alto. El secuestro y el incendio de un taxi durante las operaciones de instalación de un bloqueo, encendieron una nueva mecha aquel día. Los enfrentamientos que

siguieron fueron violentos y el ejército respondió con las armas de fuego y los tanques.

Otra caravana de cisternas se movió de Senkata hacia La Paz, y los vecinos no se amilanaron. Miles de personas atacaron el convoy mientras que se encontraba detenido esperando a que los militares liberaran la carretera de un bloqueo de piedras y barricadas. Durante los enfrentamientos, se registraron varios muertos.

Entretanto los estudiantes de la UPEA, encapuchados, atacaban los militares con bombas molotov, siguiendo la que era ya la lógica de una verdadera guerra civil: los bloqueos se establecieron en puntos estratégicos y se combatía por el control de las *trancas* (las barreras policiales donde usualmente se tiene que pagar el peaje). Los soldados actuaron una vez más rastreando y disparando casa por casa. A las ocho de la noche, cuando acabaron los enfrentamientos, se contaban veinticinco muertos de parte de los manifestantes, además de un soldado.

La dirección aymara rechazó definitivamente todas las propuestas de negociación del gobierno. La suerte estaba echada. Sólo querían una cosa: la cabeza del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Nicola Neso. (2012). *La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas*. Roma: Albatros.

13 de octubre, lunes. El paro era total. Las principales ciudades del país estaban completamente bloqueadas. No había productos en los mercados, no había coches en las calles.

El vicepresidente Carlos Mesa leyó un comunicado y se desvinculó del presidente. Los Estados Unidos y la OEA (Organización de los Estados Americanos), en cambio, reiteraron su apoyo al presidente constitucional.

Una multitud inmensa se encontró en la plaza de San Francisco: habían chóferes, estudiantes, mineros, campesinos, indígenas, coccaleros desde el Chapare, desde Oruro, Cochabamba, Sucre, Potosí, La Paz, El Alto, Santa Cruz, desde el Oriente Amazónico. Durante los choques, un cuartel del ejército fue forzado a la rendición (con bandera blanca en la ventana) y a entregar las armas, y una camioneta fue prendida fuego.

El lunes 13 de octubre sumaba 28 muertos a los más de setenta, a partir de la masacre de Warisata.

Entretanto que en la Plaza Murillo (sede del gobierno en La Paz) se quedaban los tanques, la CSUTCB leyó un comunicado en el que se adelantaba la cercana expulsión del *yanqui* Sánchez de Lozada. Nicola Neso. (2012). La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas. Roma: Albatros.

14 de octubre, martes. El país permanecía bloqueado. Hubo un muerto en Santa Cruz durante los enfrentamientos entre movilizados y los partidarios del gobierno. También en Sucre (capital administrativa de Bolivia) hubieron choques que se prolongaron hasta la noche, y una marcha de cerca de 25 mil personas.

En Oruro, los estudiantes pusieron en escena violentas protestas y en Cochabamba un oficial del ejército se arriesgó el linchamiento, luego de haber detenido un estudiante. En Tarija se cerró la frontera con Argentina en Villazón, y en la Paz, decenas de miles de campesinos llegaron desde los Yungas.

Desde Radio San Gabriel, los dirigentes de la FEJUVE dijeron que no habría marcha atrás. Los militares en Patacamaya, sur de La Paz, disparaban contra los mineros en marcha hacia la sede del gobierno. Los llamamientos a negociación del presidente recibieron como respuesta el fragor de la dinamita detonada por los alteños durante la noche. Nicola Neso. (2012). La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas. Roma: Albatros.

16 de octubre, jueves. Se produjeron nuevos choques en Santa Cruz, mientras las otras ciudades del país se quedaban bloqueadas totalmente. Alrededor de medio millón de personas rodeaban las cercanías de la plaza de San Francisco y luego empezaron a moverse hacia la plaza Murillo, la plaza del palacio de gobierno. Llegó finalmente la marcha desde Patacamaya (la dinamita había derrotado el ejército en retirada) y llegaron también los de Oruro y Potosí. Los indígenas del Oriente fueron detenidos fuera de la ciudad por el ejército. Nicola Neso. (2012). La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas. Roma: Albatros.

17 de octubre, viernes. Los cuadros indígenas de las provincias del Norte tomaron el mando de las operaciones. El presidente fue abandonado por sus aliados. Mientras, muchos de los quinientos mil (eran más: habían llegado todas las marchas de todos los rincones del país) que atestaban la plaza de San Francisco llevaban armas y pasamontañas, listos para la batalla final. Aún si no fuera necesario: a pesar de que hubieron choques en la ceja de El Alto, los movilizados lograron alcanzar la plaza

Murillo sin pelear o disparar. Los soldados los dejaron pasar y hasta se alinearon a ellos.

Antes de huir hacia los Estados Unidos, el Goni retiró alrededor de 200 millones de Bolivianos (más o menos 3 millones de dólares, mucho dinero en Bolivia) de las cajas del Estado. Ahora es todavía huésped del gobierno de Barack Obama, no obstante la solicitud de extradición con acusación de genocidio presentada por el gobierno boliviano. Nicola Neso. (2012). La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas. Roma: Albatros.

El mismo 17 de octubre, luego de huir Sánchez de Lozada, el Congreso eligió presidente el vice Carlos Mesa, histórico político y periodista, que juró sobre la bandera y se hizo la señal de la cruz, sin saber que seis meses después seguiría la misma suerte que el presidente Sánchez Losada.

Las puertas al poder estaban abiertas, para el fundador del MAS (Movimiento al socialismo) y el líder de los coccaleros, Evo Morales. En las elecciones de 2005, ganó las elecciones presidenciales con casi el 54% de los votos. Nicola Neso. (2012). La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas. Roma: Albatros.

En este sentido, y según lo expuesto lo anteriormente, el segundo mandato presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada, durante el año 2003, antes de renunciar y dejar intempestivamente su cargo de presidente de la república, convierte su gobierno elegido democrática y constitucionalmente, en un gobierno con las siguientes características, dentro del contexto que se vivió antes de su renuncia.

- Primero, el desorden y la pérdida de legitimidad para la autoridad presidencial se transformaron en depredadores de la estabilidad de cualquier régimen democrático, Lo cual sugiere que el rediseño institucional del Poder Ejecutivo en los próximos cinco años deberá asumir rápidamente la solución de los siguientes problemas: nacionalización Del gas sin traumatizar las relaciones del gobierno elegido con las posibilidades de inversión ex-tranjera directa; una nueva distribución de tierras sin revanchismos y sin burocratización; un nuevo sistema de equilibrios entre el Presidente, los Prefectos elegidos y los 327 gobiernos municipales autónomos; una nueva política antinarcoóticos; y, finalmente, decisiones sólidas para preservar la

estabilidad macroeconómica con acuerdos beneficiosos entre el gobierno y los organismos financieros multilaterales (Coppedge,1993).

- Segundo, el rescate de la gobernabilidad debería entenderse como un elemento constitutivo para proseguir con las reformas del Estado, donde éste vuelva a conquistar centralidad para brindar bienestar a la población, señalando también otros lineamientos en la conducción económica para corregir definitivamente los fracasos de las políticas de capitalización ejecutadas por Sánchez de Lozada.
- Tercero, la demanda por reconstruir un Estado de bienestar regresa con toda su complejidad para convertirse en una exigencia que se concentra, sobre todo, en el despliegue de capacidades de gestión pública para el gobierno, porque dicho Estado benefactor representa un escenario de refugio ante los ojos de grandes sectores de la nación, lo cual también reclama la ejecución de alternativas políticas institucionalmente viables.
- Cuarto, la ingobernabilidad en Bolivia constituyó un grado de capacidad política muy débil para integrar los actores sociales al espacio público y vincularlos con el sistema político democrático-representativo. En consecuencia, la llegada del MAS al poder significa un principio de integración política que debe mantenerse con responsabilidades de largo aliento.

El fracaso estrepitoso del segundo gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada (2002-2003) mostró que las relaciones entre gobernabilidad y economía de mercado fueron de conflicto y distorsiones por corrupción. En Bolivia adoptamos las formas exteriores de las democracias Occidentales y no se asimilaron bien o no se quiso asimilar los fundamentos de aquellas democracias y estructuras de mercado. Nuestro desempeño es específico, no equiparable ni comparable con Europa o Estados Unidos. En muchos casos olvidamos un componente central: la importancia de fortalecer a la sociedad por medio de la participación respecto al rumbo que debe tomar nuestra democracia.

CONCLUSIONES

Hoy día la gobernabilidad en Bolivia plantea esfuerzos importantes, entre los que se destacan cinco elementos substanciales:

- En primera instancia, el impulso y desarrollo de una nueva conciencia nacional, lo cual implica, más allá de enfoques meramente instrumentales, la posibilidad de combinar la Integración social con la integración política.
- En segundo lugar, se encuentra el fortalecimiento de un sistema político como instancia de mediación entre un Estado fuerte y una sociedad movilizadora y politizada que pueda construir en su interior actores sociales autónomos.
- En tercer lugar, la necesidad de trabajar de manera fluida una estructura de relaciones con plena legitimidad entre los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos originarios y movimientos sociales; es decir, cultivar con responsabilidad nuevas formas de relación entre la política y los actores sociales.
- En cuarto lugar, la limitación del poder a través de mecanismos de control social y responsabilización, para castigar la corrupción y todo tipo de arbitrariedades.
- En quinto lugar, la protección de la representatividad junto al pluralismo del sistema político. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es reconocer la limitación del poder político; pensar y transmitir a la sociedad boliviana que siempre hay algo por encima de él. Por otra parte, cuando la dependencia boliviana hacia el exterior es sumamente fuerte, la conciencia de ciudadanía y de pertenencia a una nación parece muy útil, lo cual deberá combinarse con un régimen de gobierno representativo abierto al reconocimiento de prefecturas autónomas. En esta orientación, la gobernabilidad debe articular, a vez, lo autonómico, lo nacional y lo social.

No está demás afirmar que la democracia es un fin en sí mismo. En este momento hay que pensar en la capacidad de no caer, ya sea en las redes falsas del fundamentalismo etnocéntrico, o en el sarcófago de un liberalismo loco, de clientelismo político y corrupción política. ¿Cómo juntar estas metas en una

estrategia gobernable? Por medio de un sistema político integrador, un sistema económico abierto y un sistema social más justo.

Estas propuestas podrían constituir la finalidad central de aquellos que quieren ampliar y apuntalar un verdadero sistema político democrático.

La explicación de la ferocidad con la que actuó el gobierno asesino de Sánchez de Lozada hay que encontrarla en el poder transnacional y en los importantes intereses que se tejieron alrededor de la riqueza del gas, es decir, si bien Sánchez de Lozada fue un cruel asesino que debe ser juzgado como tal cuando asesino lo hizo obedeciendo a un régimen de gobierno que expresó los intereses transnacionales y de un sector minoritario de la sociedad boliviana sin ética, sin honor y sin patria.

En octubre, el pueblo boliviano recompuso el bloque histórico triunfante de 1952 y 1979 contra el superestado petrolero. Esa unidad ya se vislumbró en abril del año 2000, cuando obreros, campesinos y clases medias se enfrentaron al esquema de la capitalización del agua en el gobierno de Banzer.

Los planteamientos étnicos y corporativos de una parte dirigencial e intelectual del movimiento aymara que hablaban de una nación aymara excluyente, quedaron rezagados por la fuerza de los hechos. Los indígenas movilizados en octubre, desplegaron una interpelación nacional, desde los indígenas, para toda la nación boliviana.

En suma, la guerra del gas expresó el verdadero pensamiento del pueblo articulando campo y ciudad por encima de las diferencias en un sólo frente incontenible contra el Estado transnacional. Esta articulación, fue expresión de la superación de la desconfianza y del odio incubado por el poder que separó la nación en dos, tres o cuatro Bolivias, nación camba, nación chapaca, nación aymara que la terminó limitando en su proyección. Se trató de una articulación lúcida, que combinó las luchas coloniales con las luchas antiimperialistas.

Así mismo la guerra del gas expresó la emergencia de un nuevo nacionalismo encarnado en las naciones originarias, obreros y clases empobrecidas que impidió la exportación del gas a través de un puerto chileno, pidió la industrialización del gas en territorio boliviano y, sobre todo, exigió la nacionalización del excedente económico de este recurso, transferido dolosamente a las empresas petroleras transnacionales.

En su plexo geopolítico, octubre cuestionó la estructura continental de dominación imperial, pues al inviabilizar el esquema neoliberal en el país, demostraba la inviabilidad de este modelo impuesto en Latinoamérica. En ese sentido, Bolivia se constituyó en la cabeza política de los países del continente al propugnar cambios en la correlación de fuerzas entre los países explotados y la metrópoli explotadora. En este marco se explicó la idea de una intervención militar externa al país que junto a la desmembración territorial, se constituyeron en dos mecanismos ideológicos dirigidos a detener el proceso de radicalización política del pueblo en torno a la nacionalización del poder y la economía en Bolivia.

En suma, la denominada Guerra del gas de octubre de 2003 en su despliegue, puso en crisis el Estado transnacional, las mediaciones partidarias liberales y la llamada democracia pactada y representativa y constituyó un nuevo proyecto político nacional y popular orientado a reformular los términos del poder en Bolivia a partir de la nacionalización del gas.

El año 2003, la posición Sánchez de Lozada de impulsar la exportación de gas aplicando una política autoritaria y colonial a favor de potencias extranjeras generó la rearticulación más importante de lo nacional en la Guerra del gas.

La Guerra del gas, que tuvo su punto de partida en la denominada Guerra del agua, que fue eminentemente urbana y en las Jornadas de septiembre del mismo año que fue rural, sintetizó abril y septiembre y en su densidad involucró a las clases nacionales fundamentales de la nación boliviana. Los planteamientos étnicos de una parte de la dirigencia aymara quedaron rezagados por la fuerza de los hechos. Los indígenas movilizados desplegaron una interpelación para toda la nación boliviana.

La Guerra del gas en su despliegue dejó convertido en mil pedazos el Estado y las mediaciones partidarias liberales y constituyó un nuevo proyecto nacional y popular.

Octubre no se limitó a pergeñar un conjunto de medidas o a una agenda para regatearle al Estado derechos, sino que conformó un proyecto político orientado a reformular los términos del poder en Bolivia, a partir de la nacionalización del gas.

Un proyecto nacionalizador por doble partida: nacionalización de los recursos naturales y nacionalización del Estado oligárquico y transnacionalizado.

En síntesis, con la Guerra del gas del año 2003 se inició un enfrentamiento de vasto alcance entre la nación boliviana reconstituida y el imperialismo por el excedente económico del gas.

Si llegamos a las conclusiones del trabajo de forma objetiva para apuntalar la hipótesis planteada, debemos remitirnos a una conclusión por cada objetivo planteado, en este sentido se puede mencionar lo siguiente.

Cuando Sánchez de Lozada asume la presidencia en 2002 se enfrenta a una crisis social y económica heredada del anterior gobierno. El crecimiento económico del país bajó de un 4,8% al final de la primera presidencia de Sánchez de Lozada a 2% en 2002. El déficit fiscal al 2002 era del 8%.

En febrero del año 2003 ante el desesperante déficit fiscal el gobierno propone aplicar un impuesto al salario ("impuestazo"), lo cual provoca diversas medidas sociales, como una huelga y el amotinamiento de la fuerza policial, la cual exigía por el contrario, un aumento de salarios. El conflicto deriva en un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la Policía en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz. El retroceso en la medida logró mantener a Sánchez de Lozada en el poder por unos meses más, pero el desgaste y la pérdida de gobernabilidad se hacía cada vez más evidente.

En septiembre y octubre de 2003, ante rumores que nunca fueron desmentidos sobre la intención de exportar gas boliviano por puertos chilenos a la costa oeste de los Estados Unidos, a México y a Chile, empezaron las movilizaciones sociales en el Altiplano boliviano y en la ciudad de El Alto. Fue bloqueada la principal autopista de la ciudad de EL Alto hacia la ciudad de La Paz y la población alteña empezó la protesta. Tanto la ciudad de La Paz como otras ciudades principales sufrieron prolongados bloqueos y desabastecimiento de insumos básicos. Como única respuesta del Presidente, éste autorizó a las fuerzas armadas a poner orden mediante represión lo cual dejó como resultado 64 muertos y 228 heridos.

La profunda crisis económica que afectaba principalmente a los trabajadores urbanos y a la población rural del país alimentó el apoyo a todo tipo de protestas. Finalmente, los manifestantes en la ciudad de La Paz pidieron la renuncia del presidente.

En septiembre y octubre de 2003 se sucedieron manifestaciones promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB) y por la Confederación Sindical Única de

Trabajadores Campesinos de Bolivia, que convocaron un paro general indefinido. El movimiento popular también fue catalizado por el MAS y por el Movimiento Indígena Pachakuti. La revuelta se extendió a las principales ciudades del país (La Paz y El Alto fueron incluso militarizadas por el gobierno), donde el clima era de abierta insurrección, la represión dejó al final de los hechos 68 personas muertas y alrededor de 400 heridos.

Acosado por estos sectores y ante la pérdida de apoyo de los partidos que formaban la coalición de gobierno (MIR y NFR), el 17 de octubre Sánchez de Lozada renunció a la Presidencia de la República mediante carta al Congreso Nacional y abandona el país. Esa misma noche, el Congreso Nacional, luego de aceptar la renuncia de Sánchez de Lozada, tomó el juramento de rigor al Vicepresidente de la República Carlos Mesa, quien a su vez ya antes de asumir como presidente de la República había manifestado de su alejamiento del MNR y repudiar las acciones tomadas por Gonzalo Sánchez de Lozada, mas no se alejaba de su responsabilidad como gobernante ni del pueblo boliviano.

En este sentido, podemos puntualizar lo siguiente a manera de conclusión final:

- En el momento en que Gonzalo Sánchez de Lozada anuncia medidas como el impuestazo y gas por chile, para mitigar la crisis económica reinante, atacando económicamente a sectores pobres y de clase media, como trabajadores fabriles, obreros, campesinos y comerciantes informales entre otros, e hiriendo el civismo y patriotismo de los bolivianos intentando hacer negocios de exportación de gas por tierras chilenas, se desbordan las protestas sociales reflejadas en convulsiones sociales muy complejas y constantes, al ver peligrar la legitimidad de su mandato el presidente hace uso de la fuerza legítima, amparándose en la Constitución Política del Estado, que permite hacer el uso de la misma a un gobernante para evitar la violación de derechos humanos y garantizar el restablecimiento de la paz y el orden público, mantener la vigencia del estado de derecho, salvaguardar el orden y la paz públicos, además, evitar la toma, el destrozo o incendio de la propiedad pública o privada y de instalaciones destinados a los servicios públicos, a fin de garantizar su funcionamiento y el libre tránsito de personas y bienes, también disuadir mediante el racional despliegue de la fuerza a personas que

participan de manera violenta en conflictos que comprometan la paz y el orden público.

De esta forma y con estas acciones en contra de la población, adopta acciones como ser, el autoritarismo, privación de la libertad, encarcelamientos injustificados, control a través del miedo o temor de la población, acciones que son propias de un régimen dictatorial. Entonces no adopta un régimen dictatorial en sí y de forma íntegra, pero adopta algunas características de este.

- Siendo que Gonzalo Sánchez de Lozada asume a la presidencia en 2002, no con una victoria absoluta ni contundente en las elecciones generales de ese mismo año, sino recurriendo a una alianza política en primera instancia con el Movimiento de Inquieta Revolucionario MIR, y en segunda instancia con Nueva Fuerza Republicana NFR, quienes quedaron por detrás del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR en las elecciones del 2002, y siendo que El Congreso con una histórica presencia pluriétnica y multicultural, ratificó con su voto mayoritario al ganador por mayoría relativa, consagrando Presidente a Gonzalo Sánchez de Lozada, ya se divisaba de principio una escasa representación electoral, por el solo hecho de pactar con otros partidos políticos, para así sumar votos y ser elegido gobernante, si bien la alianza política era legal, carencia de legitimidad y apoyo absoluto o mayoritario a un solo partido político, en este caso el MNR.
- Analizando los hechos que acontecieron en 2003 durante la llamada guerra del gas, y tomando en cuenta las características de represión que se utilizaron por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada durante las convulsiones sociales de este mismo año, y en sentido de que este gobierno fue una componenda política entre tres partidos, la debilidad y posterior fragmentación de la coalición MNR-MIR-NFR, se dio principalmente por las acciones represivas en contra de la población por parte de Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente de la República, quien con estas acciones no solo empañó su imagen como autoridad, sino que empañó también la imagen de su partido el MNR, por lo que los partidos de la alianza, prefirieron dar un paso

al costado para no causar el mismo efecto en sí mismos ni en sus partidos políticos, en este sentido actuaron como líderes de partido, lo que llevo al debilitamiento y posterior fragmentación de la alianza.

- La situación económica que heredó Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002 era muy crítica. El 2003 fue el año de inflexión de la economía boliviana. El principal problema era el déficit fiscal. En los gobiernos de Banzer y Quiroga subió de 4,65% a 8,81%. *Fuente. INE.* A pesar de esa realidad, el gasto público se incrementó por la presión del cuoteo político. Al terminar el 2003, el déficit había bajado apenas 0.9 puntos. *Fuente. INE.* Se calcula que en 2003 el contrabando le restó al TGN ingresos por 480 millones de \$US., alrededor de un 5 % del PIB. *Fuente. INE.* Las exportaciones crecieron en un 17% en el periodo 2002-2003. *Fuente. INE.* En tanto, el sistema financiero seguía con dificultades, altos niveles de mora, casi 10.000 juicios a deudores y más de 210 millones de \$US. de propiedades agrícolas entregadas en dación de pago. *Fuente. INE.* La crisis había dejado a la empresa privada local devastada y exhausta, con serias dificultades, gigantescas deudas financieras y también deudas con el estado (impuestos, Afp's y CNS). Dentro de todo este panorama económico, se debería esquematizar un plan para hacer más eficientes las recaudaciones, mediante el incremento de las exportaciones de materias primas y la creación de nuevos impuestos o el incremento de algunos ya existentes principalmente. Es en este sentido que el gobierno plantea por un lado la exportación de gas a México y Estados Unidos, pero por suelo chileno (gas por Chile), y la creación de un impuesto sobre los salarios (impuestazo), dichas decisiones económicas, no hicieron nada más que provocar el descontento de la población en general y desembocar a corto plazo en una situación de caos social, desembocando todo esto en la llamada guerra del gas.

BIBLIOGRAFIA

- Samuel Arriarán, 2007, "La Derrota del Neoliberalismo en Bolivia", México D.F, Primera Edición, Editorial Torrez Asociados.
- Jimena Costa Benavides. (2004). La "Guerra del Gas". Representaciones Sobre Neoliberalismo y Defensa de los Recursos Naturales en la Crisis Política de Octubre de 2003 en Bolivia. La Paz Bolivia: Trébol.
- Javier Díaz Cassou. (2004). "La Crisis Boliviana y la Caída de Sánchez de Lozada". La Paz Bolivia: Fundación CILAE.
- Andrés Dockendorff Valdés. (2007). "Sistema de Partidos y Gobernabilidad Democrática en Bolivia (1985-2005)". La Paz Bolivia: Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.
- José Luis Gálvez Vera. (2002). "Elecciones Presidenciales 2002". La Paz Bolivia: Garza Azul.
- Álvaro García Linera. (2005). "Crisis del Estado y Poder Popular". La Paz Bolivia: Garza Azul.
- Kimberly Inksater. (2005). "Análisis de Conflicto en Bolivia". La Paz Bolivia: Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.
- Roberto Laserna, Miguel Villaroel, 2008, "38 Años de Conflictos en Bolivia", La Paz Bolivia, primera edición.
- Fernando Mayorga. (2007). "Democracia y Reforma Estatal en Bolivia". La Paz Bolivia: CESU - UMSS.
- Rene Antonio Mayorga. (2007). "La Crisis del Sistema de Partidos en Bolivia". La Paz Bolivia: IIPS.
- Isabel Mercado. (2012). "30 Años de Democracia en Bolivia". La Paz Bolivia: Pagina Siete.
- Stanley Moore. (2002). "Teoría del origen de la dictadura". Barcelona España: Península
- Nicola Neso. (2012). "La Guerra del Agua Hasta La Guerra del Gas". Roma: Albatros.
- Juan Carlos Núñez. (2008). "25 Años de Democracia". La Paz Bolivia: Jubileo Bolivia.

- Ricardo Paz Ballivian. (2003). "La Crisis del Estado en Bolivia". La Paz Bolivia: Garza Azul.
- Lorenzo Peña, 2009, "Dictadura, Democracia, República, un Análisis Conceptual", Toluca México, Primera Edición.
- Raúl Peñaranda, Isabel Mercado, Boris Miranda, Clara Berrios, 2012, "30 Años de Democracia en Bolivia", La Paz Bolivia, (Pág. Siete), Fundación UNIR/FES-ILDIS.
- Álvaro Rico, "Los Usos de la Dictadura en la Democracia Pos Dictadura y las Formas de Dominación por el Consenso"
- José Antonio Rivera, "La Evolución Político Institucional en Bolivia entre 1975 a 2005".
- Gene Sharp. (2003). "De la dictadura a la democracia". Estados Unidos. Institución Albert Einstein.
- Ricardo Sanjinés Ávila, 2005, "La Democracia Bajo Fuego", La Paz Bolivia, Primera Edición, editorial Garza Azul.
- Esteban Ticona Alejo, 2008, "La Rebelión Aymara y Popular de Octubre de 2003", La Paz Bolivia, Primera Edición.
- Humberto Vacaflor Ganam. (2002). "El Escenario Pos Electoral en Bolivia". La Paz Bolivia: Garza Azul.
- Carlos Villegas Quiroga. (2004). "El Movimiento Social y la Caída de Sánchez de Lozada". La Paz Bolivia: Plural.
- María Teresa Zegada Claire. (2002). "Elecciones Presidenciales 2002". La Paz Bolivia: Garza Azul.